

Retos a la **JUSTICIA:** Desigualdad social y conflictos ecológicos

Joan Martínez Alier, Joan Benach, Montse Vergara,
Carles Muntaner, José Vicente Barcia Magaz

Diálogo

Crisis alimentaria
mundial

Entrevista

Federico Aguilera Klink

Foto: PAULO SANTOS



Director - Santiago Álvarez Cantalapiedra

Jefa de redacción - Mária Martínez Ramírez

Consejo de redacción - Paco Fernández Buey, José Manuel Naredo, Gaby Oré Aguilar, Óscar Carpintero, Tanja Bastia, Carlos Montes, Helena Villarejo, Yayo Herrero, Javier Gutiérrez Hurtado, Nieves Zúñiga

Comité asesor - Daniele Archibugi, Pedro Ibarra, Isabell Kempf, Michael T. Klare, Bichara Khader, Saul Landau, Maxine Molyneux

Papeles es una publicación trimestral del Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial), que forma parte de FUHEM.

Duque de Sesto, 40, 28009 Madrid
Tel. (+34) 91 576 32 99 - Fax (+34) 91 577 47 26
cip@fuhem.es
www.cip.fuhem.es
www.revistapapeles.fuhem.es

Venta y suscripciones

Tel. (+34) 91 431 03 46 / 04 06
publicaciones@fuhem.es

Revisión - Mónica Lara del Vigo

Publicidad - Ana Belén Martín

Diseño original de la maqueta - Alicia Núñez Morales

Foto portada - Paulo Santos. Impacto de una serrería sobre el entorno natural en un municipio de Tailandia.

I.S.S.N. - 1888-0576

Depósito legal - M-30281-1993

© FUHEM. Todos los derechos reservados.

Para solicitar autorización de reproducción de artículos, escribir a CIP-Ecosocial.

Las opiniones de los artículos publicados no reflejan necesariamente las del Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) y son responsabilidad de los autores.

Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España, para la totalidad de los números editados en el año 2008.

Impreso en papel ecológico como parte de la política de buenas prácticas en materia de sostenibilidad de FUHEM.

INTRODUCCIÓN 5

ESPECIAL: JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL

- Conflictos ecológicos y justicia ambiental** 11
Joan Martínez Alier
- Desigualdad en salud: la mayor epidemia del siglo XXI** 29
Joan Benach, Montse Vergara y Carles Muntaner
- La persecución de los cuidadores: Criminalización del Movimiento Ecologista** 41
José Vicente Barcia Magaz
-

PANORAMA

- Ciudades, globalización y exclusión social: apuntes para la reflexión** 55
Carlos Gómez Gil
- La inmigración en España: racismo institucional y racismo social** 75
Edoardo Bazzaco
- Rusia y EEUU en el Cáucaso occidental: lecciones de una crisis** 85
Carlos Taibo
-

PERISCOPIO

- Dimensiones de la inmigración en España. Impactos y desafíos** 95
Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada

SUMARIO

ENTREVISTA

- Entrevista con Federico Aguilera Klink sobre la nueva economía del agua** 107
Salvador López Arnal
-

DIÁLOGO

- Diálogo entre Andoni García y Jaime Lillo**
La crisis mundial de los alimentos. Causas, consecuencias y posibles soluciones 119
Mónica Lara del Vigo
-

LIBROS

- Aprender a mirar la salud. Cómo la desigualdad social daña la salud** de Joan Benach y Carles Muntaner 137
Óscar Carpintero
- Planeta de ciudades miseria** de Mike Davis 141
Fco. Javier Gutiérrez Hurtado
- El final de la era del petróleo barato** de Joaquim Sempere y Enric Tello 143
Salvador López Arnal
- Potencialidades y limitaciones del codesarrollo** de Carlos Gómez Gil / **La ilegitimidad de los créditos FAD. Treinta años de historia** de Carlos Gómez Gil (dir.), Dani Gómez Olivé (coord.), Gemma Tarafa 146
Ángel Martínez González-Tablas

INTRODUCCIÓN

La historia nos muestra que a medida que el capitalismo se extiende y profundiza, las condiciones sociales y ambientales sufren un vuelco: a la vez que desata capacidades insospechadas, discurre de manera destructiva y violenta. Conviene no cerrar los ojos a la idea marxiana de que el capitalismo genera esta dinámica contradictoria.

Es cierto que, mientras fluyen las mercaderías y el mercader ejerce su poder embaucador, es difícil percibir el precio real que hay que pagar por lo que se ofrece envuelto en oropeles. Pero cuando los acontecimientos empiezan a sembrar dudas, como en el momento presente, surge la oportunidad de ver las cosas de otra manera. Es entonces cuando se cree al niño que grita que el rey está desnudo.

El mercado se ha convertido en el eje articulador de la vida social. Abandonó con el capitalismo el simple papel de institución que facilita el intercambio y amplió su influencia a costa de arrebatar a otras instancias la capacidad de organizar la sociedad. Afirma Polanyi: “El mercado es un buen sirviente, pero un pésimo amo”, advirtiendo del riesgo de dislocación social que se origina cuando reina incontestado.

La expansión progresiva del mercado no ha supuesto únicamente una confrontación con otras organizaciones alternativas en la lucha por ejercer el poder. El mercado también se ha enfrentado a lo largo del tiempo a agrupaciones de individuos que ni siquiera trataban de disputar dicho poder, sino simplemente de defenderse debido a que su implantación les obligaba a renunciar a formas tradicionales de vida y les infringía elevados costes de desarraigo y una enorme inseguridad vital. La acción resistente a lo largo de la historia de comunidades, cofradías,

mutualidades, fraternidades, gremios, sindicatos, ha sido la manifestación más patente de la existencia de estos conflictos sociales.

El ecologismo representa también una reacción frente a las amenazas que se derivan del sistema económico. El productivismo y el consumismo minan las condiciones que permiten el desarrollo y la reproducción de la vida humana en la tierra. El deterioro de la naturaleza que provoca la expansión de la actividad económica por todos los lugares del mundo genera, también por todas partes, protestas y resistencias de sectores sociales y poblaciones enteras que ven amenazadas las condiciones materiales de su existencia. Pero los estilos de vida actuales destruyen también los ecosistemas que las futuras generaciones ya no podrán disfrutar, y ocupan cada vez más espacio arrinconando y eliminando a otras especies. Late ahí, pues, un conflicto ambiental que no se desarrolla únicamente entre los miembros de la especie humana perteneciente a una misma generación.

Surge así planteada, como el problema político clave del incipiente siglo XXI, la cuestión de la justicia social y ambiental, a escala local y global. Un aspecto crucial en la organización de cualquier sociedad es cómo se reparten los recursos y la riqueza disponible, y cómo se distribuyen los costes sociales y ecológicos asociados a su obtención y uso. El Especial de este número intenta aproximarse a este debate.

Joan Martínez Alier señala que los conflictos ambientales surgen del enfrentamiento existente entre la evolución de la economía y el medio ambiente. La “economía ecológica” –que contempla el proceso en términos de metabolismo– nos ayuda a comprender este enfrentamiento. A su vez, la “ecología política” muestra los conflictos distributivos que brotan del comercio ecológicamente desigual, la deuda ecológica del Norte con el Sur, los pasivos ambientales de las empresas, las bioinvasiones o la biopiratería. En consecuencia, si vemos las economías desde el enfoque del «metabolismo social», podremos percibir más claramente cómo –según el «perfil metabólico» de cada economía– se generan y manifiestan los diversos conflictos ambientales. Las luchas y resistencias que se enmarcan en ellos forman parte de lo que Alier llama “ecologismo popular”, “ecologismo de los pobres” o “movimiento de justicia ambiental”. Son resistencias, locales y globales, contra el abuso de la naturaleza y la pérdida de vidas humanas que, expresándose en distintos lenguajes, contribuyen a sacar a la luz pública los daños socioecológicos.

Pero este activismo social no está exento de dificultades. La aportación de José Vicente Barcia denuncia la persecución a la que se encuentra sometido el movimiento por la justicia ambiental. Cuando el poder económico ve comprometidos sus intereses, se inicia una estrategia de represión que –a través de diversas fórmulas: estigmatizar al denunciante, culpabilizar a la víctima, neutralizar el discurso o, directamente, criminalizar al resistente– conduce a deslegitimar socialmente al movimiento y la causa ecologista.

Con Joan Benach, Montse Vergara y Carles Muntaner nos introducimos en lo que constituye el núcleo incuestionable de la idea de justicia: la igualdad. Ello lleva a rechazar cualquier desigualdad con origen en diferencias biológicas (sexo, color de la piel, talentos naturales) o sociales (el lugar de nacimiento o la clase social), y sólo a admitir aquellas que son el resultado de acciones que son elegidas responsablemente. El capitalismo se traduce en un desigual acceso a la riqueza y en un reparto también profundamente asimétrico de los costes sociales y ambientales, lo que supone distribuciones incompatibles con la tesis «ninguna desigualdad sin responsabilidad». Le gustaba señalar al economista recientemente fallecido, David Anisi, que todos los individuos parten de una igualdad básica: disponer de un día que para todos tiene el mismo número de horas. Sólo el ejercicio del poder permite a algunos apropiarse del tiempo de los demás. Y por eso la manifestación más descarnada del dominio sobre un ser humano es la de disponer de su vida. Estamos lejos de ser iguales en presencia de la salud y de la muerte. Hay vidas truncadas por la desigualdad. Por ser evitable, esa muerte prematura es una injusticia. Por ello la desigualdad importante no es la de la mortalidad, sino la de la mortalidad eludible.

Una de las causas de la desigualdad es el racismo institucionalizado en una sociedad. En la sección Panorama, Edoardo Bazzaco, responsable del informe que elabora anualmente la organización SOS Racismo, analiza la naturaleza racista de la normativa con la que se pretende regular el flujo de inmigrantes en nuestro país y el racismo social que aún impera en relación con la población gitana. Las migraciones constituyen un elemento crucial de la realidad actual al que dedicaremos el próximo Especial de la revista. El colectivo lo anticipa en este número, a través del Periscopio, una visión de las dimensiones del fenómeno en nuestro país y de los impactos y retos que plantean para la cohesión social.

Carlos Gómez Gil ofrece –también en la sección Panorama– unos apuntes sobre los riesgos y desafíos que deben afrontar las ciudades contemporáneas en relación con la globalización. El tipo de inserción que se logre y las políticas urbanas de cohesión que se adopten, constituyen los elementos centrales de una estrategia preocupada por evitar las fracturas y las dualidades sociales que el carácter sesgado de la globalización está produciendo en las ciudades. Se cierra este apartado de la revista con una contribución de Carlos Taibo, quien proporciona valiosas claves para comprender los oscuros acontecimientos de la guerra acaecida en el Cáucaso el pasado agosto y los papeles en ella desempeñados por Rusia y los EE.UU.

Con las secciones Entrevista y Diálogo se retoma, en cierto modo, el hilo que ha motivado el Especial. En la entrevista que Salvador López Arnal realiza a Federico Aguilera acerca de la necesidad de una nueva cultura del agua, se señala que en el origen de muchos de los conflictos que surgen en torno a la gestión de éste y otros recursos se encuentra, además de una lógica económica depredadora, unas estructuras de decisión política autorita-

rias que, conniventes con los intereses económicos, no solamente deterioran la naturaleza, sino también, como es evidente, a la propia democracia. En el Diálogo se muestran posiciones diferenciadas en la interpretación de las múltiples causas que, entrelazadas, provocaron recientemente una crisis mundial alimentaria de trágicas consecuencias para millones de personas.

La revista se cierra, como es habitual, con las reseñas de una selección de libros que, a buen seguro, permitirán continuar la reflexión sobre los temas aquí tratados.

Santiago Álvarez Cantalapiedra
Director

JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL

Conflictos ecológicos y justicia ambiental 11
Joan Martínez Alier

Desigualdad en salud: la mayor epidemia del siglo XXI 29
Joan Benach, Montse Vergara y Carles Muntaner

**La persecución de los cuidadores:
Criminalización del Movimiento Ecologista** 41
José Vicente Barcia Magaz

Especial

JOAN MARTÍNEZ ALIER

Conflictos ecológicos y justicia ambiental

La economía ecológica ve la economía como un sistema abierto a la entrada de energía y materiales y a la salida de residuos entre los cuales está el dióxido de carbono. La ecología política estudia los conflictos distributivos ecológicos. Trata temas como el comercio ecológicamente desigual, la deuda ecológica del Norte con el Sur, los pasivos ambientales de las empresas papeleiras, mineras o petroleras por los daños que han producido, el conocimiento indígena y el manejo de las incertidumbres científicas o el papel de los movimientos ecologistas (tan distinto en América latina y Europa). A lo que debemos añadir la historia de las bioinvasiones (por ejemplo, "la plaga de las ovejas" en el México colonial que analizó Elinor Melville) y la historia y actualidad de la biopiratería.

La economía ambiental de origen neoclásico explica las externalidades (es decir, efectos negativos o a veces positivos no recogidos en los precios del mercado) como "fallos del mercado". Así, si el cultivo de soja y la aplicación masiva de glifosato afecta a la salud de poblaciones humanas, eso es un fallo del mercado que no otorga precio a esos daños. Similarmente, si el crecimiento económico basado en la quema de combustibles fósiles causa un aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y por tanto un cambio climático, eso se debe a que los precios están mal puestos. Se trata de fallos del mercado que, según este enfoque, podrían ser corregidos con impuestos o con permisos de contaminación negociables.

Otros autores, muy reacios a la intervención estatal, prefieren ver las externalidades como "fallos del gobierno", fracasos de los gobiernos que no se ponen de acuerdo para establecer normas ambientales internacionales, o que no aciertan a imponer una estructura de derechos de propiedad sobre el ambiente, o que subsidian actividades nocivas.

Pero hay otra línea de pensamiento en estas cuestiones. ¿De dónde nacen las externalidades? Desde la economía ecológica prestamos atención

Joan Martínez Alier es catedrático de Economía e Historia Económica de la Universitat Autònoma de Barcelona

al crecimiento de los flujos de energía y de materiales en la economía, y a la salida de residuos. Es la perspectiva del metabolismo de la sociedad, que Marx mencionó en *El Capital* (acudiendo a los estudios de Liebig sobre el guano de Perú y los nutrientes agrícolas) pero que ni él ni el resto de los marxistas desarrollaron, de manera que no existe una historia ambiental-económica-social marxista.

El enfoque del metabolismo social se ha desarrollado desde los años sesenta por Nicholas Georgescu-Roegen, Robert U. Ayres, Herman Daly, René Passet, Manfred Max-Neef, Víctor Toledo, José Manuel Naredo y su discípulo Óscar Carpintero, Marina Fischer-Kowalski y su grupo en Viena, John McNeill, Mario Giampietro, Roldán Muradian, Jesús Ramos Martín, Fander Falconí, María Cristina Vallejo, Mario Alejandro Pérez Rincón, Walter Pengue y otros en la economía ecológica, la ecología industrial, la agroecología y la historia ambiental. Los principales métodos para estudiar el metabolismo social son la contabilidad de los flujos de energía y materiales (MEFA, por sus siglas en inglés), la contabilidad de la Apropiación Humana de la Producción Primaria Neta (HANPP) –ya que al crecer la HANPP disminuye seguramente la biodiversidad– y el cálculo del agua “virtual”.¹

Al poner atención en el metabolismo de la sociedad, las externalidades no son ya esporádicos fallos del mercado o fallos de la acción gubernamental, sino que adquieren carácter sistémico inevitable. La economía humana es un subsistema de un sistema físico más amplio. La economía recibe recursos (y a menudo los explota más allá de su capacidad de regeneración) y produce residuos. No existe una economía circular cerrada. Los perjudicados no sólo son otras especies no-humanas y las próximas generaciones de humanos (que no pueden protestar) sino que a menudo son también gente pobre, que protesta. De ahí la penetrante frase de Enrique Leff hace ya veinte años en un acápite de su libro *Ecología y Capital*: “Del análisis marginalista de las externalidades a la acción de los grupos ambientalistas marginados”.

El mercado no garantiza el ajuste ecológico

Hay protestas sociales debido a que la economía deteriora la naturaleza. A veces los afectados son generaciones futuras que no pueden protestar porque aún no han nacido, o unas ballenas que tampoco van a quejarse. Pero otras veces los desastres ecológicos afectan también a personas actuales que protestan. Son luchas por la justicia ambiental, luchas del ecologismo de los pobres.

¹ Ver, por ejemplo, M. Fischer-Kowalski y H. Haberl, (Eds.), *Socio-Ecological Transitions*, prefacio de J. Martínez-Alier y E. Elgar, Cheltenham, 2007, donde se aplica el MEFA histórica y actualmente. En cuanto al cálculo de agua “virtual”, la vanguardia de la investigación está en el grupo de Hoekstra en Delft, Holanda.

Paradójicamente, el ecologismo popular ha estado creciendo mientras también lo hacía la ola económica neoliberal desde 1975 o 1980 (triumfo de Pinochet, Thatcher, Reagan). El cálculo del PIB oculta más de lo que enseña. Se ensalza al mercado como mecanismo racional de asignación de recursos, e incluso se explica que los problemas ecológicos surgen de la ausencia de racionalidad mercantil privada, como en el caso de la mal llamada “tragedia de los bienes comunales”. Por el contrario, el punto de vista ecologista nos lleva a dudar de los beneficios del mercado.

El mercado no garantiza que la economía encaje en la ecología, ya que el mercado infravalora las necesidades futuras y no cuenta los perjuicios externos a las transacciones mercantiles, como ya señaló Otto Neurath contra Von Mises y Hayek en los inicios del famoso debate sobre el cálculo económico en una economía socialista en la Viena de 1920. Ahora bien, si el mercado daña a la ecología, ¿qué ocurrió en las economías planificadas? No sólo han supuesto una explotación de los trabajadores en beneficio de una capa burocrática sino que, además, han tenido una ideología de crecimiento económico a toda costa, una gran ineficiencia en el uso de recursos (debido en parte a la ausencia de incentivos que el mercado proporciona) y, además, les ha faltado la posibilidad, por ausencia de libertades, de tener grupos ecologistas que contribuyeran con sus acciones a incrementar los costos que empresas o servicios estatales deben pagar cuando destrozan el ambiente. Así pues, la desaparición de esos regímenes debe abrir buenas perspectivas para el ecosocialismo del siglo XXI y, especialmente, para el ecologismo de los pobres y el ecofeminismo. Los marxistas de la vieja izquierda han de reciclarse, si viven todavía, pero los neoliberales no han ganado. Mientras el eslogan de la socialdemocracia *keynesiana* sobre “desarrollo sostenible”² está en crisis porque el crecimiento económico no es ya sostenible, hoy surge en Europa el movimiento del decrecimiento económico que sea socialmente sostenible.

El ecologismo popular

En el ecologismo o ambientalismo hay diversas corrientes. Hay una tendencia llamada “ecología profunda”, que se preocupa sólo de la naturaleza. Por ejemplo, hay quienes luchaban y luchan contra represas en cañones hermosos del oeste de EEUU que iban a ser inundados por estas construcciones. Incluso alguno dijo que se dejaría morir allí. Es admirable. Luchaban solamente por la naturaleza, no por las personas. En Brasil hay en cambio el movimiento popular que se llama *atingidos por barragens*, es decir, los afectados por represas. En la India, hay una lucha (ya casi perdida) contra un famoso dique en el río Narmada,

² En el *Informe Brundtland*, elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, se utilizó por primera vez el término “desarrollo sostenible”.

y allí la gente protesta en defensa del río pero también en defensa de la gente. Porque si completan esta obra, 40.000 o 50.000 personas se tienen que ir de ese lugar. La líder se llama Medha Patkar. Ella no piensa sólo en la naturaleza, piensa también en la gente pobre. Son grupos que necesitan su territorio para vivir, porque si se van de allí, morirán de hambre. Lo mismo ocurre con los desplazados por las minas o presas en otros estados de la India. Este ecologismo popular a veces está protagonizado por grupos indígenas supervivientes, como las protestas de los Embera Katío en la represa de Urrá en Colombia, o las reclamaciones mapuches contra Repsol en Argentina.

Las fronteras de extracción de mercancías o materias primas están llegando a los últimos confines. Por ejemplo, la frontera del petróleo ha llegado hasta Alaska y la Amazonía. Pero en todos los lugares del mundo hay resistencias. Podemos llamarlas ecologismo popular, ecologismo de los pobres o movimiento de justicia ambiental. Las comunidades se defienden. Muchas veces las mujeres están al frente de esas luchas. Por ejemplo, vemos muchos casos alrededor del mundo de defensa de los manglares contra la industria camaronera de exportación. Los consumidores de camarones no saben ni quieren saber de dónde viene lo que comen. Lo mismo ocurre en la minería. Las comunidades se defienden apelando a los derechos territoriales indígenas bajo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como en junio de 2005 en Sipakapa (Guatemala), o tal vez organicen consultas populares exitosas contra la minería a cielo abierto.

Hay también casos históricos de resistencia antes de que se utilizara la palabra ecologismo. Por ejemplo, en la minería de cobre en Ashio (Japón) hace cien años o en Huelva contra la contaminación causada por la empresa Río Tinto que culminó en una matanza a cargo del ejército el 4 de febrero del 1888. Ese podría ser el Día del Ecologismo Popular, el 4 de febrero. La memoria de tales sucesos nunca se perdió. Hubo los “humos” de Río Tinto en Andalucía como hubo, algo más tarde, los “humos” de La Oroya en Perú.

La economía mundial no se “desmaterializa”. Al contrario. Se saca siete veces más carbón en el mundo hoy que hace cien años, aunque en Europa haya bajado la extracción de este material. A veces se trata de insumos esenciales para la economía. A veces se trata de productos superfluos. Hay conflictos en la minería de cobre, de uranio, de carbón y en la extracción y transporte de petróleo, pero también hay conflictos en la minería de oro y por la defensa de los manglares contra la industria camaronera.

Existe desde hace tiempo un ecologismo popular, aunque a primera vista parece que el ecologismo es un movimiento de la clase media de algunos países ricos que creció a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Digamos, a partir del excelente libro de Rachel Carson *La primavera silenciosa*, publicado en 1962. Sin embargo, existen movimientos sociales relacionados con la supervivencia que son movimientos ecologistas –cual-

quiera que sea el idioma en que se expresan— en cuanto que sus objetivos son definidos en términos de las necesidades ecológicas para la vida: energía (incluyendo las calorías de la comida), agua, espacio para albergarse. También son movimientos ecologistas porque tratan de sacar los recursos naturales de la esfera económica, del sistema de mercado generalizado, de la racionalidad mercantil, de la valoración crematística, para mantenerlos o devolverlos a la *oikonomia* (en el sentido con que Aristóteles usó la palabra, parecido a ecología humana, opuesto a crematística).

Para algunos, el ecologismo sería únicamente un nuevo movimiento social monotemático propio de sociedades prósperas, típico de una época posmaterialista, según la tesis de Ronald Inglehart. Hay que rechazar esa interpretación. En primer lugar, el ecologismo —con otros nombres— no es nuevo. En segundo lugar, las sociedades prósperas, lejos de ser posmaterialistas, consumen cantidades enormes y crecientes de materiales y de energía y, por tanto, producen cantidades crecientes de desechos ya sea a causa de la producción propia o, en parte, como consecuencia de los intercambios comerciales.

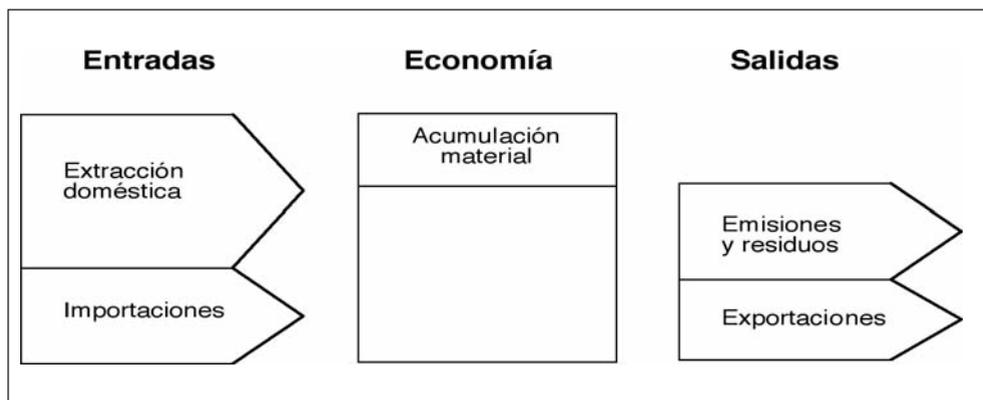
Ahora bien, la tesis de que el ecologismo tiene raíces sociales que surgen de la prosperidad se podría plantear precisamente en términos de una correlación entre riqueza y producción de desechos y agotamiento de recursos. El movimiento antinuclear sólo podía nacer allí donde el gran consumo de energía llevó a la construcción de centrales nucleares, también por un interés militar. El movimiento por la recogida selectiva de basuras urbanas sólo podía nacer donde las basuras están llenas de plásticos y papel, y donde hay razones para inquietarse por la producción de dioxinas al incinerarlas. Sería absurdo negar ese ecologismo de la abundancia. Pero también existe un ecologismo de los pobres, que pocos habían advertido hasta el *movimiento chipko* en el Himalaya en la década de 1970 y el asesinato de Chico Mendes en Brasil a finales de 1988. La necesidad de supervivencia hace a los pobres conscientes de la necesidad de conservar los recursos. Esta consciencia no utiliza el lenguaje de la ecología científica, sino lenguajes locales como los derechos territoriales indígenas o lenguajes religiosos.

Flujos materiales de la economía

Una aproximación de la presión sobre el ambiente, como consecuencia de las actividades económicas dentro del territorio nacional, se puede medir utilizando la metodología de contabilidad de flujos materiales (*Material Flow Accounting*, MFA), que en la actualidad forma parte de las estadísticas oficiales de la Unión Europea (Eurostat 2001 y 2002) y se prevé también que se incorpore en las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El MFA mide en unidades físicas de peso, por lo general en toneladas métricas, los materiales primarios extraídos del territorio nacional agrupados en

biomasa, minerales y combustibles fósiles, así como también los productos importados y exportados (Figura 1). Posteriormente, a partir de esta información cuantitativa, se pueden calcular indicadores de flujos materiales, que permiten tener una representación de la realidad ambiental a escala nacional en relación directa con el sistema económico. Esta información es relevante para la evaluación de tendencias y el planeamiento estratégico de la política económica y el ordenamiento territorial.

Figura 1: Modelo básico del MFA



Fuente: Eurostat (2001)

En el caso de España, y por lo menos hasta 2008, se comprueba que la economía no se “desmaterializa” ni tan sólo en términos relativos al PIB. Esto ha sido estudiado por Óscar Carpintero, Cristina Sendra y otros autores. Esta tendencia de crecimiento material acelerado es similar a la de países latinoamericanos³ y también a la de la India y China, donde se observa una tendencia creciente en la intensidad material, donde cada vez se necesitan más kilogramos para producir un euro en la economía, una dirección opuesta al paradigma de la desmaterialización y el desarrollo sostenible.

Comercio ecológicamente desigual

Podemos distinguir dos tipos de mercancías: las “preciosidades” de alto precio por unidad de peso (oro, plata, marfil, pimienta, diamantes) y las materias primas o mercancías a gra-

³ D. Russi, A. C. González, J. C. Silva-Macher, S. Giljum, M. C. Vallejo y J. Martínez-Alier, “Material Flows in Latin America: A Comparative Analysis of Chile, Ecuador, Mexico and Peru (1980-2000)”, *Journal of Industrial Ecology*, 2008.

nel (*bulk commodities* las llamó Wallerstein). Inicialmente, los medios de transporte no permitían exportar a las metrópolis grandes volúmenes de poco valor unitario, a menos que el propio barco (de madera de teca, por ejemplo) fuera el bien exportado. Poco a poco eso fue cambiando. El guano de Perú y el nitrato de Chile (de 1840 a 1914) fueron materias primas importantes para el aumento de la productividad agrícola de los países importadores.

Europa se abastecía de carbón hasta la II Guerra Mundial, hoy importa grandes cantidades de petróleo y gas, igual que EEUU. Estas importaciones son esenciales para el metabolismo de las economías ricas del mundo. Cuando las importaciones son combustibles fósiles, su contrapartida son emisiones de dióxido de carbono. Las economías ricas nunca han sido tan dependientes de las importaciones como ahora.

Puede parecer que la incidencia del ecologismo de los pobres es sólo local, pero también comprende aspectos internacionales. Los daños de la exportación de petróleo, fosfatos y gas de África a Europa, también del guano y la harina de pescado de Perú y del quebracho colorado de Santa Fe y el Chaco (Argentina), la vorágine del caucho o de la soja, hoy en día están presentes en la conciencia popular. El sacrificio de la seguridad alimentaria, ya sea por las exportaciones a costa de la producción local o por la importación que arruina la agricultura campesina, también lo está.

María Cristina Vallejo, siguiendo los pasos de Fander Falconí, ha calculado las cifras correspondientes para Ecuador, un país que tiene un déficit comercial físico con sus exportaciones de petróleo, bananos, harina de pescado y productos forestales. Por persona y año, cada ecuatoriano consume unas cuatro toneladas de materiales (de las cuales solamente 0,3 toneladas son importadas). Las exportaciones ascienden a 1,6 toneladas por persona y año. En cambio, en la Unión Europea, el consumo por persona y año es de casi 16 toneladas, de las cuales 3,8 son importadas. Las exportaciones europeas son solamente de 1,1 toneladas por persona y año.⁴ Los términos de intercambio perjudican a los países que exportan materias primas, incluso en estos últimos años de cierto aumento de precios. Vemos que la Unión Europea importa (en toneladas) casi cuatro veces más que exporta. Por tanto, importa barato y exporta caro, mientras que muchos países del Sur siguen religiosamente “la regla de San Garabato”, “compre caro y venda barato”. Colombia exporta unos 70 millones de toneladas al año (incluyendo mucho carbón) e importa 10 millones.⁵ En países grandes, el comercio ecológicamente desigual se establece también entre regiones. Así, en la India hay zonas sacrificadas a la explotación minera en los estados de Orissa, Chatisgarh

⁴ M. C. Vallejo, *La estructura biofísica de la economía ecuatoriana: el comercio exterior y los flujos ocultos del banano*, Flacso–Abya Yala, Quito, 2006, p. 123.

⁵ M. A. Pérez Rincón, *El comercio exterior de Colombia. Una mirada desde la economía ecológica*, Universidad del Valle, Cali, 2007.

y Jarkhand, muchas veces en zonas tribales. Hay un excelente estudio sobre la deuda ecológica de la cual son acreedores los pueblos empobrecidos de Orissa.⁶

El metabolismo de las sociedades ricas no se podría sostener sin conseguir a precios baratos los recursos naturales de los proveedores de materias primas. Es una condición estructural. Esas exportaciones baratas del Sur se consiguen pagando poco (ya que en general los pobres venden barato) y prescindiendo de los costos ambientales. Además, la capacidad de exigir pagos de la deuda externa ayuda a los países ricos a forzar a los pobres a la exportación de recursos naturales baratos.

¿Qué esquemas podrían usarse para hacer el comercio internacional más equitativo y menos dañoso ecológicamente? Uno sería establecer ecoimpuestos sobre externalidades locales y globales, e impuestos sobre el agotamiento de ese capital natural. Ampliar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a otros Estados (México) y al gas y al carbón (Colombia), ayudaría. Ninguna teoría económica apoya la idea de que los recursos agotables (tanto los no-renovables como los renovables, que también se agotan) deban venderse al costo marginal de la máxima extracción actual posible. La existencia de un monopolio u oligopolio, y el poner ecoimpuestos sobre las exportaciones, lleva a una mejor asignación intertemporal de los recursos naturales agotables pues, al aumentar el precio actual, se logra un menor consumo actual. El dinero que se conseguiría con los ecoimpuestos podría financiar el Banco del Sur, dedicado a una política de combate a la pobreza y de impulso a una economía ecológica y solidaria.

Tras la reunión de Johannesburgo en 2002, diez años después de Río de Janeiro, escribí irreverentemente que había un extraño “eje internacional del dióxido de carbono” compuesto por EEUU, Arabia Saudí y Venezuela. La OPEP no ha querido hablar del cambio climático, se pone a la defensiva. Pero el presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso el 18 de noviembre de 2007 a esta organización un impuesto ecológico a las exportaciones de petróleo apoyándose en el discurso de 2001 de Herman Daly.⁷

Los pasivos ambientales de las empresas

Vemos en muchos lugares del mundo surgir reclamaciones contra empresas bajo la Alien Tort Claims Act (ATCA) de EEUU, como fue el caso de la Southern Peru Copper Corporation. En la Amazonía hay comunidades que resisten contra las empresas petroleras

⁶ S. Khatua y W. Stanley, *Ecological Debt: a case study from Orissa*. En: www.deudaecologica.org

⁷ H. Daly, “Sustainable development and OPEC”, en *Ecological Economics and Sustainable Development*, Edgard Elgar, Cheltenham, 2007. Ver “El impuesto Daly-Correa” de L. Gallardo, K. Koenig, M. Christian y J. Martínez Alier, en la página web de *Ecoportal* y en *Le Monde Diplomatique*, abril de 2008.

como Texaco, Repsol u otras. Un caso judicial enfrenta a comunidades indígenas y colonos de la Amazonía norte de Ecuador a la compañía Texaco (ahora Chevron) desde 1993, y otro caso judicial enfrenta a indios peruanos Achuar contra Oxy.

Hay otros conflictos por residuos producidos en los procesos de producción. Por ejemplo, conflictos sobre los residuos nucleares que son un subproducto de la producción de electricidad. ¿Dónde colocarlos? De ahí la disputa sobre el depósito de Yucca Mountain en Nevada, EEUU. ¿Quién responde de esos pasivos ambientales?

A medida que la economía crece, usa más materiales y más energía. La ciencia económica convencional no ve la economía en términos del metabolismo social. Ni la contabilidad empresarial ni la contabilidad macroeconómica restan los pasivos ambientales que les son invisibles. En cambio, la economía ecológica critica la economía convencional porque ésta se olvida de la naturaleza en las cuentas económicas, sean de las empresas o del gobierno. La economía ecológica propone considerar los aspectos biológicos, físicos, químicos y también sociales.

El metabolismo de las sociedades ricas no se podría sostener sin conseguir a precios baratos los recursos naturales de los proveedores de materias primas

Hay lugares donde se plantan miles de hectáreas de pino para capturar dióxido de carbono europeo (nuestro mayor residuo, en volumen), como en el proyecto FACE en los páramos de Ecuador, donde algunas comunidades protestan porque no pueden comerse los pinos, no pueden sembrar ni poner ganado, el pino agota el agua que hay en los páramos y, si además hay un incendio, el contrato les obliga a replantar.

Existe una nueva institución: el referéndum ambiental local. Parece haber nacido en Tambogrande, en Piura (Perú), en 2000-2002, aunque debe haber antecedentes en otros lugares. Fue inmediatamente adoptado en Esquel, Argentina, también en un caso de minería de oro. Y en septiembre de 2007, en Carmen de la Frontera, Ayabaca, y Pacaipampa, en el norte de Perú, el proyecto de minería de cobre Río Blanco de la minera Majaz fue derrotado en un referéndum local. No son casos de aplicación de la consulta prevista en el convenio 169 de la OIT para poblaciones indígenas.

Hay quien no entiende el carácter estructural de estas protestas. Creen que son protestas NIMBY (“no en mi patio”) cuando son manifestaciones locales del movimiento internacional por la justicia ambiental. Hay redes nacionales (como la Conacami en Perú) o redes

internacionales que surgen de estas protestas. Por ejemplo, la red Oilwatch, que nació en 1995 de experiencias en Nigeria y sobre todo en Ecuador.

Los balances y las cuentas de resultados de las compañías petroleras, mineras y madereras no incluyen los pasivos ambientales. Por ejemplo, en Ecuador hay pasivos ambientales no compensados por la exportación de flores, por la exportación de bananos, por la exportación de camarones y la destrucción de manglares, por los daños causados por plantaciones de eucaliptos para la exportación.

La contabilidad de las empresas no suele incluir esas deudas ecológicas. ¿Cuánto debe Dow Chemical-Union Carbide por los daños en Bhopal en 1984? ¿Cuánto debe Dow Chemical, otra vez, por los casos de esterilidad de trabajadores de plantaciones bananeras en Honduras, Costa Rica, Ecuador? Los muchos intentos de iniciar juicios en EEUU han tropezado con la negativa persistente en la forma de *forum non conveniens*. Hay protestas en la literatura jurídica estadounidense contra esa negación de Justicia.⁸ El 30 de julio de 2007, la página web de Ecoportal se hacía eco de una información de la BBC sobre el pesticida DBCP. Decía así:

Afectados por pesticida Nemagón en juicio legal contra empresas estadounidenses

El 19 de julio se inició en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, en el suroeste del país, el proceso legal que implica a las corporaciones transnacionales Dow Chemical y Amvac Chemical, fabricantes del Nemagón, y a la bananera Dole Fresh Fruit, según explica la agencia británica BBC.

Por su parte, *La Opinión Digital*, un medio informativo de Los Ángeles, señala que Amvac arregló con los demandantes y pagó 300.000 dólares a 13 campesinos nicaragüenses para evitarse el juicio que, en opinión de varios expertos legales, es altamente significativo.

Según le dijo a la BBC el profesor de Derecho Comparado, Alejandro Miguel Garro, de la Universidad de Columbia, en EEUU, "... (el) caso podría sentar un precedente para que trabajadores de países pobres puedan demandar a grandes corporaciones transnacionales en sus Estados de origen".

Los trabajadores demandantes dicen que el Nemagón o Fumazone, nombres comerciales del pesticida DBCP, les causó varios problemas de salud, principalmente esterilidad, luego de haberlo usado en sus países durante los años sesenta y setenta para combatir unos gusanos que afectaban a las plantaciones de bananos.

Según la BBC, los trabajadores presentaron en total cinco demandas y desde el 19 de julio está en proceso la primera. En ese caso 30 trabajadores nicaragüenses alegan que fueron obligados a operar con el Nemagón en las plantaciones de bananos, y que la esterilidad que padecen es consecuencia de la exposición al pesticida.

⁸ D. Mayer y K. Sable, "Yes! We have no bananas: Forum non Conveniens and Corporate Evasion", *International Business Law Review*, N° 130, 2004, pp. 131-162.

Según la demanda, explica la BBC, Dow y Amvac sabían que el Nemagón era una sustancia tóxica desde comienzos de los años cincuenta, y sin embargo no advirtieron sobre sus riesgos. La petición legal agrega que científicos contratados por Dow observaron que animales expuestos al Nemagón en laboratorios presentaron atrofiados en los testículos.

En tanto, a la transnacional bananera Dole se le acusa de negligencia y de encubrir de forma fraudulenta la información sobre la toxicidad del pesticida. Los trabajadores explican que esa empresa no les advirtió sobre los peligros que implicaba la exposición al producto ni los protegió dándoles guantes, gafas o máscaras.

La demanda agrega que el pesticida cayó sobre las fuentes de agua y se permitió que los trabajadores bebieran el vital recurso y lo usaran para bañarse.

Por su parte, el portavoz de Dow, Scott Wheeler, aseguró que no hay ningún estudio aceptado por la comunidad científica que establezca que el Nemagón causa esterilidad.

En tanto, otra nota de la BBC titulada "Nemagón: un pesticida devastador", informa que sólo en Costa Rica se estima que hay unos 30.000 trabajadores perjudicados por el pesticida, con problemas estomacales, hemorragias, dolores de cabeza y esterilidad, entre otras afecciones. "Hay quienes dicen que es una de las peores tragedias laborales del mundo", resume la BBC.

Es un caso en el que no se trata de reparar los daños en un sentido físico, es decir, eliminar retrospectivamente la esterilidad sufrida por decenas de miles de trabajadores de las bananeras. ¿Cómo se podría hacer esto? Hay que resarcir el daño causado incluyendo los aspectos emocionales. Parece (ver recuadro) que una indemnización pactada de unos 25.000 dólares por persona se considera adecuada –la esterilidad de los pobres es sin duda más barata que la de los ricos, pero si todas las demandas (hasta ahora frenadas en las cortes de EEUU) se resolvieran favorablemente, eso representaría algunos miles de millones de dólares para Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Filipinas... Sería un éxito lograr que Dow Chemical, Shell, Dole y otras empresas hagan frente a sus pasivos ambientales.

En América Latina, sobre todo por influencia de la industria minera chilena, el término pasivo ambiental se está usando para indicar el costo de la prevención del daño futuro (por ejemplo, por drenaje ácido) una vez efectuado el cierre de las minas. De hecho, el pasivo ambiental es la deuda ecológica no pagada por la empresa durante todo el tiempo de operación de la mina, sumada al gasto necesario para impedir daños una vez cerrada la operación.

Nótese además que la empresa minera o petrolera (o maderera o pesquera) ha liquidado un patrimonio sin ninguna previsión para amortizar y reponer ese capital natural, partiendo en la práctica del supuesto de que la naturaleza es inagotable. Una vez liquidada la mina, obtiene una nueva concesión. De hecho, debiera haberse cobrado impuestos por el agotamiento de este capital natural que permitan a la economía contar con ingresos una vez se acaben los yacimientos. Es la idea de Uslar Pietri en 1936: "sembrar el petróleo" o "sembrar" un recurso renovable que se explote más rápido que su ritmo de regeneración.

La exportación de residuos tóxicos

Además de usar los océanos y la atmósfera como sumidero o depósito temporal gratuito de dióxido de carbono, los países del Norte recurren, cuando pueden, a la exportación de residuos tóxicos. Siguen la “regla de Lawrence Summers”. En 1992, el entonces economista principal del Banco Mundial escribió un memorando interno que fue filtrado a la prensa donde decía que, desde un punto de vista estrictamente económico, la contaminación debía colocarse donde no había gente o donde la gente era más pobre porque “la medida de los costos de una contaminación que afecte a la salud depende de los ingresos perdidos por la mayor morbilidad y mortalidad. Desde este punto de vista, una cantidad dada de contaminación nociva para la salud debería ponerse en el país con el costo más bajo, es decir, el que tenga los salarios más bajos. Pienso que la lógica económica que hay detrás de llevar una carga dada de residuos tóxicos al país con menores salarios es impecable y deberíamos reconocerla”.⁹

Lawrence Summers tenía razón desde un punto de vista estrictamente económico. La actividad de Doe Run en La Oroya (Perú) hay que verla desde esta perspectiva. La cuestión es, ¿por qué debemos decidir sobre asuntos de vida o muerte con criterios estrictamente económicos? ¿Quién ha dado ese poder a los economistas? De hecho, son muchas las protestas de quienes sufren injusticias socioambientales aunque es verdad que a veces se cumple la doctrina de Summers. Así, a pesar del Convenio de Basilea, hay exportación de residuos tóxicos hacia el Sur (o hacia zonas pobres en el Norte). Hay exportación de residuos electrónicos. Hay una industria de desguace de navíos viejos con su carga de asbestos (amianto) y metales pesados en lugares como Alang, Gujarat (India), donde una familia legión trabaja en la misma playa sin precaución ninguna.

Un ejemplo español. - **El Ministerio de Medio Ambiente retiene un barco en Almería para evitar que sea desguazado sin ningún control medioambiental en la India**

Aunque no transporta material peligroso, Medio Ambiente señala que el barco debe ser tratado como un residuo. El *ferry* Beni Ansar (que en el último mes ha pasado a llamarse Beni y luego Aqaba Express) lleva desde el 12 de julio retenido en el puerto de Almería por orden del Ministerio de Medio Ambiente, según confirmó el capitán marítimo del puerto, Simón López. El ministerio quiere impedir que el barco sea desguazado sin control en una playa del Índico y exige que se cumpla el convenio internacional sobre residuos que obliga a tratar los materiales peligrosos (aceites, fuel, baterías, radios, pinturas y amianto)... Los grandes buques del mundo acaban en la India o Bangladesh. Allí, aprovechando las mareas, los barcos son embarrancados en la playa. No hay puerto ni instalaciones. Una vez en la arena, enjambres de obreros, a menudo descalzos, desmontan con martillo y soplete las toneladas de metal. No hay control laboral ni ambiental. Ése era el destino que le esperaba al *ferry* Beni Ansar, que en los últimos años ha cubierto la

⁹ “Let them eat pollution”, *The Economist*, 8 febrero 1992, p. 66.

ruta Almería-Nador y que, desde que fue botado en 1975, se ha llamado Wisteria y Princesa María Esmeralda. El barco, propiedad de la empresa marroquí Limadet y gestionado por la naviera Comanav, según el registro internacional Lloyd's, fue vendido en julio de 2007 a la empresa Indian Breakers. (...) Como éste, entre siete y ocho barcos españoles llegan a Asia para ser desguazados cada año, y más de 250 del mundo, según el director general de la Asociación de Navieros Españoles, Manuel Carlier.

Basilea avisó

La operación estaba hecha, pero intervino el Ministerio de Medio Ambiente, hasta ahora prácticamente ajeno a los temas marítimos, competencia de Fomento. El director general de Calidad Ambiental, Jaime Alejandro, explica que recibió un aviso del Convenio de Basilea (el acuerdo internacional sobre residuos peligrosos) alertando de la venta del buque para desguace: "Si lo van a desguazar, el buque es considerado un residuo aunque navegue. Mandamos una inspección junto a Fomento y la Junta de Andalucía y pedimos a la Comisión Europea que nos dijera qué hacer en estos casos". Bruselas replicó que en esas condiciones el buque no podía salir del puerto y la inspección concluyó que, aunque no transportaba residuos peligrosos, en sí era peligroso. (...) La responsable de tóxicos de Greenpeace, Sara del Río, aplaude la decisión del ministerio: "Los CFCs de los refrigerantes son tóxicos y no se puede desguazar sin control en la India, ya que tampoco se puede hacer en España. Hay que denunciar que muchas empresas cumplen unos niveles de seguridad en los países desarrollados pero los incumplen en el Tercer Mundo para aumentar sus beneficios". El representante de las navieras, Manuel Carlier, afirma que las cosas no son tan sencillas: "No está claro jurídicamente que el Convenio de Basilea se pueda aplicar a los barcos. Las ONG han hecho bien denunciando la situación en la India y la Organización Marítima Internacional lo va a cambiar para que los desguaces reúnan las condiciones adecuadas. Pero mientras, no hay forma de desguazar un barco en la UE y más de 20.000 personas en Asia viven de este trabajo".

Si el Aqaba Express logra salir para Rumanía, será difícil impedir que en aguas internacionales cambie de dueño y vire a Asia. Ante las restricciones, en el futuro los navieros pueden enviar el barco-residuo a un país sin limitaciones y desde allí venderlo como chatarra sin problemas.

El Clemenceau lo destapó todo

En enero de 2006, el portaaviones francés Clemenceau se dirigía a la India a ser desguazado en la instalación Alang, en el Índico, en una playa que hasta 1983 era paradisíaca. Allí, centenares de obreros en condiciones precarias debían desmontar pieza a pieza las 27.000 toneladas del portaaviones. Pero el barco, botado en 1971, llevaba al menos 45 toneladas de amianto, un material en desuso por su toxicidad. Para desmontarlo en la Unión Europea o en un país desarrollado, los trabajadores habrían tenido que estar protegidos, pero no allí, donde se calcula que uno de cada seis trabajadores muere prematuramente por el amianto.

El Tribunal Supremo de la India dirimió el asunto pero en febrero de 2006, el presidente francés Jacques Chirac, acuciado por las presiones de Greenpeace y por las críticas de su Consejo de Estado, ordenó el regreso del barco al puerto de Brest.

(Fuente: página web de Los Verdes de Andalucía, 25 de agosto de 2007. El 27 de septiembre, la prensa española anunció que el ferry Beni Ansar estaba ya rumbo a la India habiendo llegado a Suez).

Riesgos e incertidumbres: la ciencia *post-normal*

La percepción ecológica se expresa a veces en el lenguaje científico de flujos de energía y materiales, de recursos agotables y contaminación. Muchas veces, las cuestiones ecológicas presentan características que las hacen poco tratables con los métodos científico-tecnológicos reduccionistas. Por esto, la desconfianza ecologista hacia los científicos está justificada sin necesidad de apelar a filosofías irracionalistas de la ciencia. En efecto, los problemas ecológicos son complejos, interdisciplinarios. Además, a veces son nuevos al haber sido creados por las nuevas industrias.

Además de usar los océanos y la atmósfera como sumidero o depósito temporal gratuito de dióxido de carbono, los países del Norte recurren, cuando pueden, a la exportación de residuos tóxicos ¿por qué debemos decidir sobre asuntos de vida o muerte con criterios estrictamente económicos? ¿Quién ha dado ese poder a los economistas?

En esos terrenos, los científicos, cuyos métodos son reduccionistas, se mueven mal. Por eso, ante la gran incertidumbre de muchas cuestiones ecológicas, observamos un fenómeno poco frecuente en otros campos. En esas discusiones, como señalan Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz con su noción de la “ciencia posnormal” o Víctor Toledo con su “diálogo de saberes”, participan o deben participar en pie de igualdad los activistas ecologistas con los expertos de las universidades o de las empresas. Es lo que se llama *activist knowledge*.¹⁰ El movimiento de justicia ambiental en EEUU recurrió a la *popular epidemiology* en casos locales de incidencia de enfermedades por contaminación en barrios pobres.

Por ejemplo, en los últimos años, se ha criticado la agricultura moderna y, en general, la economía actual, porque implica un gasto de combustibles fósiles, una contaminación del ambiente y una pérdida de biodiversidad mayor que la agricultura tradicional y que la economía preindustrial. Esa corriente enlaza con la nueva economía ecológica y enlaza también con el ecologismo espontáneo de los pobres. En países con importante presencia campesina, la crítica ecológica de la agricultura moderna desemboca actualmente en el movimiento de la Vía Campesina. Pero no cabe negar que, desde el punto de vista económico, la agricultura moderna y supermoderna es más rentable, al menos para algunos y a corto plazo. ¿Quién tiene razón?

¿Por qué ocurre esa apertura del debate en bastantes discusiones ecológicas? Se trata de cuestiones muy inciertas, muy complejas, de consecuencias a largo plazo pero necesi-

¹⁰ A. Escobar, “Political Ecology of Globality and Difference”, *Gestión y Ambiente*, Vol. 3, N° 9, 2006.

tadas de decisiones urgentes. Eso ofrece una oportunidad, no para un enfrentamiento entre ecologistas y científicos, sino, al contrario, para un trabajo en común entre ecologistas que respeten los logros reales de las ciencias en terrenos bien acotados (donde cabe contrastar hipótesis) y científicos que, más que “ciencia para el pueblo”, hagan “ciencia con el pueblo”, dispuestos a confesar su ignorancia o, mejor dicho, los límites de su saber sobre los grandes e inciertos problemas futuros que el ecologismo plantea. ¿Quién puede hoy, honestamente, atacar la agroecología en nombre del avance científico-técnico de las biotecnologías? ¿Quién puede pronunciarse contra los ecologistas en nombre de la energía de fusión o de la inminente tecnología de “secuestro de carbono”? ¿No serían tales certidumbres más extravagantes que la mayor extravagancia de un curandero?

La deuda ecológica

Volvamos al inicio. Debemos ver la economía como un sistema abierto a la entrada cada vez mayor de energía y materiales y a la salida de los residuos. No nos estamos desmaterializando. En la economía humana aumenta el consumo de biomasa, de combustibles fósiles, de minerales. Producimos residuos como el dióxido de carbono o como los residuos nucleares. También ocupamos más espacio, destruyendo ecosistemas y arrinconando otras especies. Por tanto aumentan los conflictos ecológico-distributivos. Es decir, no sólo estamos perjudicando a las generaciones futuras de humanos y eliminando otras especies que muchas veces ni tan siquiera conocemos, sino que hay también crecientes conflictos ambientales ya ahora mismo.

Comprobamos que hay un desplazamiento de los costes ambientales del Norte al Sur. EEUU importa más de la mitad del petróleo que gasta. Japón y Europa dependen físicamente aún más de las importaciones. Al hacer los cálculos de flujos de materiales, se observa que América Latina está exportando seis veces más toneladas que importa (minerales, petróleo, carbón, harina de pescado, soja...), mientras la Unión Europea funciona al revés, importamos cuatro veces más toneladas que exportamos. Eso lleva a la idea de que existe un comercio ecológicamente desigual. La misma desigualdad observamos en las emisiones de dióxido de carbono, causa principal del cambio climático. Un ciudadano de EEUU emite 15 veces más en promedio que uno de la India. Nos preguntamos: ¿quién tiene títulos sobre los sumideros de carbono que son los océanos, la nueva vegetación y los suelos? ¿Quién es dueño de la atmósfera para depositar el dióxido de carbono que sobra? El protocolo de Kyoto es mejor que la política de Bush, pero no soluciona ese enorme conflicto ecológico-distributivo. De ahí los reclamos de la deuda ecológica que el Norte tiene con el Sur, por el comercio ecológicamente desigual, por el cambio climático, también por la biopiratería y por la exportación de residuos tóxicos. La deuda ecológica se puede expresar en dinero pero tiene también aspectos morales no recogidos en una valoración monetaria.

Valores inconmensurables

Hay conflictos distributivos ecológicos crecientes. Un intento de sistematización puede verse en la Tabla 1. En esos conflictos por extracción o transporte de materias primas, por contaminación local o regional, comprobamos el uso de diversos lenguajes. Puede ser que los poderes públicos y las empresas quieran imponer el lenguaje económico, diciendo que se hará un análisis costo-beneficio con todas las externalidades traducidas a dinero, y además se hará una evaluación de impacto ambiental, y que así se va a decidir si se construye una represa conflictiva o se abre una mina. Pero puede ocurrir que los afectados, aunque entiendan ese lenguaje económico y aunque piensen que es mejor recibir alguna compensación económica que ninguna, sin embargo acudan a otros lenguajes que están disponibles en sus culturas. Pueden declarar, como hicieron los U'Wa en Colombia frente a Occidental Petroleum, que la tierra y el subsuelo son sagrados, que "la cultura propia no tiene precio". En un conflicto ambiental se despliegan valores ecológicos, culturales, de subsistencia de las poblaciones, y también valores económicos. Son valores que se expresan en distintas escalas, no son conmensurables.

Tabla 1. Del metabolismo social a los conflictos ecológicos

Escala geográfica ----- Etapa	Local	Nacional/Regional	Global
Extracción	Ejemplo: conflictos en territorios indígenas (Orissa, en la India, por bauxita; Yasuní, en Ecuador, por petróleo).	Destrucción de manglares. Plantaciones de árboles para pasta de papel. Sobrepesca.	Búsqueda de minerales y combustibles fósiles, y biopiratería, por empresas (privadas o estatales) transnacionales. Responsabilidad empresarial.
Transporte y Comercio	Ejemplo: quejas contra autopistas urbanas por ruidos.	Trasvases entre ríos. Gasoductos (Birmania-Tailandia) y oleoductos.	Derrames petroleros en el mar (Prestige, por ejemplo). Comercio ecológicamente desigual entre Sur y Norte. CO ₂ y CFC que causan cambio climático (o afectan a la capa de ozono). La "deuda de carbono".
Residuos, contaminación tras el consumo	Basurales urbanos. Incineradoras (dioxinas), ozono en áreas urbanas.	Lluvia ácida por exceso de SO ₂ , contaminación transfronteriza. Residuos nucleares.	Compuestos orgánicos persistentes en áreas prístinas remotas. Exportación de residuos.

“Todo necio confunde valor y precio”. ¿Quién tiene el poder de imponer el método de resolución de los conflictos ambientales? ¿Valen las consultas populares que apelan a la democracia local como en Tambogrande (Perú) o en Esquel (Argentina)? ¿Vale el lenguaje de la sacralidad? ¿Valen los valores ecológicos solamente si se traducen a dinero o valen por sí mismos, en sus unidades de biomasa y biodiversidad? ¿Vale argumentar en términos de la salud, subsistencia y bienestar humanos directamente, o hay que traducirlos a dinero? ¿Qué valor tiene un paisaje, no en dinero sino en sí mismo? ¿Cuánto vale la vida humana, no en dinero sino en sí misma? Son preguntas nacidas de la observación participante en conflictos ambientales en diversos lugares del mundo. De ahí la pregunta con que concluyo: ¿quién tiene el poder social y político para simplificar la complejidad imponiendo un determinado lenguaje de valoración?

Así se juntan la economía ecológica con la ecología política. La economía ecológica estudia el metabolismo social y pone en duda que el conflicto entre economía y medio ambiente pueda solucionarse con jaculatorias tales como “desarrollo sostenible”, “eco-eficiencia” o “modernización ecológica”. La ecología política estudia los conflictos ambientales y muestra que en esos conflictos distintos actores que tienen distintos intereses, valores, culturas, saberes, y también distintos grados de poder, usan o pueden usar distintos lenguajes de valoración. Vemos cómo hay valores inconmensurables en la práctica y cómo el reduccionismo económico es meramente una forma de ejercicio del poder.

CIP-Ecosocial: análisis y debates para
una sociedad justa en un mundo habitable
www.cip.fuhem.es

Desigualdad en salud: la mayor epidemia del siglo XXI

Cualquier transformación social tiene su origen en otra manera de mirar y entender la realidad. Hoy en día, la pobreza, la exclusión social y las desigualdades sociales son inmensas, escandalosas, mucho mayores de lo que observamos a simple vista, de lo que queremos ver o incluso de lo que podemos imaginar. Para ver esa otra realidad necesitamos buena información y mucha reflexión, y eso es difícil. Sólo con capacidad crítica, tiempo y esfuerzo se aprende a mirar mejor y entender lo oculto, lo invisible. En un tiempo de inmoralidad y barbarie, donde el pragmatismo todo lo invade, la codicia es omnipresente, se idolatra al dinero, se manipula la información, se falsea la historia, y donde casi todo se maquilla, es preciso preservar el sentido del horror y de la realidad. Es preciso comprometerse con el derecho a la protección y promoción de la salud que deben tener todos los habitantes del planeta. No caben excusas, nos va en ello nuestra salud. El objetivo de este artículo es presentar alguna de las principales claves, a menudo invisibles, que caracterizan a la peor epidemia de nuestro siglo: la desigualdad en salud.

Joan Benach y Montse Vergara pertenecen al Grupo de Investigación de Desigualdades en Salud (Unidad de Investigación en Salud Laboral) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Carles Muntaner es profesor en el departamento de Salud Pública de la Universidad de Toronto.

En las ventanas del alma, que son los ojos, se expresa lo más íntimo del ser humano. Cuando nuestra mirada es capaz de percibir las condiciones de vida y trabajo, los rostros de dolor, el sufrimiento y la lucha de las personas y de los pueblos, mirar es comprender.¹ Pero, además, necesitamos cuantificar la magnitud de lo que estamos viendo, y las cifras reflejan dramas colectivos: hoy en día una niña recién nacida en Suecia puede vivir 43 años más que una niña nacida en Sierra Leona. Pero esa muerte desigual no se produce sólo entre Suecia y Sierra Leona, sino entre un puñado de países ricos y Malí, Haití, Mozambique, Uganda, Nepal, Bangladesh... La desigualdad se produce, sobre todo, entre los países ricos, “sobredesarrollados”,² y las más de

¹ J. Benach y C. Muntaner, *Aprender a mirar la salud*, El Viejo Topo, Barcelona, 2005.

² J. Riechmann, *Todo tiene un límite. Ecología y transformación social*, Debate, Madrid, 2001.

2.000 millones de personas que viven en los países más pobres del planeta. En los países “en desarrollo”, que mejor habría que llamar “países arrollados por el desarrollo ajeno”,³ aproximadamente el 40% de los infantes de dos años tienen una estatura menor de la que les corresponde, y las tasas de mortalidad materna son, en promedio, 30 veces las de los países ricos. El riesgo de que una mujer sueca muera durante el embarazo o el parto es de 1 entre 17.400, mientras que el de una afgana es de 1 entre 8. En Uganda, 200 de cada 1.000 niños nacidos en los hogares más pobres morirán antes de su quinto cumpleaños, mientras que en los países ricos sólo morirán siete de cada 1.000. También en los adultos hay claras desigualdades: la probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años es más de 10 veces superior en Lesoto, al sur de África, que en Suecia. En Australia los varones indígenas viven unos 17 años menos como promedio que aquellos de origen no indígena.⁴

El impacto que hechos como estos tienen sobre la salud pública del planeta es gigantesco. Si todo el planeta consiguiera alcanzar el nivel de mortalidad infantil que hoy tiene Islandia (el más bajo del mundo en 2002), cada año podría evitarse la muerte de más de 11 millones de niños.⁵ Tres datos sirven de referencia para valorar la importancia de este hecho: en el año 2002 murieron más de un millón y medio de personas de tuberculosis, más de un millón de malaria y casi tres millones de SIDA.⁶ Si cada civilización crea sus propias enfermedades y sus propias epidemias, la enfermedad más importante de nuestra época, su epidemia más devastadora, no es la tuberculosis, la malaria, o el SIDA, sino la desigualdad de la salud.

Países relativamente ricos como Rusia, Hungría y otros del este de Europa tienen una esperanza de vida 10 años menor que la de países como Suecia o Japón.⁷ Entre los países menos desarrollados, Costa Rica y Cuba tienen 10 años más de esperanza de vida que Perú, 20 años más que Haití y 30 años más que Angola.⁸ Estas cifras promedio de cada país esconden a su vez enormes desigualdades internas. En un mismo país hay regiones o barrios donde viven personas con niveles de riqueza y riesgos de tipo social, ambiental o personal para la salud muy distintos según cuáles sean su clase social, género o etnia. Y los países ricos no están en absoluto exentos de desigualdad. Las áreas más pobres de la

³ E. Galeano, *Patatas arriba. La escuela del mundo al revés*, Siglo XXI, Madrid, 1998.

⁴ Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CSDH), *Closing the gap in a generation. Health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health*, Organización Mundial de la Salud (OMS), Génova, 2008.

En: http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf

⁵ *Informe sobre la salud en el mundo. Forjemos el futuro*, Organización Mundial de la Salud (OMS), 2003. En: <http://www.who.int/whr/2003/es/>

⁶ *Ibidem*.

⁷ M. Bobak y M. Marmot, “East-West mortality divide and its potential explanations: proposed research agenda”, *BMJ*, N° 312, 1996, pp. 421-425.

⁸ Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo mundial*, Banco Mundial, Madrid, 1993.

ciudad escocesa de Glasgow tienen una esperanza de vida 28 años menor que las zonas más ricas de esta ciudad. Un hombre con estudios universitarios, con un trabajo estable como profesional, que tiene apoyo familiar y social, y que vive en un barrio acomodado, no sólo tiene mayores recursos sino también una probabilidad mucho mayor de tener un mejor nivel de salud que una mujer emigrante, negra, sin estudios, desempleada, sin apoyo social ni familiar, y que vive en un barrio marginado de la misma ciudad. En general, la desigualdad afecta sobre todo a los grupos más explotados, oprimidos o excluidos de la sociedad, que, además, suelen vivir en los barrios más pobres y marginados sufriendo un proceso de desigualdad múltiple. Entre los grupos sociales más afectados destacan los trabajadores y trabajadoras más pobres, las clases sociales más explotadas, las mujeres pobres desempleadas que viven solas con sus hijos, los desempleados sin recursos, los inmigrantes ilegales más pobres a quienes se les niega el trabajo, o las personas sin techo o en situación de grave marginación social.

En Uganda, 200 de cada 1.000 niños nacidos en los hogares más pobres morirán antes de su quinto cumpleaños, mientras que en los países ricos sólo morirán siete de cada 1.000

EEUU, el país más poderoso de la tierra, el país que produce un tercio de la riqueza mundial, es también uno de los países más adelantados en ampliar las desigualdades. Cerca de 1 de cada 10 familias es pobre, 1 de cada 5 habitantes es analfabeto funcional⁹ y los servicios de salud de gran parte de la población están hechos añicos: casi 44 millones de personas (8,5 millones de niños), el 15% de la población del país, no tienen seguro médico.¹⁰ Algunos condados del estado de Dakota del Sur tienen, en promedio, 12 años menos de esperanza de vida en los hombres y 17 en las mujeres que en Minneapolis o Utah.¹¹ Si las tasas de mortalidad de la población de raza negra durante la década de los noventa hubieran sido iguales a las de la población de raza blanca se hubieran evitado cerca de 900.000 muertes. En el barrio de Harlem, en el norte de Manhattan (Nueva York), viven alrededor de 115.000 personas, un 40% de las cuales son pobres, y la mayoría son negros. La peor salud de los habitantes de Harlem ha sido estudiada desde hace tiempo. Hace más de una década, dos médicos del *Harlem Hospital* señalaron que las tasas de mortalidad de los jóvenes de este barrio sextuplicaban a las del promedio de los jóvenes de EEUU, y mostra-

⁹ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano*, Ediciones Mundi-Prensa, Barcelona, 2000.

¹⁰ U.S. Census Bureau. En: <http://www.census.gov/hhes/www/hlthins.html>

¹¹ C. J. L. Murray, C. M. Michaud, M. T. McKenna y J. S. Marks, *U.S. Patterns of Mortality by County and Race: 1965-1994*, U.S. Burden of Disease and Injury Monograph Series, Harvard School of Public Health and Centers for Disease Control and Prevention, Cambridge y Atlanta, 1998.

ron que es menos probable que los negros de Harlem llegaran a los 65 años que los habitantes de un país tan pobre como Bangladesh.¹² Es revelador constatar que ser pobre y vivir en una zona rica puede ser más dañino para la salud, que ser aún más pobre pero vivir en una zona pobre. Aunque menos visibles que la pobreza medida en valor absoluto, las desigualdades sociales dañan profundamente nuestra salud.

La desigualdad en salud tiene varias caras

Desde muy antiguo sabemos que la pobreza afecta a nuestra vida y a nuestra salud. Los pobres enferman en mayor proporción y mueren antes que quienes son más ricos. No obstante, en otros casos no tan extremos, las cosas no parecen tan evidentes. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la salud de quienes sólo son “un poco” pobres?, ¿cuál es la salud de los ciudadanos que poseen un nivel de riqueza y bienestar material medio en comparación con quienes poseen el nivel más elevado? Para contestar a esas preguntas no basta el sentido común. Comprender las relaciones existentes entre la desigualdad social y la desigualdad en la salud es algo mucho más complejo que el simple hecho de constatar la enorme diferencia en la riqueza o la muerte existente entre los individuos y grupos que están en los extremos de la escala social, o entre las naciones o áreas geográficas muy ricas o muy pobres. Tres décadas de abundante investigación científica han permitido sacar a la luz cinco elementos clave de la desigualdad en salud: las desigualdades son enormes, graduales, crecientes, adaptativas e históricas.

La salud de quienes están mejor socioeconómicamente y quienes viven en las áreas más privilegiadas de los países o las ciudades es mucho mejor que la de la población más desfavorecida. De hecho, las diferencias en la probabilidad de morir entre las clases sociales extremas son tan grandes que superan en magnitud a las producidas por el tabaquismo, el factor de riesgo para la salud más estudiado durante la segunda mitad del siglo XX.¹³ En Reino Unido, un número muy amplio de estudios ha mostrado las desigualdades entre clases sociales. Por ejemplo, los profesionales y directivos tienen casi 10 años más de esperanza de vida al nacer que los trabajadores manuales.¹⁴ Si las clases sociales británicas más pobres tuvieran las mismas tasas de mortalidad que las más ricas, cada año podrían evitarse 42.000 muertes en el grupo de población de 16 a 74 años.¹⁵

Las desigualdades se extienden a lo largo de toda la escala social. A medida que descendemos en dicha escala, en el nivel de riqueza o en la educación, la salud de las perso-

¹² C. McCord y H. P. Freeman, “Excess Mortality in Harlem”, *New Engl J Med*, N° 322, 1990, pp. 173-177.

¹³ M. Angell, “Privilege and health-What is the connection?”, *N Engl J Med*, Vol. 2, N° 329, 1993, pp.126-127.

¹⁴ L. Hattersley, “Trends in life expectancy by social class: an update”, *World Health Stat Q*, N° 2, 1999, pp.17-24.

¹⁵ *Ibidem*.

nas también empeora progresivamente. Las implicaciones sociales y políticas de este descubrimiento son muy importantes. En realidad, a mayores ventajas socioeconómicas, mayor esperanza de vida y mayores niveles de salud. En EEUU, un estudio que analizó 300.000 hombres de raza blanca según su nivel de ingresos familiar mostró un gradiente en el nivel de mortalidad en 11 de 12 categorías estudiadas: a menor renta, mayor mortalidad.¹⁶ El mismo gradiente se ha comprobado también en la apreciación de nuestra propia salud (estado de salud autopercebido), la obesidad, el nivel de colesterol y de glucosa en sangre, o en la exposición a factores de estrés existentes en el medio laboral como la realización de un trabajo poco variado o tener un bajo control en el lugar de trabajo.¹⁷ Así pues, personas sin grandes necesidades materiales o personales y sin especiales riesgos para la salud mueren antes y enferman más que aquéllas que están situadas inmediatamente por encima en la escala social. Aunque la investigación científica no ha logrado aclarar aún con detalle sus causas últimas, hay acuerdo en una cosa: existe algo intrínseco en la jerarquía y en la desigualdad social que daña la salud.¹⁸

Aunque durante el siglo XX las tasas de mortalidad de los países (especialmente las de los ricos) se redujeron notablemente, las desigualdades en mortalidad por clase social entre los países y entre las clases sociales han aumentado.¹⁹ Por ejemplo, al comparar hombres de mediana edad de las clases manual y no manual en Finlandia, el riesgo de morir creció desde 1,6 (60% mayor) en 1980-1984 hasta casi 2 (el doble) en 1990-1994. La sociedad cambia, las enfermedades varían y los servicios sanitarios mejoran, pero el gradiente en diferencias de salud injustas y evitables persiste o aumenta.²⁰

Los grupos sociales más privilegiados se benefician antes y en mayor proporción de las acciones e intervenciones sociales y sanitarias dirigidas a mejorar la salud. Ya sea en el uso de los servicios de planificación familiar, en las pruebas de detección precoz del cáncer de mama o en el uso de los servicios sanitarios. Es más, con frecuencia funciona la llamada "ley inversa de atención sanitaria". Es decir, el uso y calidad de la asistencia sanitaria varía en sentido inverso a las necesidades de la población.²¹ A mayores necesidades, menor y peor atención. Un ejemplo de esa "ley" es la exportación del tabaquismo desde los países ricos hacia los países más pobres y el trasvase de esa adicción hacia los estratos más bajos

¹⁶ G. D. Smith, J. D. Neaton, D. Wentworth, R. Stamler y J. Stamler, "Socioeconomic differentials in mortality risk among men screened for the Multiple Risk Factor Intervention Trial. I. White men", *Am J Public Health*, N° 86, 1996, pp. 486-496.

¹⁷ M. Marmot, G. D. Smith, S. Stansfeld et al., "Health inequalities among British Civil Servants: The Whitehall II study", *Lancet*, N° 337, 1991, pp. 1387-1393.

¹⁸ R. G. Evans, M. L. Barer y T. R. Marmor (Coord.), *Why are some people healthy and others not?*, Aldine De Gruyer, Nueva York, 1994.

¹⁹ M. Marmot, M. Bobak y G. D. Smith, "Explanations for Social Inequalities in Health", en B. C. Amick III, S. Levine, A. R. Tarlov y D. Chapman (Coord.), *Society & Health*, Oxford University Press, Nueva York, 1995.

²⁰ Z. Kmiotowicz, "Gap between classes in life expectancy is widening", *BMJ*, N° 327, 2003, p. 68.

²¹ J. Tudor Hart, "The Inverse Care Law", *Lancet*, 1971, pp. 405-412.

en la escala social. Las agresivas campañas de las empresas tabacaleras, aunque con frecuencia sutiles, con su promoción en los países pobres, y la defensa de la “libertad individual” en los países ricos, han ayudado a descubrir y mantener el hábito de fumar a los más de 1.100 millones de fumadores del planeta.²² Mientras que en los últimos 40 años el consumo de tabaco se ha reducido a la mitad en los países ricos, en los países pobres, con China a la cabeza, el consumo se ha duplicado. Hoy el 80% de fumadores vive en los países pobres.

La historia nos ayuda a entender que la aparición de la desigualdad en salud no es fija ni inevitable. La esperanza de vida al nacer ha aumentado durante el siglo XX debido sobre todo a un rápido descenso de las tasas de mortalidad materno-infantil, la infancia y la primera etapa de la edad adulta. Los principales determinantes de esa mejora hay que buscarlos en el desarrollo económico, la mejora en las condiciones de vida y la puesta en práctica de medidas de salud pública.

La sociedad cambia, las enfermedades varían y los servicios sanitarios mejoran, pero el gradiente en diferencias de salud injustas y evitables persiste o aumenta

La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud

A principios de 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CSDH, por sus siglas en inglés)²³ con el propósito de recoger y resumir la información científica disponible sobre cómo factores sociales como las relaciones de empleo, la globalización, los servicios sanitarios, la exclusión social, el género, el ambiente urbano o el desarrollo infantil generan desigualdades de salud en el mundo entero, y generan recomendaciones políticas para su reducción.

Dirigida por el epidemiólogo británico de origen australiano Michael Marmot, la Comisión se constituyó a partir de científicos, políticos, expertos y miembros de la sociedad civil. Junto a un amplio grupo de comisionados del mundo de la política y la ciencia, entre los que se incluye el ex presidente de Chile Ricardo Lagos, el senador italiano Giovanni Berlinguer y el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, en el proceso de generación de información jugaron un papel muy importante las redes de conocimiento o grupos de investigación que rea-

²² H. Kane, “Le commerce avant la sante. La cigarette américaine à la conquête du monde”, *Le Monde Diplomatique*, mayo de 1997, pp. 22 y 23.

²³ Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CSDH), Organización Mundial de la Salud (OMS).
En: http://www.who.int/social_determinants/en/index.html

lizaron el trabajo de resumir el conocimiento científico disponible antes referido. En agosto de 2008 se publicó el informe *Reducir la desigualdad en una generación: equidad en salud a través de la acción sobre los determinantes sociales de la salud*, donde se reflejan las principales conclusiones y recomendaciones políticas de la Comisión.

En el informe se documenta ampliamente el hecho de que la desigualdad en salud es la principal “enfermedad” que asola nuestro planeta. También se muestra con claridad cómo los países más ricos tampoco están libres de la desigualdad en salud. Además, destaca el hecho de que las causas fundamentales de la desigualdad en salud no se deben a factores biológicos o genéticos, los “estilos de vida”, los servicios de salud o, incluso, la riqueza general del país.

Hay muy pocas enfermedades puramente genéticas y éstas afectan a un porcentaje de población muy pequeño. La predisposición genética casi nunca produce efectos inevitables. Además, los factores biológicos interactúan constantemente con el ambiente y una desventaja inicial genética puede ser habitualmente compensada mediante un cambio social.

Las conductas relacionadas con la salud o los mal llamados “estilos de vida” no provienen de elecciones estrictamente personales y libres. Tres cuartas partes de la humanidad (unos 4.500 millones de seres humanos) no disponen de la opción de elegir libremente factores fundamentales para la salud como seguir una alimentación adecuada, vivir en un ambiente saludable o tener un trabajo gratificante que no sea nocivo para la salud. Así pues, la salud no la elige quien quiere sino quien puede.

Aunque son importantes, tampoco los servicios sanitarios constituyen el factor fundamental que genera desigualdades en salud. Se ha podido documentar, por ejemplo, que, desde mediados del siglo XIX, la mortalidad en Inglaterra y Gales disminuyó debido, sobre todo, al control de enfermedades infecciosas mediante intervenciones sanitarias y personales como la mejora de la nutrición, el control higiénico del agua y los alimentos, y la limitación en el crecimiento de la población debido a los cambios en las prácticas reproductivas.²⁴ Ello ocurrió décadas antes de que existieran tratamientos médicos o vacunas efectivas.

Los múltiples estudios científicos recogidos por la Comisión muestran cómo, en comparación con las personas que tienen más riqueza, educación y poder, las personas de las clases sociales más pobres y explotadas son quienes tienen a la vez los peores perfiles de exposición a factores biológicos, conductuales y servicios de salud que, finalmente, se manifiestan en un peor estado de salud. Entre los factores sociales, la Comisión destaca las

²⁴ T. McKeown, R. G. Record y R. D. Turner, “An interpretation of the decline in mortality in England and Wales during the twentieth century”, *Population Studies*, N° 29, 1975, pp. 391-422. R. Dubos, *El espejismo de la salud*, Fondo de Cultura Económica, México, 1959 (traducción de José Ramón Pérez).

malas condiciones de empleo con una mayor precariedad laboral, no poseer una vivienda digna y bien acondicionada, no disponer de agua limpia, la falta de protección y servicios sociales, o no tener los recursos económicos, educativos y las oportunidades necesarias para llevar una vida saludable como tienen las personas en mejor situación económica, cultural o política. La combinación “tóxica” de factores sociales daña la salud de las personas en peor situación social y empeora también otros factores de riesgo que a su vez dañan la biología, generan enfermedad y aumentan el riesgo de fallecer. Así pues, el origen de la desigualdad en salud deriva del conjunto de determinantes sociales, económicos y políticos que anteceden a la generación de causas como las citadas entre y dentro de los países. Es lo que la Comisión ha denominado las “causas de las causas” de la enfermedad y la desigualdad. Es decir, la desigual distribución en el poder económico y social existente entre y dentro de los países que condiciona las políticas sociales y económicas, y que a su vez influye en la salud de las personas.²⁵

La Comisión y la publicación de los distintos trabajos que se han realizado suponen un importante paso para la salud pública global, comparable a los primeros documentos de la OMS sobre los efectos nocivos del tabaco o la conferencia de Alma Ata sobre salud primaria. El informe de la Comisión representa una oportunidad única para lograr que muchos millones de personas conozcan por vez primera este tema y que salgan a la luz tres puntos esenciales: que existe un fenómeno de salud pública muy importante llamado desigualdad en salud; que éste se produce fundamentalmente por causas económicas y políticas; y que podemos actuar políticamente para cambiar esa realidad. No obstante, el informe no cubre temas de tanta importancia como adentrarse en los problemas del capitalismo neoliberal, la desigualdad de clase como motor del crecimiento capitalista, el papel del imperialismo o las alternativas socialistas en América Latina, entre otras ausencias notables.

La Comisión plantea oportunidades estratégicas para generar una agenda local y global que ayude a formular, planificar y poner en marcha políticas y programas sobre los principales determinantes sociales relacionados con la salud a corto, medio y largo plazo. Hay que aumentar la igualdad social con un reparto más equitativo de la riqueza y una redistribución más igualitaria del poder internacional. Las intervenciones tienen que ver con la mejora de las condiciones de empleo y trabajo, la situación de los inmigrantes, las condiciones que afectan al desarrollo infantil, las desigualdades de género, o los problemas de vivienda y exclusión social, entre otros. También se requiere disponer de políticas fiscales que redistribuyan la riqueza de forma mucho más igualitaria, de políticas sociales que disminuyan drásticamente el desempleo, la precariedad laboral y la exclusión social y, también, de políticas que incrementen el acceso y calidad de la educación, la vivienda y los servicios

²⁵ Entrevista a Joan Benach y Carles Muntaner realizada por Salvador López Arnal para la revista digital *Rebelión*. En: <http://www.rebelion.org>

sanitarios entre quienes más lo necesitan. Sin embargo, dado que las desigualdades de la salud persisten incluso en aquellas sociedades que poseen la menor desigualdad de renta, la mejor educación pública y el más elevado nivel de salud pública y de servicios sanitarios, todo hace pensar que sin transformar la estructura económica y política a nivel nacional e internacional, es decir, las desigualdades de poder y de recursos económicos que atentan al planeta, no parece que sea posible reducir las desigualdades en salud.

La reducción de la desigualdad en salud debería constituir una prioridad en la agenda política de cualquier gobierno y administración pública. Para lograrlo habrá que cambiar drásticamente muchas de las prioridades políticas y económicas actuales e, inevitablemente, hacer frente a los poderosos intereses que hoy generan la desigualdad social.

La Red de Conocimiento de Condiciones de Empleo

Entre los factores más importantes que conforman la posición social se deben considerar las condiciones de trabajo y empleo. El trabajo es el medio de subsistencia de las personas. Las personas trabajan dentro o fuera de sus casas, con o sin contrato laboral y en condiciones saludables o peligrosas. Los factores relacionados con las condiciones de trabajo, es decir, las tareas y funciones que los trabajadores realizan en un determinado puesto de trabajo o bien los aspectos materiales del mismo, las condiciones físicas, químicas, biológicas y ergonómicas y los factores psicosociales, han recibido una gran atención y se reconocen como determinantes sociales de la salud y de las desigualdades en salud. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el caso de las condiciones de empleo. Esto ocurre principalmente por la confusión entre los conceptos de trabajo y empleo. Para distinguir bien estos dos conceptos, se puede pensar en el siguiente ejemplo: dos personas pueden realizar el mismo trabajo en la misma empresa, compartir las mismas condiciones de trabajo, pero, no obstante, trabajar bajo distintas condiciones de empleo. El primer trabajador puede ser un empleado directo y permanente de la empresa, mientras que el segundo es un trabajador temporal contratado por un empleador externo. En este caso, existen tres diferencias potenciales en cuanto a las condiciones de empleo. Primero, el primer trabajador tiene un contrato permanente, mientras que el segundo tiene un contrato temporal o ningún tipo de contrato. Segundo, el primer trabajador puede estar cubierto por el sistema de la seguridad social, con derecho a baja laboral, subsidio de desempleo y cotización para la jubilación, mientras que el segundo recibe una

La desigualdad en salud es la principal "enfermedad" que asola nuestro planeta

cobertura parcial o nula. Finalmente, el primer trabajador puede formar parte de un sindicato, mientras que el segundo no tiene ninguna opción de ser representado o participar activamente en él.

Para tratar estos temas, a petición de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, se creó la Red de Conocimiento de Condiciones de Empleo (EMCONET, por sus siglas en inglés),²⁶ con el objetivo de ayudar a desarrollar modelos y medidas para esclarecer cómo diferentes condiciones de empleo y trabajo afectan a la salud de los trabajadores. En el informe, que se encuentra disponible en internet²⁷ y que en breve será publicado y actualizado en un libro, se ofrece una descripción global y el análisis de las condiciones de empleo y las desigualdades en salud. Además, se identifican políticas e intervenciones a nivel comunitario, efectivas para reducir dichas desigualdades.

El primer resultado de EMCONET se resume en un glosario donde se definen una serie de términos que ayudan a entender las diferentes condiciones de empleo y ejes de desigualdad. Como se comentó anteriormente, las condiciones de empleo se entienden como aquellas circunstancias en que la persona se ve envuelta en su trabajo u ocupación y que, normalmente, tienen que ver con el acuerdo o la relación entre empleado y empleador. En este sentido se consideran las siguientes condiciones de empleo: empleo estándar, permanente o a tiempo completo, desempleo, empleo precario, empleo informal, trabajo infantil y esclavitud. Se define también el término de empleo justo, que engloba una perspectiva de salud pública en la que las relaciones justas de empleo son un prerrequisito para reducir la pobreza, mejorar la salud y reducir las desigualdades en salud. Implica estar libre de coerción, seguridad del trabajo, salario justo, protección del trabajo y beneficios sociales, respeto y dignidad en el trabajo, participación en el trabajo, enriquecimiento y falta de alienación. Estos términos se analizan a través de los denominados ejes de desigualdad, que permiten hacer visible la desigualdad en cada una de las condiciones de empleo consideradas. Se consideran ejes de desigualdad el género, la edad, la etnia, el estado migratorio, la clase social y la localización geográfica.

Los niños trabajadores de Costa de Marfil, los desarmadores de barcos en el sur de Asia, las empleadas de las maquiladoras de Centroamérica o los pescadores del Lago Tanzania son algunos ejemplos de la situación de precariedad en la que viven y trabajan millones de personas en el mundo. Y las cifras que se derivan son realmente alarmantes. Por ejemplo, en la actualidad, 190 millones de personas (alrededor del 30% en los países en desarrollo

²⁶ Red de Conocimiento de Condiciones de Empleo.

En: http://www.who.int/social_determinants/knowledge_networks/employment/en/index.html

²⁷ EMCONET, *Employment conditions and Health inequalities. Final Report to the WHO CSDH*, Organización Mundial de la Salud (OMS), Génova, 2007.

En: http://www.who.int/social_determinants/resources/articles/emconet_who_report.pdf

y del 4 al 12% en los países desarrollados) están desempleadas. Las mujeres, los jóvenes, los de menor educación y los trabajadores manuales son los que más probabilidades tienen de sufrir el desempleo. Por otro lado, alrededor de 550 millones de personas trabajan en situación de precariedad. Ésta se manifiesta en cifras extremadamente altas en los países subsaharianos. Por ejemplo, Sierra Leona, Liberia o Uganda presentan más del 80% de trabajadores en situación de precariedad. Por otro lado, se estima que el 25% de la población trabaja en situación de informalidad. La economía informal en países pobres afecta al 50-75% de los trabajadores, excluyendo aquellos que están empleados en la agricultura. Tampoco puede pasar desapercibido que 218 millones de niños en el mundo trabajan y 126 se ven envueltos en trabajos de riesgo. Alrededor de 2,5 millones se encuentran en países desarrollados, mientras que en países en vías de desarrollo el porcentaje de niños trabajadores oscila entre el 4% y el 67%. Igualmente alarmantes son los datos relacionados con distintas formas de trabajo esclavo o forzado que persisten en la actualidad: entre 12 y 28 millones de personas en el mundo trabajan en condiciones de esclavitud (alrededor de un 20% se relaciona con el tráfico de personas). Las mujeres y las niñas son las principales víctimas del trabajo esclavo (56%) y de la explotación sexual (98%).

Estas cifras reclaman acciones inmediatas para mejorar la vida de millones de personas. EMCONET recoge en su libro algunos ejemplos de intervenciones para mejorar las condiciones de empleo y reducir las desigualdades en salud, principalmente a nivel político. Se describen también algunas alternativas, como la creación de cooperativas en Venezuela, Argentina y Brasil. En este sentido es importante destacar la participación de los movimientos sociales.

A modo de conclusión

La desigualdad social daña nuestra salud en forma desigual. Hemos visto cómo la desigualdad en salud es el resultado de la acumulación de efectos producidos por las condiciones políticas, económicas y sociales que afectan a la población.

Un determinante fundamental de la equidad de la salud es tener mayor justicia. Y para ello hace falta aumentar la igualdad social con un reparto equitativo de la riqueza y una redistribución igualitaria de los beneficios que favorezca a quienes menos tienen. No es posible reducir las desigualdades en

Un
determinante
fundamental
de la equidad
de la salud es
tener mayor
justicia

salud sin transformar la organización, la estructura sociopolítica y las desigualdades de poder que atenazan al planeta.

La actual globalización capitalista ha ensanchado las desigualdades sociales y de salud hasta extremos jamás conocidos en la historia. Hoy en día, se estima que entre un 10% y un 20% de la población mundial vive con un nivel material muy elevado y un gasto de recursos excesivo, para lo cual deben a la vez explotarse y protegerse de quienes no tienen o tienen muy poco. Un poder tan desigual beneficia o daña muy desigualmente la salud de las gentes, de modo que el bienestar y la salud de unos pocos se alimenta del sufrimiento y la mala salud de la mayoría. Detrás de la actual globalización neoliberal, lo que está en juego es la salud y el bienestar de las personas.

En el siglo XXI, es preciso un compromiso real, personal y colectivo con el derecho a la prevención de la enfermedad y a la protección y promoción de la salud que deben tener todos los habitantes del planeta. Ello requerirá hacer frente a intereses muy poderosos, cambiar de forma drástica las prioridades sociales y económicas e incluso cambiar los sistemas políticos y económicos actuales. Nos va en ello la salud de todos.

JOSÉ VICENTE BARCIA MAGAZ

La persecución de los cuidadores: Criminalización del Movimiento Ecologista

*A Gladis del Estal Ferreño, ecologista asesinada en 1979.
Su memoria está prendida en las ramas de los árboles del mundo.*

Conforme el Movimiento Ecologista ha ido consolidando posiciones de clara radicalidad frente al paradigma de desarrollo actual, los defensores del sistema han potenciado una guerra sucia y sin cuartel. A partir de este escenario de confrontación asimétrica, se deben desarrollar las lecturas necesarias para que la labor ecologista, de potente carga transformadora, pueda ubicarse de manera ajustada en una realidad que tiende a un colapso dinámico y donde el capitalismo más salvaje, siempre cortoplacista, incrementará, sin lugar a dudas, su estrategia de huir hacia adelante, aniquilando a su paso todo cuanto se le oponga.

Leonard Peltier, Chico Méndes, Ken Saro Siwa, los asesinatos de campesinos ecologistas en Centroamérica, el atentado perpetrado por los servicios de inteligencia francesa contra el *Rainbow Warrior*, la muerte de abogados ambientalistas en Filipinas, las agresiones constantes a activistas de Ecologistas en Acción por los especuladores urbanistas de diferentes lugares de España, o la saña mediática, política y judicial soportada por los *Solidar@s de Itoiz*, por citar sólo algunos ejemplos, son respuestas diferentes en coyunturas locales distintas que, no obstante, corresponden y obedecen al mismo guión y objetivo genérico: seguir manteniendo a toda costa la depredación del planeta como paradigma de desarrollo y fuente de privilegios de una minoría en el mundo. Generando para ello, un ambiente de acoso y terror que aisle a los resistentes, a los que han hecho del cuidado del mundo una auténtica ideología de lo cotidiano.

José Vicente Barcia Magaz es responsable de Prensa y Comunicación de Ecologistas en Acción y miembro del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional

Caminos de la Disidencia

¿Sabe un árbol lo que aporta al mundo? ¿Sabe acaso un yanomami que forma parte de la lucha global por la Tierra? Las nubes se desmoronan en lluvia sin saber de la gran sequía, sin conocer lo que salvan o lo que anegan. Así de remoto queda el universo espiritual que vincula a los aborígenes con la Tierra, respecto de un ecologista imbuido en la cultura occidental, por ejemplo. Y sin embargo, desde nodos culturales y vivenciales tan diferentes, se comparte, en este filo de la historia, la misma trinchera, con sentimientos parejos.

Al menos son tres los elementos esenciales que hacen converger a movimientos indígenas de todo el mundo, con el amplio espectro ecologista y las corrientes ecofeministas:

- a) El arraigo a la Tierra y a sus habitantes a través de una profunda cultura del cuidado, lo que genera el marco conceptual y práctico de una auténtica propuesta de sostenibilidad.
- b) La imposibilidad de hacer compatible un modo de vida basado en este valor del cuidado con los actuales paradigmas de desarrollo.
- c) El planteamiento de libertad responsable, entendida ésta como una referencial organizativa y convivencial, en la que se da cita una pulsión individual que tiene su sentido en el desarrollo equitativo y colectivo.

En este sentido, no se trata, como se pretende desde el poder, de atenuar ciertas disrupciones de la relación entre capitalismo y planeta, intentando torticera o ingenuamente crear un modelo de *capitalismo sostenible*. Valga como ejemplo de lo anterior la búsqueda de un sustituto, que no alternativa, a los combustibles fósiles, a través de los agrocombustibles, y su brutal repercusión sobre el entorno y sus moradores, principalmente en el sur del mundo. De lo que se trata, en definitiva, es de acabar con un modelo que, empecinado en sí mismo, desbocado y sin límites, está generando las condiciones para un colapso global, donde los procesos de homeostasis socioambientales no son suficientes para seguir regulando un modo de vida duradero y de calidad.

De este modo, es fácil comprender que, desde situaciones bien diferentes como pueda ser la representada por el movimiento ecologista europeo, en relación al movimiento indígena estadounidense, o a los movimientos de solidaridad y protección ambiental africanos, en realidad lo que se plantea es la búsqueda urgente y denodada de una alternativa diferente y contraria al capitalismo, que genere un nuevo contrato social entre la humanidad y su entorno. Un contrato que se signifique como referencia irrenunciable de justicia ambiental, entendida ésta, en una acepción sencilla, como posibilitadora de una organización humana solidaria. Desde esta perspectiva quedan evidenciados los lazos que existen entre el Ecologismo Social y los movimientos que luchan por la justicia social, en el sentido de que para que pueda generarse un modelo de desarrollo sostenible es imperativo que se esta-

blezca un sistema económico que garantice un modelo realmente solidario. Sin salud en el modo de relación humano no es factible la salud de su relación con el planeta.

Todo lo cual es, a todas luces, incompatible con el corpus doctrinario del sistema y sus guardianes. Incapacitado el capitalismo para la negociación con quienes niegan sus bases lógicas a través de la reivindicación de otra forma de vida, se han venido articulando diferentes estrategias que ya habían sido utilizadas con anterioridad en el exterminio de otras disidencias. Así, en no pocas ocasiones, los ecologistas han sido los nuevos comunistas, socialistas o anarquistas a abatir, como atestiguan las últimas declaraciones del ex presidente del gobierno español, José María Aznar, cuando subraya que el ecologismo es una de esas utopías, que bajo la más bondadosa de las apariencias, lo que pretende es acabar con la libertad.

En realidad lo que se plantea es la búsqueda urgente y denodada de una alternativa diferente y contraria al capitalismo, que genere un nuevo contrato social entre la humanidad y su entorno

Igualmente ilustrativo resulta uno de los primeros párrafos del libro escrito por el presidente checo, Václav Klaus, *Planeta azul (no verde)*: “En los últimos 150 años, como mínimo desde Marx, los socialistas han ido destruyendo la libertad humana con eficacia, con lemas de aparente interés humano y humanístico: por el ser humano, por su igualdad social con los demás, por su bien. Los ecologistas lo hacen mediante lemas de un interés no menos noble: por la naturaleza y por una especie de bien sobrehumano. Recordemos su lema radical: *Earth first* [La Tierra primero]. En ambos casos, las consignas eran (y son) una simple tapadera. En realidad se trataba (y se trata) del poder de la supremacía de los elegidos (como ellos se consideran), sobre el resto de nosotros, de la implantación de una única ideología correcta (la suya propia)”.

Una lectura básica de algunas reflexiones sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aporta nitidez sobre las medidas que se toman para neutralizar la propuesta ecologista, ya que esta estrategia se ha tomado como ejemplo a seguir en la lucha contra las nuevas subversiones. La educación y el consumo, entre otras, son formas que fluyen a través de los medios de comunicación con una potente carga alienadora. Se subraya un ejemplo que evidencia que la lucha para acabar con los cuidadores se produce de modo multidimensional y respondiendo a una lógica extremadamente sencilla: dado que el ecologismo social plantea una propuesta global que cuestiona lo nuclear del sistema capitalista, el sistema capitalista hace lo propio, aunque con algunas diferencias bien importantes; aquellas que derivan del aprovechamiento de su primacía, cuenta con todos los medios y, además, con la legitimidad social que le ofrece la necesidad de su autoprotección.

Además, lo cierto es que, como nos recuerda el sociólogo y ensayista portugués, Boaventura de Sousa Santos “a lo largo de las últimas décadas, los movimientos ecologistas ganaron credibilidad a medida que la ciencia fue demostrando que sus argumentos se traducían en hechos indiscutibles.” Lo que, sin lugar a dudas, ha propiciado una mayor polaridad y una mejor identificación del *enemigo*, por parte del sistema.

Estrategias contra la Cultura del Cuidado

Identificado el nuevo enemigo, constatado que sus principios son incompatibles con las esencias del sistema, se ha venido implementando toda una panoplia de estrategias conducentes al aislamiento y derrota del ecologismo.

Como es obvio, la implementación de estrategias no es simétrica, sino que por el contrario, obedece a una lógica de adaptación a la coyuntura histórica y local concreta sobre la que se opere. También es necesario tener en cuenta que dentro de los contextos locales se debe subrayar el papel primordial de quienes articulan el poder, ya sea este público o proveniente de instituciones privadas. Así, podemos arrojar una primera conclusión: las estrategias de lucha contra los cuidadores se estructuran teniendo en cuenta el momento histórico, la coyuntura local, (la represión no se manifiesta del mismo modo en Estados Unidos que en un estado fallido de Asia o de centro América, por ejemplo), la peculiaridad de los resistentes y las fortalezas y urgencias de los represores. Todo ello para conseguir que: el movimiento ecologista no sea tenido en cuenta socialmente como agente de solución, para lo que es necesario aislarlo, evitando de este modo que los cuidadores no cuenten con legitimidad social y, a partir de ahí, aniquilarlo a través de diferentes tácticas.

Cartografía de la Represión

La descripción general del anterior planteamiento estratégico, se implementa a través de una labor táctica en la que se están invirtiendo cuantiosos recursos. Repasemos algunas referencias determinantes de la lucha global contra el ecologismo.

1º) Estigmatización

Política básica de identificación, en la que se establecen las bases de la diferenciación del cuidador en relación a su comunidad. Se trata de ir asentando las bases para su aislamiento social, para lo cual se le atribuyen valores y cualidades que no sólo le ponen en peligro a él, sino a su sociedad, ya sea este peligro de índole exógeno, temor a represión externa

(violencia estructural o física), o endógeno, al cuestionarse el *modus vivendi* de esa sociedad.

La estigmatización resulta eficaz siempre y cuando el estereotipo sea interpretado por la sociedad como verdad pública y explícita. Así, y utilizando la terminología del ínclito Walter Lippman, el pseudo entorno inducido y artificial, de fácil metabolización social por su simplicidad, sustituye a la realidad, implícita y compleja que encarna los valores del cuidador.

La estigmatización de los resistentes reduce a estos a meros estereotipos, a cuartadas que justifiquen la ira o el rechazo y que los aislaran de la red solidaria de su comunidad.

Valga como ejemplo de lo anterior tres alusiones breves y concretas, que se expresan de modo similar en el espacio de lo macro y en el territorio de lo local.

La Ficción Como Emisora de Valores que Justifican una Represión Real

En la lucha por degradar la imagen de los ecologistas estadounidenses, los *neocon* no han dudado en recurrir a las ficciones más descabelladas como modo de influir y sustituir la realidad (cine, televisión, literatura...). Este es el caso de una de las últimas publicaciones de M. Crichton, que siendo leída por millones de personas, engarza en un delirio ficcionado, todas y cada una de las líneas argumentales contra la existencia del cambio climático esgrimidas por la Administración Bush. Por difícil que resulte de creer, tras la presentación del libro, en el que se denostaba a los ecologistas, en numerosos foros y tertulias se echó la culpa del impacto del huracán Katrina a los que habían señalado como causantes de la virulencia de este huracán, a la destrucción de los pantanos y al cambio climático. Paralelamente, se produjeron diferentes iniciativas del Fiscal General contra los ecologistas, en evidente combinación con diferentes líneas de investigación abiertas por el FBI.

El Efecto Sombra

Quizá sea más fácil comprender el caso anterior si lo situamos en un espacio más inmediato. Se trata de proyectar sobre la sociedad una conclusión no racionalizada, creando una corriente de opinión en virtud de un sentimiento de dolor, miedo, odio... Para que se produzca lo anterior se establece un víncu-

En no pocas ocasiones, los ecologistas han sido los nuevos comunistas, socialistas o anarquistas a abatir

lo entre un emisor de miedo y los cuidadores, que es interpretado socialmente como si los cuidadores fueran en sí mismos, nuevos emisores de miedo y dolor.

Este es el caso del vínculo que los medios de comunicación, en connivencia con otros estamentos, han establecido entre el potente movimiento ecologista contra el Tren de Alta Velocidad y la Y vasca, con ETA. Esta es la misma táctica utilizada, por ejemplo, para desprestigiar y criminalizar la lucha contra la central nuclear de Lemoniz o contra el embalse de Itoiz.

Cabría destacar el recorrido de lo macro a lo micro, en lo concerniente a la emisión de valores negativos sobre el ecologismo. Sirva como ejemplo, el intento de identificar ecologismo con terrorismo desarrollado por una de las publicaciones de la Sierra de Madrid, a la postre, auspiciada por la Comunidad Autónoma de Madrid y cuyo principal titular fue: "Los Ecologistas Apoyan a ETA".

A poco que se conozca el desarrollo del movimiento ecologista en el Estado español, se podrá entender lo increíble que son las mentiras que pretenden vincular a este movimiento con acciones, grupos o campañas violentas. La trayectoria ecologista siempre ha estado vinculada al pacifismo, de hecho, una de las señas de identidad del movimiento ecologista es su apuesta histórica por la resolución pacífica y justa de los conflictos; por el desarme y la abolición de los ejércitos.

Culpar a la Víctima

Otro ejemplo, es el que se refiere a la culpabilización de la víctima, con el viejo y siniestro argumento de que "algo harías para que te pasara esto". En 2005, el coordinador de Ecologistas en Acción de Andalucía recibió diferentes amenazas personales a través de panfletos, en los que se amenazaba con incendiar su casa, localizada en el municipio de El Puerto de Santa María, en Cádiz. La tensión fue creciendo hasta niveles difíciles de soportar con el objetivo de que Ecologistas en Acción dejara en su oposición a diferentes planes urbanísticos. Ante esta situación, el alcalde de la localidad culpó del origen del conflicto a Ecologistas en Acción y a Juan Clavero, su coordinador. Tras esta respuesta del alcalde, la Delegación del Gobierno, consciente del riesgo real que corría el ecologista, se vio en la necesidad de disponer un servicio de protección en la vivienda de Juan Clavero.

2º) Asimilación

Sin embargo, el proceso de estigmatización a través del estereotipo inducido, no tiene siempre un efecto de aislamiento hermético. Por el contrario, algunos valores, referencias esté-

ticas, etc., logran, así sea de manera parcial, llegar a la sociedad. En estos casos, el sistema reacciona con gran plasticidad, haciendo gala de una de sus características más importantes, que no es otra que la capacidad de fagocitar cualquier valor, destruyendo su esencia y devolviéndolo a la sociedad como un elemento vacío, inocuo y de nula capacidad transformadora.

En esta categoría se deberían englobar planteamientos de dos naturalezas:

- a) **La división de buenos y malos.** Ésta se produce cuando se fomenta la aceptación pública de un valor que, al estar disociado, aún contando con cierta carga crítica, no cuestiona la centralidad del sistema, sino que, por el contrario, proponga una enmienda parcial que, lejos de abundar en la transformación de la realidad, mejore el sistema, como si de una vacuna se tratara. Esto es posible gracias a una visión polar de los cuidadores. De una parte estarían los integristas ambientales, radicales de nuevo cuño sin mayor propuesta que la mera destrucción. Y de otra, aparecerían aquellos críticos constructivos que aportan valores de sensibilidad y avance, en campos tan concretos como parciales.

Un ejemplo de duro recuerdo y del que en buena medida el movimiento ecologista extrajo importantes lecciones, fue el de los Solid@rios con Itoiz. Para defender uno de los mejores santuarios naturales de Europa de un embalse tan inmenso como absurdo, un grupo de militantes ecologistas sabotearon sus obras. Para ello inmovilizaron de manera incruenta a los guardas de seguridad. Este hecho fue usado para tildar la acción de violenta y extremista. Una parte importante del ambientalismo picó el anzuelo y los Solidari@s con Itoiz soportaron durísimas condenas de prisión.

- b) **La manipulación publicitaria.** Quizá en el Mayo del 68 nos equivocamos al pedir que la imaginación llegara al poder, entre otras cosas, porque la imaginación llegó al poder y se convirtió en publicidad. En la línea de fagocitar todo valor y devolverlo neutralizado a la sociedad, se debe entender la embestida de las grandes marcas, que vistiéndose de verde promueven el consumismo más devastador, aportando una justificación que estimula todavía más la venta. Mariano González, uno de los responsables de contaminación de Ecologistas en Acción es contundente: “nos encontramos con unas marcas que utilizan el discurso ecologista de la necesidad de cambiar, pero ofrecen como herramienta de cambio, un producto que abunda en la destrucción medioambiental”. Las campañas de Endesa o Peugeot son dos buenos ejemplos. Esta misma automovilística lanzó al mercado una serie de vehículos que excedían con mucho la legislación vigente en materia de emisiones con el eslogan, “Cada vez son más los que contaminan menos”.

Tras todo lo cual, resulta fácil comprender que el capitalismo hace suyo, a través de esta referencia táctica, la máxima de Nietzsche: “en la escuela de guerra que es la vida, aquello que no me mata me hace más fuerte”.

3°) Negacionismo

A pesar de todo, la verdad es que las disidencias que proponen una cultura del cuidado, han ido ganando en eficacia comunicativa, logrando trasladar a la sociedad importantes análisis que vienen a corroborar la necesidad de evitar el colapso, no a través de medidas paliativas y sí con transformaciones estructurales.

La cuestión del cambio climático es paradigmática, ya que el fenómeno pronosticado por científicos y ecologistas desde hace décadas y cuya eclosión se está produciendo ya de manera insoslayable, ha sido objeto de una refutación irracional hasta la náusea.

La táctica en este caso ha sido tan potente como eficaz y ha consistido en contradecir la verdad, negándola y relativizándola, a través de la contratación de un inmenso grupo internacional de científicos que ante la evidencia, ha sido capaz de renunciar a la esencialidad de su hacer científico, en virtud de intereses de índole económico y político. Luis González, coordinador de Ecologistas en Acción, subraya lo “paradigmático de la petrolera Exxon-Mobil, que financia a más de 47 grupos de científicos y comunicación, para que elaboren informes y materiales diversos en los que se niegue la importancia del cambio climático”. La Exxon-Mobil, llegó incluso a ofrecer en 2006, 7.000 para cada científico del IPCC (Panel sobre cambio climático de la ONU), que se minimizara los impactos del calentamiento global. Incluso la NASA admitió que había manipulado datos sobre el tamaño de la capa de ozono, etc.

¿Por qué esta medida ha sido potente y eficaz? Ha sido potente porque ha contado con suficientes medios como para generar una negación de la evidencia, comprando los escrúpulos de numerosos científicos. Ha sido eficaz, porque este negacionismo ha enfangado y entorpecido la toma de conciencia ciudadana y la puesta en marcha de políticas ciertas para la lucha contra el cambio climático. Todo lo cual ha hecho perder a la humanidad un tiempo tan precioso como necesario.

Otro caso típico de negacionismo, es el que se refiere a la industria nuclear, que defiende la eficacia de esta energía negando sus riesgos, negando su solvencia económica, negando la dependencia geoestratégica que propone, negando lo irresoluble de sus residuos radiactivos, etc.

4°) Criminalización

Identificada la resistencia a través de la inducción de un estereotipo que abunda en la construcción de una imagen de enemigo perfecto; dividida la resistencia entre buenos y malos,

entre extremistas y conservacionistas; dispuestos encima de la mesa los beneficios a perder, el sistema se dispone a implementar medidas de erradicación de la disidencia. Para ello, utiliza la ejemplificación, con el ánimo de disuadir y mostrar cual es el camino de quien ose desafiar los límites del sistema. A continuación se enumeran algunos ejemplos que no son más que una muestra de lo que está ocurriendo en todo el planeta. Los dos primeros evidencian que las estrategias anti-ecologistas se llevan implementando desde hace muchos años. El caso de Filipinas vincula directamente a la presencia de las mineras internacionales y a la llegada de la presidenta Macapagal Arroyo, con los asesinatos de ecologistas. Finalmente hacemos una mención al hostigamiento que diferentes activistas de Ecologistas en Acción vienen sufriendo. Sin embargo, como ya se ha sugerido, la lista podría ser inmensa: desde los ataques en Nigeria sufridos por activistas de la Social Action, hasta la persecución judicial de los ecologistas nipones, pasando por el reguero de sangre que está dejando la industria de los agrocombustibles en América Latina, con el asesinato reciente, en Colombia, de un opositor a la industria del aceite de palma. También se podrían apuntar numerosos ejemplos de asesinatos de indígenas relacionados con Repsol y las explotaciones y prospecciones petrolíferas en Suramérica.

Leonard Peltier, Dos Cadenas Perpetuas por Defender el Derecho de su Pueblo a Vivir en Paz con la Tierra

En los años 70, Leonard Peltier era un joven líder de las naciones Anishinabe y Dakota/Lakota, que hastiado de los constantes abusos y violaciones que se venían produciendo en la reserva Pine Ridge, decidió plantear una lucha pacífica, ocupando Wounded Knee, el mismo lugar donde un siglo antes, el ejército estadounidense había masacrado a 300 dakotas. Aquella ocupación, que se extendió durante 71 días, reivindicaba el fin de los asesinatos de nativos norteamericanos, cuya lista superaba los 60, así como el respeto a un modo de vida acorde con la los ciclos naturales y la integración del ser humano con el medio. En el desalojo de aquella ocupación murieron dos agentes del FBI y un miembro del Movimiento Indio Americano. En un juicio cargado de irregularidades, Leonard Peltier fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas, a pesar de haberse encontrado evidencias de su inocencia. Evidentemente, se trataba de ejemplarizar la apuesta del Estado contra el movimiento indígena, que, a la postre, se fue desmovilizando. Considerado prisionero político por Amnistía Internacional, Peltier lleva más de 30 años en prisión.

20 Años del Asesinato de Chico Méndes

El 22 de diciembre de 1988, Chico Méndes fue asesinado en la puerta de su casa. Atrás quedaba el hermoso recorrido de un sindicalista que proponía una vía armónica de desarrollo humano y defensa de la Amazonía. Los seringueiros, con Chico Méndes a la cabe-

za, denunciaron la destrucción amazónica y, con ello, la del modo de vida de los pueblos de la selva. Una propuesta factible de desarrollo, alternativo al de los latifundistas del estado de Acre, resultó intolerable para los hacendados locales y los intereses internacionales que defendían, en la línea de la roturación selvática para implantar gigantescas explotaciones de soja, y cerrar de este modo el ciclo productivo de algunas de las cadenas de hamburgueserías más importantes del mundo.

18 Ecologistas Asesinados en Filipinas

El 28 de abril de este mismo año, Clemente Bautista, coordinador nacional de Kalikasan-People's for the Environment, hacía un llamamiento desesperado a que cesaran los asesinatos de ecologistas. En los últimos años han caído bajo las balas de las grandes mineras internacionales, que están asentadas en Filipinas, 18 activistas, entre ellos los abogados Napoleón Pornasodoro y Joey Estriber. Nuevamente, vuelve a estar en el punto de mira, un ecologismo social que plantea una crítica total ante las consecuencias del sistema: "Mientras que los filipinos son cada vez más pobres, las grandes minerías son cada vez más ricas. Nos hemos visto privados del derecho a respirar aire limpio, beber agua potable, comer alimentos sanos y vivir en un medio ambiente protegido", sentenció el activista Josie Guillao.

Política de Hostigamiento contra Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción es la confederación ecologista más importante del Estado español. Su estructura reticular ha conferido a esta organización una gran presencia y significación en el territorio. Así, Jaime Doreste, abogado de *Ecologistas en Acción*, considera que "nuestra organización, en su defensa del territorio, está desarrollando un papel anticorrupción, que supone un enfrentamiento con poderes diversos que, no obstante, tienen un objetivo común: la destrucción, el control y la adecuación del territorio a sus intereses".

En el informe que esta entidad publicó sobre la violencia contra activistas entre los años 2000 y 2006, se narra con detalle cómo desde los intereses del urbanismo especulativo, se agrade de manera calculada y reiterada a quienes se oponen a sus planes; lo que da una imagen clara de la lucha de trincheras que se viene desatando por la defensa medioambiental contra entidades que ganan o pierden cientos de millones de euros en función de que puedan o no desarrollar sus planes urbanísticos.

La escenificación de la agresión puede tener en su centro una representación política o no, es decir, puede contar con una *tapadera* pública, aunque en realidad se trate de un interés privado. Algunos casos a referenciar pueden ser:

- 1º) José Ignacio Domínguez, abogado de *Ecologistas en Acción*, ha tenido que soportar como en Nijar, su localidad, el alcalde ha recogido firmas de la población como medida para expulsarle del pueblo. Tiempo después, José Ignacio captó con una cámara de videoprotección como un sujeto depositó sustancias tóxicas en el depósito del agua potable de su casa.
- 2º) En la lucha contra la ampliación de la carretera madrileña M-501, Concha Velasco, miembro del colectivo *Sierra Oeste Desarrollo SOStenible*, ha sufrido las amenazas personales de miembros del gobierno municipal de su pueblo, Pelayos de la Presa. Una de ellas por parte del concejal del PP Severino Pastor Linaza que ante la Guardia Civil llegó a amenazarla de muerte, “cuando te coja a solas te dejo hecha un trapo”.
- 3º) En el pueblo cacereño de El Gordo, Paca Blanco, coordinadora de *Ecologistas en Acción de Extremadura*, es objeto continuado de agresiones por oponerse a diferentes desarrollos urbanísticos. Se trata de vecinos de la localidad que, con la pasividad de su alcalde, insultan, amenazan y lanzan artefactos incendiarios, con el fin de silenciar su labor de protección ambiental.

Algunos Interrogantes

A la luz del análisis, resulta fácil comprender la magnitud y complejidad de lo que supone la persecución de los cuidadores. Quizá por ello, por la importancia de su labor y la necesidad de su existencia, se susciten algunos interrogantes de futuro:

¿Será capaz, el movimiento ecologista, de ganar suficiente legitimidad social para que los agresores obtengan, como consecuencia de su violencia, mayor desgaste político y social?

¿Qué lecciones extraerán los cuidadores sobre el estudio de los modos represivos utilizados por el sistema contra otras disidencias anteriores?

¿Se logrará crear suficiente efecto red para que lo que hacen los intereses multinacionales en un lugar del mundo, pueda tener respuesta social y jurídica en el otro?

Y finalmente, se me ocurre otra pregunta mientras contemplo a mis compañeros y compañeras de Madrid, Manaus, Manila, Tokio... ¿Lograrán los cuidadores cuidarse?

PAPELES: Revista de relaciones ecosociales y cambio global
www.revistapapeles.fuhem.es

**Ciudades, globalización y exclusión social:
apuntes para la reflexión** 55

Carlos Gómez Gil

**La inmigración en España: racismo institucional y
racismo social** 75

Edoardo Bazzaco

**Rusia y EEUU en el Cáucaso occidental:
lecciones de una crisis** 85

Carlos Taibo

CARLOS GÓMEZ GIL

Ciudades, globalización y exclusión social: apuntes para la reflexión

Cada vez resulta más necesario plantear estrategias, reflexiones y alianzas que permitan movilizar a ciudades de todo el mundo para aprovechar los profundos cambios y transformaciones que está generando una globalización tan compleja como imparable. Se trata, en definitiva, de proponer análisis de una cierta envergadura sobre la ciudad, situando a ésta en el espacio global en el que sin duda se inserta, algo que se nos antoja como un ejercicio repleto de problemas, pero no por ello menos necesario. Utilizando palabras de Norman Birnbaum, frente a un mundo de complejidad creciente y abrumadora, no pocas ciudades se mueven en un localismo estrecho impulsado por intereses nada prosaicos de la mano de la fiebre urbanizadora y especulativa que ha arrasado este país en los últimos años, reduciendo con ello la ciudad a un simple tablero de negocios y rentabilidades que están cortocircuitando su futuro. Precisamente por ello, no debemos renunciar a situar nuestras urbes dentro de los numerosos debates emergentes que se están planteando en todo el mundo, siendo uno de ellos el papel de éstas en la globalización.

Carlos Gómez Gil es doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, especialista en Cooperación Internacional, Desarrollo e Inmigración, e investigador de BAKEAZ (Centro de Documentación y Estudios para la Paz del País Vasco)

Las transformaciones que el proceso de globalización está originando en todos los planos de nuestra vida están fuera de toda duda. Hoy en día es difícil encontrar algún aspecto en nuestra convivencia que no se haya visto modificado de una manera apreciable en los últimos años. Todos sabemos que el mundo está evolucionando aceleradamente, que estos cambios son de carácter mundial y que afectan a todos los niveles de la sociedad, a pesar de no poder explicar de forma precisa las fuerzas y razones que los alimentan y que con frecuencia justificamos con ese concepto tan ambiguo y complejo como es la globalización.

Posiblemente no hay un término sobre el que se haya escrito tanto, pero del que se conozca tan poco entre el conjunto de los ciudadanos. Defensores y detractores han venido utilizando la globalización como un término polisémico,

capaz de apoyar sus respectivos postulados por opuestos que éstos puedan ser, hasta acabar por borrar sus significados básicos. Ello puede deberse a que estamos ante una palabra que es concepto y proceso al mismo tiempo, que en sí misma lleva implícita una capacidad de evolución y metamorfosis tan extraordinaria que con frecuencia desdibuja los contornos de nuestros análisis. Autores como Fernando Vallespín hablan con propiedad de “concepto refugio”, en la medida en que presenta una falta de precisión semántica que le permite ser utilizado profusamente para explicar la percepción social y política.

La palabra globalización empezó a utilizarse básicamente en el ámbito económico, si bien su proyección va mucho más allá de esta materia, incidiendo en aspectos sociales, políticos, culturales, militares, medioambientales, científicos, tecnológicos, ideológicos, educativos y comunicacionales. La presencia creciente del término en la práctica totalidad de las esferas de nuestras vidas lleva a una cierta contradicción: la globalización es importante y afecta a nuestro quehacer diario, pero no es un concepto sencillo, unívoco y preciso. Sin embargo, la mayor parte de los profundos cambios socioeconómicos que se están produciendo en el mundo son justificados por este proceso global, apareciendo así ante la mayor parte de la población como causa y consecuencia de las transformaciones que se viven, unas con repercusiones positivas, pero otras muchas también con efectos claramente negativos, sin que seamos capaces de explicar de forma precisa los contornos, las dinámicas y las causas de un concepto tan esencial en el momento actual.

Todo ello produce una sensación ambivalente de desconcierto y desasosiego entre la sociedad, que se materializa en las enormes energías que defensores y detractores dedican a apuntalar sus respectivos postulados, dibujando con frecuencia posiciones caricaturescas entre sus acérrimos partidarios, predicadores de bondades infinitas de la mano de un proceso ante el que no caben oposiciones ni cambios; frente a los cuales se sitúan también no pocos opositores furibundos que han encontrado aquí la clave para explicar todo tipo de males y catástrofes, a pesar de ser incapaces de enmarcar algunos de sus rasgos más elementales.

Tanto unos como otros confunden a menudo causas y consecuencias, procesos con resultados, amparándose en el carácter abstracto y nada sencillo del término globalización, que a medida que es más utilizado nos aleja más de su correcta comprensión. Conscientes de ello, se está tratando de hacer de la globalización una ideología, una cosmovisión dotada de comportamientos, códigos y significados específicos capaces de dar respuesta a la realidad social, al tiempo que proporciona legitimidad a los grupos dominantes en sus respectivos campos de actuación.

A la luz de todo ello, se comprenderá que el concepto de globalización sea, sin duda, uno de los más controvertidos en las ciencias sociales, y posiblemente también uno de los más extendidos. En nuestro caso, nos interesa centrarnos en conocer cómo afecta este fenómeno a los

procesos urbanos y al desarrollo de las ciudades contemporáneas en el sistema mundial, y, desde esta perspectiva, comprender algunos de los cambios sociales que se están generando.

El fenómeno de la globalización: rasgos básicos que caracterizan el proceso.

La globalización es un largo proceso histórico que se ha visto acelerado desde los años setenta, de la mano de un conjunto de elementos novedosos que están transformando la convivencia humana en el ámbito mundial, alterando no sólo aspectos más visibles y tangibles como la economía, las finanzas o las inversiones, sino otros muchos que tienen que ver con las relaciones sociales, los espacios de gobierno y de poder, así como las competencias de las instituciones que intervienen en el proceso.¹

Al tiempo que se reafirma el ámbito mundial como lugar en el que la globalización opera, se enfatiza el carácter neoliberal de esta globalización al acentuarse el componente capitalista del proceso, con una modificación sustancial de los espacios habituales en los que se desarrolla la acción ciudadana y, con ello, de los territorios de gobernanza.

Los Estados tradicionales siguen siendo instituciones determinantes, pero surgen otras más amplias y complejas, donde la economía, la política y las relaciones de producción difuminan sus barreras habituales. Por ello, las profundas transformaciones que la globalización está produciendo debemos analizarlas también desde la perspectiva del gobierno mundial, a partir de las mutaciones que el Estado está viviendo, entendido éste como espacio básico generador de consensos y garante de necesidades básicas colectivas.

La política y sus decisiones no se limita ya a las áreas reconocidas históricamente dentro de los propios Estados, sino que se amplía a un espacio transnacional donde intervienen, participan e interactúan nuevos actores, que desarrollan a su vez novedosas estrategias de acción utilizando para ello muchos de los avances que han permitido consolidar la globalización neoliberal, como las telecomunicaciones, Internet, la informática o las nuevas tecnologías. Las fronteras aparecen de esta forma cada vez más difusas en la gobernanza intraestatal, en un marco de poderosa complejidad donde aumentan las interdependencias e interacciones transnacionales, consolidándose unos Estados con una soberanía cada vez más fragmentada.

Una característica de la globalización neoliberal son las crecientes situaciones de exclusión y desigualdad que ha creado para sectores cada vez más amplios de la humanidad. Estos sec-

¹ Esta definición ha sido trabajada por el autor en diferentes estudios y publicaciones. Entre otros, se puede ver C. Gómez Gil, *Las ONG en la globalización. Estrategias, cambios y transformaciones de las ONG en la sociedad global*, Icaria editorial, Barcelona, 2004.

tores se han agrandado en las últimas décadas, precisamente cuando se afirmaba que se daban las mejores condiciones económicas, políticas y sociales para disminuir esos espacios de pobreza gracias al avance de la mundialización misma. Y en todo ello tienen mucho que ver las reestructuraciones y reajustes que se están produciendo en los nuevos intereses de un capitalismo transnacional que opera con nuevas reglas, habiendo obligado a los Estados-nación clásicos a reducir sus funciones básicas y tradicionales.

Los procesos de transformación que atraviesan los Estados empujados por la globalización reducen sensiblemente sus funciones y recursos en beneficio de otros agentes económicos, entre los que sobresale el mercado como espacio básico y determinante en el que opera el capital en el neoliberalismo, y también la propia sociedad civil, que aparece reforzada y diversificada, debido a mecanismos muy complejos de sustitución de planos de intervención, de reivindicación de nuevas solidaridades y también de actuación en áreas que han sido abandonadas paulatinamente por el Estado a través de los mecanismos de liberalización, privatización y desregulación emprendidos en las últimas décadas.

Los Estados-nación han ido perdiendo así progresivamente su capacidad de intervención, teniendo cada vez mayores dificultades para atender por sí solos las necesidades de sus ciudadanos y defender sus legítimos intereses, en la medida en que un número cada vez mayor de recursos y decisiones escapan de sus fronteras para situarse en un espacio global, donde las atribuciones básicas del Estado escapan de su control y se debilitan. Sin embargo, el Estado-nación sigue siendo la columna vertebral de la arquitectura del buen gobierno global, aunque se encuentre disminuido por la preeminencia de intereses económicos muy diversos que llevan a su debilitamiento y a la transferencia progresiva de funciones a favor de otras instituciones supranacionales. Todo ello hace que los roles del Estado en la era de la globalización sean, si cabe, más importantes que nunca para facilitar la convivencia, garantizar un desarrollo humano básico y permitir el respeto a una justicia básica y universal.

La globalización y las ciudades contemporáneas

Entre otros procesos esenciales, la globalización interviene en la formación de redes de naturaleza muy amplia, que en el tiempo y el espacio adquieren una escala transnacional. De esta forma, se producen dinámicas que transforman los ámbitos locales y regionales a través de conexiones internacionales que crecen impulsadas por avances desarrollados por la globalización misma. La ruptura de las dimensiones tradicionales de espacio y tiempo sobre el territorio, en línea con lo que autores como Immanuel Wallerstein o Anthony Giddens han analizado,² ha

² En este sentido, ver los argumentos desarrollados por A. Giddens sobre el impacto de las telecomunicaciones, los medios de transporte y las nuevas tecnologías de la información en el aumento de la acción del capital, el comercio y los intercam-

sido un elemento clave para que la globalización avanzara en determinados momentos históricos y desde luego lo está siendo también en estos momentos.

Así las cosas, la globalización está íntimamente relacionada con las transformaciones sistémicas que afectan a las ciudades y las dinámicas relacionales por parte de regiones y Estados para reacomodarse a un escenario tan complejo como cambiante. Cambios estructurales y territoriales son, por tanto, elementos centrales en las relaciones locales, comarcales, regionales, nacionales y supranacionales que generan a su vez transformaciones urbanas de envergadura.

Intentemos hacer un esfuerzo por identificar los elementos estructurales sobre los que la globalización afecta de manera decisiva a las ciudades. Vamos a describir diez de ellos, relevantes para nuestro análisis:

1. La globalización determina más que nunca a unas ciudades cuyo avance ha pasado siempre por superar los límites locales, como han señalado autores como Janet Abu-Lughod o Inmanuel Wallerstein.³
2. La globalización no es un fenómeno natural, contingente e inevitable, sino la consecuencia de un conjunto de decisiones humanas deliberadas que han actuado sobre planos y procesos múltiples. Los trabajos de Ángel Martínez González-Tablas, Joaquín Estefanía, Carlos Taibo o Ulrich Beck son suficientemente ilustrativos de lo que decimos.⁴
3. Precisamente por ello, la globalización no presenta la misma intensidad en las diferentes ciudades y regiones, ya que son muy distintas las respuestas, estrategias y alianzas que se están desarrollando, y especialmente la geometría de las redes que se está estableciendo en los diferentes lugares del mundo, como señalan autores como Manuel Castells⁵ o Gerardo del Cerro⁶.
4. Por todo ello, en modo alguno podemos hablar de un proceso lineal, homogéneo y predeterminado en todas las ciudades de la mano de la globalización, sino que las condiciones locales, las decisiones que se adoptan y las estrategias que se construyen marcan de forma decisiva la posición que cada ciudad ocupa en el espacio global y en la escala de análisis territorial.

bios financieros y de personas alrededor del mundo, cambiando por completo nuestras tradicionales concepciones de territorio, espacio y tiempo, contenidas en A. Guiddens, *Modernity and Self-Identity*, Stanford University Press, Stanford, 1991. También I. Wallerstein ha profundizado en la dimensión histórica de estos procesos en obras como *The Modern World-System*, Academia Press, Nueva York, 1974.

³ Ver J. Abu-Lughod, *Before European Hegemony. The World System*, Oxford University Press, Nueva York, 1989, o I. Wallerstein, *The modern World-System*, Academia Press, Nueva York, 1974.

⁴ Entre otros muchos trabajos de estos autores, se pueden consultar Á. Martínez González-Tablas, *Economía política de la globalización*, Ariel Economía, Madrid, 2000; J. Estefanía, *La nueva economía. La globalización*, Editorial Debate. Temas Debate, Madrid, 1996; C. Taibo, *Movimientos de resistencia frente a la globalización capitalista*, Ediciones B, Madrid, 2005; o U. Beck, *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*, Editorial Paidós, Barcelona, 1998.

⁵ Entre otros muchos trabajos de este autor donde desarrolla estas tesis, ver M. Castells, *The rise of the Network Society*, Blackwell, Cambridge, 1996.

⁶ Ver G. del Cerro, "Ciudades y globalización: un enfoque teórico", *RES*, Nº 4, New School for Social Research, 2004.

5. La globalización afecta sin duda a las ciudades, pero éstas pueden ubicarse en el centro o la periferia de la globalización misma, en función de la posición en que la ciudad se sitúa en la economía global y en sus procesos y decisiones estructurales, tal y como han descrito autores como Erik Sheppard.⁷ Las ciudades no son, por tanto, sujetos meramente pasivos, sino que tienen elementos para reaccionar y posicionarse ante la globalización utilizando las estructuras locales que poseen.
6. Los actores locales viven en la globalización, participan de estos procesos, los construyen, los negocian y, por supuesto, también los padecen, pero con intensidades muy distintas. No estamos así ante procesos unilineales en la medida en que los poderes públicos, los actores sociales y los agentes económicos tienen una posición clave en unas ciudades globales que presentan escalas muy distintas, como señalan autores como Saskia Sassen.⁸
7. Abundando en ello, las ciudades son cada vez más globales, no tanto como consecuencia de los procesos deliberados de las instituciones que las gobiernan, sino como parte esencial de los procesos económicos, sociales y políticos que protagonizan, de forma que se establecen alianzas supranacionales de mayor alcance, en ocasiones, de las que se plantean en espacios regionales o territoriales más cercanos.
8. En la globalización actual, los niveles y espacios que ocupan los distintos agentes y territorios no son estáticos, sino que están en continua evolución y negociación, ya sea a nivel local y de ciudades, a nivel regional y comarcal, a nivel de los Estados y países, o en el ámbito internacional y multilateral. De esta forma, los procesos de globalización se suceden en todas y cada una de las escalas espaciales en las que nos situemos.
9. Uno de los elementos más relevantes generados por la acción de la globalización en las ciudades es la creación de redes, unas redes globales en categorías muy diversas pero que intervienen en la producción, en las finanzas, en la cultura, en las relaciones sociales, en las alianzas políticas. Las ciudades poseen redes relacionales, redes estructurales, redes territoriales, redes sociales, redes de conocimiento, que cada vez son más imprescindibles para operar en la escala global. Esta estructura cada vez más reticular es esencial para comprender, intervenir y actuar en los procesos de globalización, como ha desarrollado ampliamente Manuel Castells.⁹
10. El auge de las ciudades en la globalización no implica, ni mucho menos, la desaparición del Estado-nación como una formación política significativa. Muy al contrario, como ha sucedido en España, un proceso de reforzamiento regional y territorial tan avanzado como el que ha configurado nuestro país en los planos políticos, económicos, administrativos, sociales y culturales, posiblemente uno de los mayores del mundo, no ha reducido el papel y la visibilidad del Estado en el plano internacional, llegando incluso a incrementarlo. No estamos por

⁷ Ver E. Sheppard, "The Spaces and Times of Globalization: places, scale, Network and Positionality", *Economic Geography*, Vol. 78, 2002.

⁸ Ver S. Sassen, *The Global city. New York, London, Tokio*, Princenton University Press, 2001.

⁹ Tesis recogida en M. Castells, *La sociedad red*, Alianza Editorial, Madrid, 1996.

tanto ante un equilibrio de fuerzas que debe sumar cero, hasta el punto de que el auge de territorios y regiones puede implicar también el ascenso del Estado en el que se sitúan, aunque puedan existir tensiones por tratar de sustituirse como actores globales.

La política urbana y la globalización

Las ciudades son la base para que una nueva articulación de la economía y la sociedad pueda avanzar sobre unas bases cambiantes modeladas por esta globalización. La nueva economía que genera la globalización necesita de nuevos espacios productivos, que se proyectan por medio de flujos globales entre lugares localizados, entre territorios localizados. Así lo demuestran, por ejemplo, las regiones en las que se desarrolla Internet, que es una industria concentrada en muy pocos países, pero especialmente en una serie de áreas metropolitanas muy delimitadas; ello no es casual, ya que Internet necesita información de alto nivel y alto valor añadido, concentrándose por ello en las áreas metropolitanas donde existen sociedades capaces de generar información, de acceder a nuevas tecnologías y de utilizar un conocimiento muy cualificado.

Podemos por tanto preguntarnos por las condiciones que se dan en estos lugares de creación de alto valor añadido tan selectivos, que acumulan riqueza sobre la base de su capacidad de conocimiento y valor. Y aquí podemos encontrar una cierta paradoja. La economía local no es exclusivamente global, ni mucho menos, sino que tiene un elevado componente mercantil basado en la capacidad que da el comercio y el intercambio, a través de los servicios públicos, ya sea en la educación, los servicios sociales, la creación y el mantenimiento de infraestructuras y equipamientos, entre otros. Sin embargo, estos sectores están en estrecha relación con la capacidad para captar recursos, algo que está íntimamente ligado a la capacidad para reunir y movilizar recursos, lo que depende en último extremo del vigor de las empresas en los mercados globales. Por tanto, la mayor o menor competitividad global de una ciudad estará relacionada con su mayor o menor productividad y grado de especialización alcanzado. Esto, a su vez, estará vinculado con las condiciones que sean capaces de proporcionar las ciudades, por medio de unos elementos que forman parte de las decisiones, estrategias y competencias municipales. Veamos algunas de ellas, como son:

– La generación de infraestructura tecnológica.

La globalización exige cada vez más mercados crecientemente abiertos que permitan que bienes y servicios entren y salgan con gran flexibilidad, no sólo en términos de venta sino de satisfacción de los insumos que requieren. Y eso exige infraestructuras, telecomunicaciones, redes de Internet ágiles, conectividad, capacidades para acceder y usar todas esas redes, entre otras cosas. Todos estos elementos son los que poseen las áreas metropolitanas emergentes del planeta que generan valor.

- La satisfacción de recursos humanos y el talento.

Ahora bien, todas esas infraestructuras avanzadas, por muy desarrolladas que sean, requieren recursos humanos altamente especializados para aprovechar todo su potencial. Y las propias características de ese personal especializado exigen una mayor capacitación educativa y tecnológica, particularmente en nuevas tecnologías, capaz no tanto de disponer de esas nuevas herramientas, sino de integrarlas en sus ocupaciones. Poniendo un símil, la cuestión no es tanto tener ordenadores, sino ser capaces de aprovechar al máximo sus infinitas posibilidades en la escala productiva, social y relacional. Se trata, por tanto, de disponer de talento, formación e innovación.

- La capacidad de innovación.

Pero acceder a talento, formación e innovación exige, necesariamente, instituciones que generen este conocimiento con un alto componente de valor añadido, entre las que estarían las universidades, los centros de I+D y los parques tecnológicos.

Las ciudades son la base para que una nueva articulación de la economía y la sociedad pueda avanzar sobre unas bases cambiantes modeladas por esta globalización

Pensemos en las condiciones bajo las que se crearon algunos de los parques tecnológicos emblemáticos en el mundo, como Silicon Valley, en California; Research Triangle Park, en Carolina del Norte; Route 128, en Boston; Wireles Valley, en Finlandia; Oxbrigde, en Reino Unido, entre otros. El más famoso y conocido de ellos, Silicon Valley, fue creado en 1951 por la Universidad de Stanford, ofreciendo terrenos a cien años a las empresas interesadas por 1\$ al año para espacios de investigación, con dos únicos requisitos esenciales: la aprobación del proyecto por la escuela de ingenieros de la Universidad, que analiza la calidad tecnológica del proyecto, así como la aprobación por la escuela empresarial tras examinar la naturaleza del proyecto empresarial previsto. Existe por tanto una doble evaluación previa por parte de la Universidad, que se implicó desde el principio en los dos proyectos.

La relación entre calidad urbana y talento

Sin embargo, por muy favorables que sean las condiciones que se dan, quien produce y genera innovación no son los parques científicos, ni las universidades, ni los viveros tecnológicos, ni los centros de I+D, sino los innovadores, las personas con talento y empuje, los investigadores. Es decir, sin personas no hay nada que hacer, aunque éstas necesitan indudablemente unos adecuados medios físicos que se traducen en infraestructuras apropiadas, pero también en ser-

vicios públicos, viviendas, centros de salud y hospitales, equipamientos culturales y educativos, en definitiva, lugares en los que vivir. Tendríamos por un lado la innovación, como creación de conocimiento, y su puesta en práctica, que relaciona a individuos de diferentes disciplinas y competencias pero que necesitan un espacio físico en el que poder organizarse, donde se contienen los recursos y medios necesarios y se recogen las externalidades positivas asociadas a la creación de conocimiento.

Ahora bien, como algunos autores han estudiado, no es únicamente la concentración de trabajadores cualificados lo que distingue las regiones y ciudades emergentes en la globalización, sino que los lugares más dinámicos y avanzados surgen en ciudades y entornos con mayor empuje cultural y una mayor calidad de vida urbana, en términos de oportunidades y buenas condiciones de vida. Los trabajos de la investigadora de la Universidad Johns Hopkins Maryann P. Feldman sobre la geografía de la innovación¹⁰ demuestran una estrecha relación entre la calidad de vida en las ciudades y la innovación, hasta el punto de que la generación de buenas condiciones de vida en las ciudades, el que éstas sean lugares agradables y acogedores, dispongan de infraestructuras y servicios, zonas para el paseo y el encuentro, cuenten con infraestructuras cómodas, transportes públicos, servicios sociales, culturales y educativos, son condiciones que atraen a una fuerza de trabajo cada vez más exigente y creativa ligada a los procesos de innovación y talento. Todos y cada uno de los lugares punteros en el mundo desde el punto de vista tecnológico e innovador poseen una de las mejores calidades de vida, no sólo en sus centros de trabajo, sino en las ciudades y regiones en las que se asientan, funcionando como un plus retributivo para mantener y atraer a nuevos talentos y a sus familias, pero también a otros muchos trabajadores y técnicos, convirtiéndose en lugares más productivos.

La necesidad de cohesión y estabilidad social

Y entre estos elementos, cuando hablamos de calidad urbana no sólo nos referimos al continente, al espacio físico, sino también a la calidad de las relaciones sociales que esas ciudades albergan. Fue Montesquieu quien señaló que “primero las personas hacen las leyes, luego las leyes hacen a las personas”. Algo similar puede decirse de las ciudades, ya que en primer lugar son las personas quienes construyen la ciudad y los edificios; y posteriormente es la ciudad misma quien construye a las personas que la habitan, determinando su manera de vivir, sentir y actuar. Aquellas ciudades dinámicas dotadas de un sistema de protección social avanzada y servicios públicos fuertes son la base para proporcionar un capital humano cualificado. Ello no es casual, ya que allí los ciudadanos viven cómodamente, con tranquilidad y una amplia cohesión social que reduce las desigualdades sociales. Existe por tanto una conexión entre calidad de

¹⁰ Ver M. P. Feldman, *La revolución de Internet y la geografía de la innovación*, Organización de Estados Iberoamericanos, Madrid, 2005.

vida, innovación, calidad urbana, talento, estabilidad social, productividad y calidad de la fuerza de trabajo, algo que se puede encontrar en las ciudades emergentes que albergan algunos de los núcleos punteros en la globalización actual.

En numerosas ocasiones se ha insistido en alertar sobre los graves efectos para la cohesión social que en numerosas ciudades tiene la política que se ha venido promoviendo (en particular, sobre la Comunidad Valenciana), permitiendo el desarrollo de la ciudad extensa y difusa, frente a la cualificación y revitalización de la ciudad consolidada. Numerosas ciudades en España se encuentran abandonadas a las dinámicas de un mercado especulativo que, bajo sus únicos intereses económicos, es quien diseña las nuevas zonas de expansión que albergan los nuevos planes de actuación urbanística (PAU) aprobados al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se sitúan en la periferia de la ciudad y hacia donde se dirigen el grueso de las inversiones. Estos nuevos barrios reciben y se dotan de las construcciones más modernas, incorporando nuevas dotaciones, infraestructuras y equipamientos, acumulando unas mejores condiciones de vida que atraen a nuevas familias y a habitantes de los barrios céntricos que los han abandonado para acceder así a una mejor calidad de vida para ellos y sus hijos, así como a aquellas otras personas y familias de mayor poder adquisitivo.

Frente a ello, los centros históricos y los barrios populares y tradicionales atraviesan una etapa de abandono deliberado que se traduce en su decadencia y progresivo deterioro. Ello lleva a que estos barrios estén cada vez más abandonados y deteriorados, carentes de infraestructuras y equipamientos básicos, con escasos servicios públicos que están sobrecargados, produciéndose un abandono de todos aquellos vecinos que pueden irse, mientras que los que allí viven acumulan un creciente malestar urbano. De hecho, los únicos nuevos vecinos que acuden a vivir son los inmigrantes, que sólo pueden acceder a las viviendas de estos barrios por ser las más baratas y también las que peores condiciones presentan.

Para agrandar aún más los espacios de desigualdad, en estas ciudades se acentúa cada vez más la polarización y segmentación, estableciéndose una línea muy nítida como ciudad crecientemente dual entre los barrios ricos y pobres, los barrios nuevos frente a los barrios viejos, los barrios con población rejuvenecida frente a los barrios con población envejecida, los barrios con inmigrantes frente a los barrios sin ellos, los barrios con población autóctona frente a los barrios abandonados por la población autóctona, los barrios con equipamientos nuevos frente a aquellos otros sin prácticamente equipamientos.¹¹ Por si fuera poco, el progresivo abandono sobre los barrios tradicionales genera su destrucción como espacios simbólicos e identitarios, organizados y reivindicativos, en pro de unas zonas residenciales carentes de identidad y sin vida social.

¹¹ Esto se puede comprobar en ciudades como Alicante.

Sin duda, la causa de estas dinámicas está íntimamente relacionada con procesos alimentados por la globalización misma, o más concretamente, por una globalización neoliberal tan salvaje como depredadora, facilitada, generada y estimulada por algunos “*i-irresponsables*” políticos¹². Esta globalización ha acabado por construir una compleja amalgama de intereses privados que estimulan desde las instituciones públicas valiéndose de sus competencias institucionales, abandonando de esta forma la defensa del bien público en beneficio de los intereses privados que pueden adoptar diferentes denominaciones mercantiles. Numerosos autores han alertado sobre la gravedad de estos procesos, que producen, como señala Josep Ramoneda, “la parasitación del espacio político por la economía que rompe el carácter convencional del espacio democrático”.¹³ Todo ello genera un progresivo divorcio entre el poder y la política en la medida en que otros poderes emergentes se apoyan en los intereses económicos y el dinero, socavando su autoridad y sustituyendo sus competencias. El poder cambia de centro de gravedad, y la política entendida como el espacio encargado de velar por la solidaridad social y el bien de la comunidad, se convierte en una simple gestoría de los intereses de los poderes económicos, a los que ampara, defiende y apoya, algo que autores como Zygmunt Bauman han analizado con detenimiento.¹⁴ Desde esta perspectiva, los ciudadanos ya no se sienten protegidos por instituciones públicas como el Ayuntamiento, sino que se encuentran sometidos a la voracidad de las fuerzas de un mercado que ni siquiera el Ayuntamiento es capaz de controlar, restando autoridad, legitimidad y competencias a éste sobre aspectos básicos de la convivencia, y perdiendo también la confianza en lo público como espacio básico de defensa de los intereses generales.

La paradoja es que los verdaderos poderes que están marcando el futuro de la ciudad utilizan al máximo las dinámicas de la globalización misma mediante componentes como el mercado, las finanzas o las inversiones que llevan a cabo, mientras que las instituciones que deben delimitar y reorientar la actuación de estos poderes económicos globales han renunciado a ejercer sus competencias, convirtiéndose en simples siervos de estos poderes. Podemos decir que mientras que en numerosas ciudades la política que se ejerce y la mirada que se proyecta sobre ellas es cada vez más localista, la ciudad se ve modelada por fuerzas cada vez más globales y, por tanto, que acumulan cada vez más poder. Ello genera vigorosas y profundas desigualdades sociales que están marcando el futuro por el que avanzará sin duda la ciudad.

A la luz de todo ello, se comprenderá la urgente necesidad de inversión en servicios públicos, cultura, educación, equipamientos e infraestructuras de todo tipo, especialmente en lo referente a la consolidación de los barrios céntricos y tradicionales de las ciudades. Todo ello no sólo es un factor de reducción de las crecientes disparidades sociales, sino que, además, aumenta

¹² Como se evidencia al comprobar el elevado número de alcaldes y concejales procesados en España por cuestiones relacionadas con la corrupción urbanística y económica.

¹³ Ver J. Ramoneda, “A favor de la globalización”, *Anuario de El País*, Madrid, 2003, p. 69.

¹⁴ Ver Z. Bauman, “Tiempos líquidos”, Tusquets Ensayos, Barcelona, 2007.

la productividad, relanza la inversión, reactiva la economía y, al mismo tiempo, genera una calidad de vida que es la base para atraer emprendedores. Esto es particularmente relevante en tiempos de incertidumbre económica, precisamente cuando más necesario es incrementar la cohesión social, aumentar la confianza ciudadana y relegitimar las instituciones democráticas.

El *connecting people* de la inmigración

Este conocido eslogan publicitario de la famosa marca de móviles Nokia puede expresar de forma excelente algunas de las extraordinarias contradicciones que plantea la globalización en el espacio de las migraciones contemporáneas. Pocos procesos reflejan con tanta contundencia los efectos tan devastadores de la globalización sobre las personas como las diásporas y migraciones, que de forma tan abundante han llegado hasta España. Curiosamente, los que viven en la periferia misma de la globalización quieren viajar hasta su corazón a través de los medios que ésta les proporciona, para convertirse en herramientas de este proceso, resistiéndose a ser meros espectadores de los cambios y transformaciones que la globalización ofrece. Ésta provoca migraciones, facilita las migraciones y necesita de los propios inmigrantes, como mano de obra abundante y precaria, así como nuevos consumidores que alimenten un mercado voraz en continuo crecimiento.

Se entenderá, por ello, que debemos ampliar el estrecho marco local para comprender, intervenir y reconocer a las personas que viven entre nosotros procedentes de otros países y culturas. No podemos seguir hablando de inmigrantes encerrándolos exclusivamente en su función laboral, reduciendo estas personas a simples mercancías en el conjunto de bienes del sistema económico capitalista. Los inmigrantes existen y están entre nosotros, pero esta obviedad exige reconocer su presencia en todos los órdenes, facilitar el ejercicio de sus derechos y avanzar en su implicación social y cívica. Y, como señala el eslogan de Nokia, fomentar las conexiones entre las diferentes personas llegadas de diferentes países.

Hoy en día los inmigrantes viajan con móviles que en muchos casos les han evitado una muerte segura; móviles que les han permitido hablar con periodistas para difundir los abusos y engaños; móviles que les posibilitan estar en contacto con sus familias y comunidades de origen; y que en ocasiones han permitido la actuación de ONGs e instituciones que han velado por su situación.

Tenemos que ser capaces de avanzar y facilitar estas mismas conexiones en las mismas ciudades en las que viven los inmigrantes, entre ellos y con la población autóctona, con las sociedades de donde proceden y que también tienen relaciones estrechas con nosotros, y con las instituciones encargadas de gestionar el bien común. Estas comunicaciones son también relaciones, implicaciones, interacciones y participaciones. Esto significa poder tener mejores políticas

sanitarias, educativas, culturales, de vivienda y empleo, pero también una mayor inclusión social y ciudadana, en definitiva, y como señala Javier de Lucas,¹⁵ políticas que asocien intereses comunes entre todos los protagonistas de la ciudad. Para ello, tenemos que trascender las simples fronteras locales, unas fronteras que son absolutamente ineficientes para intervenir sobre unas migraciones que si se caracterizan por algo es justamente por su extraordinaria movilidad.

Avanzamos hacia ciudadanías cada vez más globales, precisamente cuando muchos de los fenómenos globales que se generan en nuestras ciudades tratamos de abordarlos de manera cada vez más local.¹⁶ Uno de estos fenómenos son las migraciones, que requieren de estrategias, acuerdos y actuaciones supralocales, que cuenten con el concurso, el apoyo, la cobertura y las perspectivas de instituciones públicas y privadas en todos los ámbitos. Sin embargo, todavía en no pocas ciudades y municipios, los inmigrantes que allí residen son considerados como esos “residuos humanos” a los que se refiere Bauman,¹⁷ una consecuencia inevitable de la globalización y de sus causas, elementos necesarios e imprescindibles para que la sociedad progrese y para que la economía de la ciudad pueda funcionar, pero sin reconocerlos como sujetos de derechos.

Pocos procesos reflejan con tanta contundencia los efectos tan devastadores de la globalización sobre las personas como las diásporas y migraciones, que de forma tan abundante han llegado hasta España

Un ejemplo de modernas redes globales: la Alianza Global de Ciudades contra la Pobreza (WACAP)

Son numerosos los ejemplos de redes globales apoyadas por ciudades de todo el mundo que permiten avanzar en la eliminación de la pobreza y la exclusión social, muchas de las cuales son, por otra parte, de adscripción voluntaria por los municipios. Una de estas redes es la Alianza Global de Ciudades contra la Pobreza (WACAP, por sus siglas en inglés), adscrita a un departamento de la ONU. Esta Alianza, que inició su andadura en 1976, es una red mundial de ciudades creada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de

¹⁵ Ver J. de Lucas, “La inmigración en España: una obsesión desbordada”, *Le Monde Diplomatique*, edición española, enero de 2006, Madrid.

¹⁶ Autores como S. Castles, profesor de Migraciones y Refugiados de la Universidad de Oxford y director de investigación en la Universidad de Wollongong, en Australia, han venido desarrollando estas tesis, a través de trabajos como *Globalización y migración: algunas contradicciones urgentes*.

En: <http://www.ub.es/prometheus21/articulos/nautas/18.pdf>

¹⁷ Ver Z. Bauman, *Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias*, Editorial Paidós, Barcelona, marzo de 2005.

ayudar a los municipios a hacer frente al desafío de la pobreza y la exclusión social sobre el terreno. Con este objeto, la red impulsa proyectos para luchar contra la pobreza, proteger a los niños, regenerar el medio ambiente, proporcionar el acceso a la atención sanitaria básica, limpiar el agua, proveer educación y servicios sociales básicos, y asegurar un ingreso y un nivel de vida decente para todos; elementos que han sido preparados por los gobiernos del mundo en las conferencias globales auspiciadas por Naciones Unidas en las últimas décadas.

La red facilita la conexión entre autoridades municipales permitiendo el aprovechamiento de sus experiencias. Esto también proporciona un marco para reunir recursos humanos, materiales y financieros a fin de alcanzar los objetivos específicos que hacen posible reducir la pobreza y disminuir sus efectos. La vinculación a la Alianza es voluntaria por parte de las ciudades.

Las ciudades participantes cuentan así con la ventaja de utilizar la red como recurso para ser usado a favor de sus estrategias y programas para combatir la pobreza y avanzar hacia un mejor desarrollo urbano, ampliando las perspectivas de la acción municipal, dando acceso a los municipios a toda la experiencia, las habilidades y, aún más, a los recursos de las agencias de Naciones Unidas y sus aliados. Al mismo tiempo, es un espacio de conocimiento y contraste de experiencias globales en este campo.

La WACAP une a ciudades que han decidido asumir este compromiso público y movilizar todos los sectores de la sociedad, desde individuos hasta gobiernos, para hacer todo lo que esté a su alcance con el propósito de eliminar la pobreza tanto en sus ciudades como en el extranjero.

Una ciudad se integra en la red en el momento en que su Ayuntamiento ha ratificado la *Llamada de las Ciudades contra la Pobreza* y participa en la campaña mundial de información sobre la pobreza aportando una contribución en función de sus medios.

Junto a la implementación de los llamados *Objetivos de Desarrollo del Milenio*, aprobados por Naciones Unidas en septiembre del año 2000, uno de los instrumentos más interesantes puestos en marcha por esta red es el mayor banco de experiencias en materia de lucha contra la pobreza y desarrollo urbano en sentido amplio. Éstas están siendo realizadas con éxito en ciudades de todo el mundo en esferas muy diversas, que abarcan cuestiones referidas a aspectos tan extensos como la lucha contra la exclusión social y la pobreza urbana, la participación en asuntos públicos, el desarrollo cultural y social, la rehabilitación participativa de viviendas, la alfabetización básica y la salud para los más desfavorecidos, el fomento del empleo para mujeres, los presupuestos municipales participativos, la atención a personas sin hogar mediante alianzas públicas y privadas, las estrategias de apoyo para desempleados de larga duración, los equipos de asistencia social móvil o las mejoras de la calidad de vida sobre barrios pobres, entre otros.

Experiencias mundiales piloto en desarrollo urbano en ciudades de todo el mundo

EXPERIENCIA	CIUDAD	PAÍS
Financiación de políticas antipobreza: tratado de obligaciones municipales y acceso al crédito	Ahmadabad	INDIA
Política antipobreza y crecimiento multidimensional	Alphen Ann Den Rijn	PAÍSES BAJOS
Múltiples efectos de la lucha urbana contra la polución: mejoramiento de la sanidad, salud de la familia, protección del medio ambiente y empleo para mujeres	Bamako	MALÍ
Agua potable y más allá: proyectos de financiación a través de la cooperación	Besançon Douroula	FRANCIA BURKINA FASSO
Participación popular en la dirección de asuntos públicos: creación de mecanismos para la supervisión ciudadana en los servicios sociales	Nueva Delhi	INDIA
Desarrollo cultural y social: proveer al pobre con apoyo financiero para actividades culturales	Hague	PAÍSES BAJOS
Desarrollo cultural: llevar las artes y el entretenimiento a los más pobres	Huy París	BÉLGICA FRANCIA
Rehabilitación de viviendas: compromiso de los más pobres en el proceso	Lisboa	PORTUGAL
Desarrollo humano utilizando los conocimientos locales: usar a los actores locales en la alfabetización básica e iniciativas de atención en salud	Maúa	BRASIL
Empresas de mujeres: suministro de prácticas para la administración y acceso al crédito	Norwich	INGLATERRA
Presupuestos participativos: incrementar la participación ciudadana en la formulación de estrategias de desarrollo municipal	Porto Alegre	BRASIL
Lucha contra la exclusión social mediante alianzas públicas y privadas: equipos de asistencia móvil y refugios de día para los "sin hogar"	París	FRANCIA
Reinserción efectiva de desempleados: apoyo al desempleo a largo plazo	San Francisco	EEUU
Energía y asentamiento en barrios pobres: reparto de energía a los pobres mediante alianzas públicas y privadas	São Paulo	BRASIL

Podrían existir elementos aprovechables de esta red mundial, como por ejemplo:

- Intensificar el trabajo en red por parte de los municipios.
- Tratar de poner en marcha experiencias piloto en materia de desarrollo urbano, lucha contra la pobreza y estrategias para aumentar la cohesión social que puedan ayudar a implementar políticas en otros municipios.
- Avanzar en la creación de nuevas alianzas públicas y privadas, sociales e institucionales, vecinales y ciudadanas, universitarias y empresariales.
- Apoyar iniciativas globales similares en las que se tienen que implicar las ciudades más relevantes

Algunas consideraciones finales

En cuanto a la globalización y las ciudades

- La globalización está generando cambios estructurales y territoriales de una gran envergadura que están afectando de forma relevante a los procesos urbanos y al desarrollo de las ciudades contemporáneas.
- Esta globalización es la consecuencia de decisiones humanas que determinan su intensidad y efectos sobre ciudades y regiones, así como las alianzas y redes que se construyen y que determinan la posición de cada ciudad.
- Las ciudades tienen elementos y estrategias a su alcance para reaccionar y posicionarse ante la globalización, superando los simples límites locales. Poderes públicos, agentes económicos y actores sociales tienen una posición clave en unas ciudades globales que presentan escalas muy distintas.
- Uno de los elementos más importantes es la creación de redes y alianzas que superan los simples límites locales y que son cada vez más necesarias para operar en el espacio global e intervenir en la globalización. Estas redes, sociales, territoriales, económicas y políticas, deben llevar a un trabajo cada vez más estrecho con todo tipo de actores que viven y hacen ciudad, incluyendo las instituciones regionales y estatales, que son cada vez más imprescindibles para actuar globalmente.

La política urbana y la globalización

- Las ciudades son la base para que una nueva articulación de la economía y la sociedad pueda avanzar sobre unas bases cambiantes modeladas por la globalización. Así, la mayor o menor competitividad global de una ciudad estará relacionada con su mayor o menor productividad y grado de especialización alcanzado. Algo que estará vinculado con las condiciones que sean

capaces de proporcionar las ciudades, por medio de unos elementos que forman parte de las decisiones, estrategias y competencias municipales.

- Para ello, los ayuntamientos deberían facilitar tres componentes esenciales, como son la generación de infraestructura tecnológica, la satisfacción de recursos humanos y talento, y la capacidad de innovación mediante instituciones que generen este conocimiento con un alto componente de valor añadido, entre las que estarían las universidades, los centros de I+D y los parques tecnológicos, en línea con lo que están haciendo algunos de los centros tecnológicos emblemáticos en el mundo.

La relación entre calidad urbana y talento

- No es únicamente la concentración de trabajadores cualificados lo que distingue las regiones y ciudades emergentes en la globalización, sino que los lugares más dinámicos y avanzados surgen en ciudades y entornos con mayor empuje cultural y una mayor calidad de vida urbana, en términos de oportunidades y buenas condiciones de vida, existiendo una relación cada vez más estrecha entre la calidad de vida en las ciudades y la innovación.

La necesidad de cohesión y estabilidad social

- Pero la calidad urbana no sólo se refiere al espacio físico, sino también a la calidad de las relaciones sociales que esas ciudades albergan. Existe por tanto una conexión entre calidad de vida, innovación, calidad urbana, talento, estabilidad social, productividad y calidad de la fuerza de trabajo, algo que se puede encontrar en las ciudades emergentes que albergan algunos de los núcleos punteros en la globalización actual.
- No son pocas las ciudades que se encuentran abandonadas a las dinámicas de un mercado especulativo que, bajo sus únicos intereses económicos, es quien diseña las nuevas zonas de expansión que albergan los nuevos PAU aprobados al margen de un simple PGOU, que se sitúan en la periferia de la ciudad y hacia donde se dirigen el grueso de las inversiones, con unos graves efectos para la cohesión social.
- Con ello, los centros históricos así como los barrios populares y tradicionales atraviesan una etapa de abandono deliberado que se traduce en su decadencia y progresivo deterioro, con una acusada escasez de servicios y equipamientos públicos básicos que son incapaces de atender a la población que allí reside. Ello conduce a que estos barrios estén cada vez más abandonados y deteriorados, carentes de infraestructuras y equipamientos básicos, con escasos servicios públicos que están sobrecargados, produciéndose un abandono de todos aquellos vecinos que pueden irse, mientras que los que allí viven acumulan un creciente malestar urbano.

- Todo ello hace que la ciudad sea cada vez más dual, segmentada y polarizada, generándose un progresivo abandono sobre los barrios tradicionales que lleva a su destrucción como espacios simbólicos e identitarios, organizados y reivindicativos.
- Todos estos procesos deben evitarse en la medida en que suponen avanzar hacia un metabolismo urbano enfermo, apostando con ello por una ciudad extensa y difusa, generadora de desigualdades y consumidora masiva de recursos frente a la ciudad compacta, cohesionada y revitalizada, confundiendo la construcción de más y más casas con lo que es la dignidad de la ciudad y la calidad de vida, algo que no es precisamente lo mismo.
- Todo ello es estimulado por procesos derivados de la globalización misma, que generan un progresivo divorcio entre el poder y la política en la medida en que otros poderes emergentes se apoyan en los intereses económicos y el dinero, socavan su autoridad y sustituyen sus competencias.
- Los ciudadanos ya no se sienten protegidos por instituciones públicas como el Ayuntamiento, sino que se encuentran sometidos a la voracidad de las fuerzas de un mercado que ni siquiera estos ayuntamientos son capaces de controlar, restando autoridad, legitimidad y competencias a los mismos sobre aspectos básicos de la convivencia, y perdiendo también la confianza en lo público como espacio básico de defensa de los intereses generales.
- Mientras que en no pocas ciudades y municipios la política que se ejerce y la mirada que se proyecta sobre ellos es cada vez más localista, la ciudad se ve modelada por fuerzas cada vez más globales y, por tanto, que acumulan cada vez más poder. Ello genera vigorosas y profundas desigualdades sociales que están marcando el futuro por el que avanzará sin duda la ciudad.
- Es urgente la inversión en servicios públicos, cultura, educación, equipamientos e infraestructuras de todo tipo, especialmente en lo referente a la consolidación de los barrios céntricos y tradicionales. Todo ello no solo es un factor de reducción de las crecientes disparidades sociales, sino que, además, aumenta la productividad, relanza la inversión, reactiva la economía y, al mismo tiempo, genera una calidad de vida que es la base para atraer emprendedores.

Las conexiones de la inmigración

- Las migraciones contemporáneas que de forma intensa han llegado hasta España en los años recientes reflejan con contundencia los efectos devastadores de la globalización sobre las personas. La globalización provoca migraciones, facilita las migraciones y necesita de los propios inmigrantes, como mano de obra abundante y precaria, así como nuevos consumidores que alimenten un mercado voraz en continuo crecimiento.
- Debemos ampliar el estrecho marco local para comprender, intervenir y reconocer a las personas que viven entre nosotros procedentes de otros países y culturas. No podemos seguir hablando de inmigrantes encerrándolos exclusivamente en su función laboral, reduciendo a estas personas a simples mercancías en el conjunto de bienes del sistema económico capitalista. Los inmigrantes existen y están entre nosotros, pero esta obviedad exige reconocer su

presencia en todos los órdenes, facilitar el ejercicio de sus derechos y avanzar en su implicación social y cívica, fomentando las conexiones entre las diferentes personas llegadas de otros países.

- Esto significa tener mejores políticas sanitarias, educativas, culturales, de vivienda y empleo, pero también una mayor inclusión social y ciudadana, por medio de políticas que asocien intereses comunes entre todos los protagonistas de la ciudad. Para ello, tenemos que trascender las simples fronteras locales, unas fronteras que son absolutamente ineficientes para intervenir sobre unas migraciones que si se caracterizan por algo es precisamente por su extraordinaria movilidad.
- Hay que desterrar las políticas y discursos que convierten a los inmigrantes que residen en la ciudad en “residuos humanos”, una consecuencia inevitable de la globalización y de sus causas, elementos necesarios e imprescindibles para que la sociedad progrese y para que la economía de la ciudad pueda funcionar, pero sin reconocerlos como sujetos de derechos.

La Alianza Global de Ciudades contra la Pobreza (WACAP)

- La Alianza Global de Ciudades contra la Pobreza (WACAP), adscrita a un departamento de la ONU, es un ejemplo de red mundial de ciudades creada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de ayudar a los municipios a hacer frente al desafío de la pobreza y la exclusión social sobre el terreno.
- La red facilita la conexión entre autoridades municipales permitiendo el aprovechamiento de sus experiencias, siendo voluntaria su adscripción por parte de las ciudades. Las ciudades participantes cuentan así con la ventaja de utilizar la red como recurso para ser usado a favor de sus estrategias y programas para combatir la pobreza y avanzar hacia un mejor desarrollo urbano, ampliando las perspectivas de la acción municipal, dando acceso a los municipios a toda la experiencia, las habilidades y, aún más, a los recursos de las agencias de Naciones Unidas y sus aliados. Al mismo tiempo, es un espacio de conocimiento y contraste de experiencias globales en este campo, siendo el mayor banco de experiencias en materia de lucha contra la pobreza y desarrollo urbano.
- Es relevante formar parte de estas redes mundiales, tratando de conocer y poner en marcha experiencias piloto en materia de desarrollo urbano, lucha contra la pobreza y estrategias para aumentar la cohesión social que puedan ayudar a implementar políticas en otros municipios, avanzando en la creación de nuevas alianzas públicas y privadas, sociales e institucionales, vecinales y ciudadanas, universitarias y empresariales, pudiendo apoyar iniciativas globales similares.

La globalización coloca a las ciudades contemporáneas ante desafíos y posibilidades novedosas que exigen un conocimiento, una reflexión profunda y, especialmente, una implicación activa y responsable de las instituciones con competencias en estas ciudades, especialmente los

ayuntamientos. Desde esta perspectiva, conviene conocer mejor las decisiones y estrategias que están utilizando numerosas ciudades en todo el mundo para ocupar una posición de vanguardia, tratando de comprender lo que la globalización aporta en los distintos planos políticos, económicos, sociales y financieros. Los chinos, que poseen una cultura sabia y milenaria, tienen el mismo ideograma para representar las palabras “crisis” y “oportunidad”, posiblemente porque una necesite de la otra, en el sentido Gramsciano del término. La duda es valorar si la crisis urbana, social y de legitimidad por la que atraviesan no pocas ciudades servirá para relanzarlas y situarlas mejor en el espacio global, abriendo con ello nuevas oportunidades, o, si por el contrario, provocará un deterioro inevitable para las generaciones futuras.

La inmigración en España: racismo institucional y racismo social

Durante el último año, tanto la Unión Europea (UE) como el Estado español han demostrado, una vez más, su falta de capacidad para elaborar políticas reales y realistas en materia de inmigración. Las decisiones y actuaciones de los Estados miembros de la Unión en materia de inmigración han confirmado la realidad de una Europa-fortaleza, de una UE-isla inalcanzable para las personas que no reúnan determinadas condiciones de entrada. La obsesión de los políticos europeos por el control de las fronteras ha contribuido a provocar, en 2007, la muerte documentada de 1.861 personas –aunque fueron muchos más los fallecidos de los que nada se supo– mientras intentaban cruzar irregularmente, por mar o por tierra, los confines comunitarios. Y eso por no tener otra opción, al ser los mecanismos regulares de entrada de la UE totalmente y criminalmente desfasados respecto a la realidad de los procesos migratorios actuales.

En el último año, la política migratoria de la Unión se ha caracterizado, de nuevo, por sus esfuerzos en impedir salir a las personas de origen subsahariano del continente africano, delegando este control fronterizo a Estados donde el reconocimiento de los derechos humanos resulta por lo menos dudoso (como Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania, Túnez o Senegal), en el marco conceptual de externalización de las fronteras comunitarias. El drama humano vivido por los pasajeros de los buques rescatados este año mientras iban a la deriva en el océano, y de cuyos destinos ningún Estado se quiso hacer cargo, evidencia que para Europa existen náufragos de primera y de segunda categoría, y que la política de control de fronteras pasa por delante del respeto a la vida y dignidad de las personas.

A inicios de mayo de 2008, el Comité de Representantes Permanentes de los países miembros de la Unión aprobó la propuesta de proyecto de la *Directiva sobre la detención y la expulsión de las personas extranjeras*. La directiva apunta hacia “una regulación común de las legislaciones”. En realidad, sólo aborda cuestiones sobre el encierro, la retención y la expulsión

Edoardo Bazzaco es coordinador del *Informe Anual sobre el Racismo en el Estado Español 2008* de SOS Racismo

de las personas indocumentadas, el fondo económico para los retornos, los vuelos compartidos, etc. Además fija un periodo de encierro de hasta 18 meses en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), centros de reclusión inconstitucionales –porque se detienen personas por lo que son y no por lo que han hecho–, para personas cuya supuesta culpa es la de querer vivir en Europa. Este proyecto implica en sí mismo una lógica inhumana: la generalización de una política de encierro de las personas extranjeras y, consiguientemente, su normalización como gran pilar de la política europea de extranjería.

Por otro lado, durante 2007, la Comisión Europea intentó facilitar la contratación de trabajadores extranjeros altamente cualificados para cubrir las demandas del mercado laboral de los Estados miembros, mediante la propuesta de creación de una *blue card* (tarjeta azul). Para que un trabajador extranjero pueda acceder a esta tarjeta deberá tener un contrato de al menos un año, y recibir un salario que triplique el salario mínimo de su país de asentamiento. Numerosas ONGs llamaron la atención sobre el impacto negativo de “fuga de cerebros” que esta medida podría provocar en el desarrollo de los países de origen de las personas emigrantes. El riesgo a que los países industrializados se beneficiaran de la transferencia de recursos humanos ya formados desde los países catalogados como “en desarrollo”. La adopción de la *blue card* supondría una división del trabajo añadida a las que ya existen: entre trabajadores nacionales y extranjeros, entre trabajadores comunitarios y no comunitarios, entre personas en situación regular e irregular. La Europa actual acepta la necesidad de la inmigración para mantener su economía, pero a su vez contempla a las personas inmigrantes unilateralmente, como simple mano de obra barata (y mejor si es altamente cualificada) y sin derechos.

En línea con la UE, el Estado español ha endurecido aún más sus políticas de control de las fronteras y de repatriación de personas en situación de irregularidad. Según afirmó en enero de 2008 el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el refuerzo de los controles fronterizos, así como el impulso de la cooperación operativa con la UE y con los Estados de la fachada atlántica africana, habrían permitido “luchar de manera más eficaz” contra la inmigración irregular. Prueba de ello sería, según el ministro, el descenso en más del 50% de las llegadas a las costas españolas de personas inmigrantes procedentes de África a bordo de embarcaciones. Sin duda, prueba de la “eficacia” en la lucha del Gobierno contra la inmigración irregular fueron las 876 muertes documentadas de personas inmigrantes mientras intentaban llegar a las costas españolas. Muchas más fueron las muertes y las desapariciones de las que no se supo nunca y de las que nunca se sabrá, a las que hay que añadir la invisibilidad de aquellas otras personas que no pudieron llegar a salir del continente y esperan su oportunidad en pésimas condiciones. Todos estos fueron realmente, en el último año, los resultados de los esfuerzos del Gobierno español para contener la inmigración desde los países africanos.

El triunfalismo del Gobierno en materia de inmigración obvió e invisibilizó tanto el drama de los centenares de personas ahogadas en el intento de llegar al Estado español, como las constantes violaciones de los derechos humanos que conlleva la estrategia de externalización del control fronterizo a terceros países. La visión de la regulación de los flujos migratorios propuesta por el Gobierno en la anterior legislatura fue totalmente incompleta, unilateral y, por lo tanto, insuficiente y equivocada: se ignoraron conscientemente las causas de la inmigración y las violaciones de la legalidad y los derechos humanos que están suponiendo el control de las fronteras a cualquier precio, a lo que hay que sumar la total falta de criterios de transparencia, legalidad y humanidad.

Por otro lado, la voluntad de varios partidos de aumentar la duración de la retención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) –en consonancia con el contenido de la *Directiva sobre la detención y la expulsión de las personas extranjeras* de la UE–, así como de reformar la Ley de Extranjería, adjudicando nuevas obligaciones a las personas inmigrantes, deja claro que los próximos movimientos en política de extranjería irán en la misma línea, incluso hacia un ulterior endurecimiento, determinando un aumento de la vulneración de derechos en nombre del control de los flujos migratorios.

La política de extranjería del Gobierno ha demostrado en el último año una fijación obsesiva respecto al tema de las expulsiones. En 2007, fueron 75 los vuelos fletados con este fin por el Ministerio del Interior, mientras que el número de repatriaciones aumentó un 6% respecto a 2006.¹ En el último año, una persona falleció cuando era deportada a su país de origen bajo custodia policial, en cumplimiento de una orden de expulsión, sin haberse depurado responsabilidades a día de hoy. Además, en 2007 la Dirección General de la Policía elaboró una propuesta de protocolo denominado *Normas de seguridad en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima*, que contempla la práctica de realizar el embarque en avión de todas las personas a expulsar, conduciéndolas atadas, con lazos de seguridad a plena vista del público, pasajeros y tripulación, así como la utilización de grilletes metálicos, capuchas y cascos, correas de sujeción y camisas de fuerza.²

Para Europa
existen
náufragos
de primera
y de
segunda
categoría

¹ Más información en el anexo estadístico de SOS Racismo, *Informe Anual sobre el Racismo en el Estado Español 2008*, Icaria Editorial, Barcelona, 2008.

² Ver Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos, *Privación de la libertad y derechos humanos. La tortura y otras formas de violencia institucional*, Icaria Editorial, Barcelona, 2008.

Además de controlar y repatriar, durante 2007, el Estado español se preocupó de remarcar la distinción entre las personas inmigradas en situación irregular y las que se encontraban en situación regular, evidenciando cómo los actuales mecanismos regulares de ingreso en el Estado español son completamente inadecuados a la situación del hecho migratorio. La Ley de Extranjería no ofrece vías reales de entrada, sino que apuesta exclusivamente por la contratación en origen –no siendo esto realista ni con la realidad social, ni con el mercado laboral– y por mantener el círculo vicioso de dependencia entre la autorización de residencia y de trabajo, precipitando a muchas personas recién llegadas a la irregularidad, y a otras muchas ya asentadas a caer en periodos de irregularidad sobrevenida por las dificultades de renovación de los permisos.

La irregularidad es un problema estructural, permanente, crónico, provocado por la misma Ley de Extranjería

Una vez más, el Gobierno español ha demostrado una actitud hipócrita respecto a las causas reales de la cronificación de la irregularidad: el carácter profundamente discriminatorio de la Ley de Extranjería y su Reglamento de ejecución, así como la rigidez y la falta de eficiencia de la Administración Pública. En efecto, los mecanismos de la misma Ley de Extranjería no solamente son discriminatorios y lesivos de los derechos de las personas inmigrantes, sino que están en la base del proceso de cronificación de la irregularidad de la población inmigrante en la sociedad española. La irregularidad es un problema estructural, permanente, crónico, provocado por la misma Ley de Extranjería. La irregularidad no es una condición buscada por quien emigra, sino una condición que las personas inmigrantes sufren y que no pueden superar en plazos relativamente cortos y razonables. La irregularidad no tiene nada que ver con el proyecto migratorio de las personas; más bien, se debe explicar por la falta de mecanismos legales de entrada, por la política de visados practicada, la rigidez de los procedimientos para solicitar las autorizaciones de trabajo y la incompatibilidad profunda que hay entre los procedimientos administrativos para regularizar las situaciones y el funcionamiento del mercado de trabajo.

En septiembre de 2007, según diferentes estimaciones, el número de personas extranjeras en situación irregular en el Estado español era de aproximadamente 500.000, casi la misma cifra que se barajaba antes del proceso de normalización promovido por el Gobierno. En definitiva, en materia de política migratoria, el PSOE ha cerrado la legislatura tal como la empezó: con una bolsa de personas en situación irregular más o menos igual en el número, pero todavía más invisibilizada a causa del discurso triunfalista del Gobierno. La realidad es que no hay, en la práctica, una vía de regularización para este medio millón de personas inmigrantes en situación irregular.

Los derechos de las personas inmigradas: la discriminación de los “invisibles”

En febrero de 2007, el Parlamento español aprobó el *Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010*. Entre sus principios políticos inspiradores, el plan indica el de ciudadanía. En efecto, su primer objetivo sería “garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y políticos de los inmigrantes”.

En realidad, actualmente en el Estado español los derechos de las personas inmigradas no se pueden considerar de ninguna manera garantizados. Prueba de que esta situación no sólo no se soluciona, sino que la discriminación se amplía, es el hecho de que una parte importante de la población inmigrada ha quedado excluida de las nuevas leyes sociales promulgadas por el Gobierno, como la Ley de Dependencia, las ayudas al alquiler y la recompensación económica por nacimiento o adopción, solamente por el hecho de estar en situación irregular o no tener una autorización de residencia permanente.

Este sistema discriminatorio culmina en la invisibilidad política de las personas inmigradas. En el año 2007 hubo elecciones locales, y dos millones de las personas que viven en España no han podido votar por cuestión de origen. En el transcurso del último año, la mayoría de los partidos políticos han tratado el tema del derecho al voto relacionándolo con el contenido de la Ley de Extranjería y vinculándolo a los tópicos negativos conectados con la inmigración, en lugar de asumirlo como un requisito propio de los conceptos de democracia y ciudadanía. No sólo no se ha avanzado en conseguir el objetivo, sino que muchos representantes políticos han contaminado este debate con demagogia y xenofobia. En el Estado español, donde la Constitución proclama la democracia como uno de sus principios fundamentales, es necesario superar el nexo entre ciudadanía y nacionalidad y plantear un nuevo concepto de ciudadanía vinculado a la residencia.

Este año se ha caracterizado por la necesidad de revisión de la Ley de Extranjería a partir de las sentencias que el Tribunal Constitucional (TC) falló a finales de 2007, sobre los recursos presentados por el Parlamento de Navarra y la Junta de Andalucía contra diversos preceptos de la misma ley. Las sentencias establecieron el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas extranjeras a la enseñanza no obligatoria, reunión y asociación, además del derecho de huelga; derechos que han sido excluidos de la reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Partido Popular y a la que el Gobierno socialista no aportó ningún cambio. Por otro lado, la sentencia del TC fijó la constitucionalidad de importantes cuestiones como son la no consideración de la reagrupación familiar como un derecho fundamental o la aceptación de la falta de motivación a la hora de denegar un visado.

El fallo no ha supuesto una mejora real respecto a la igualdad de derechos de las personas extranjeras y la población nacional, pues vuelve a dejar en manos del Gobierno la redacción de los artículos de la ley declarados “contrarios a la Constitución”. Si las condiciones que puede poner el legislador en el ejercicio de estos derechos por parte de las personas extranjeras en situación irregular no se ajustan a la Constitución, nos encontraremos de nuevo ante la inseguridad jurídica y la incertidumbre, que sólo se podrán despejar pasados unos cuantos años, con una nueva sentencia. Sentencias como éstas ponen sobre la mesa el debate jurídico de la irregularidad en materia de extranjería. Por un lado, el legislador evita enfrentarse a un problema que afecta a cientos de miles de personas extranjeras; por otro lado –y aunque sean invisibles para el mundo de los derechos– se trata precisamente de personas que viven, trabajan, etc., en el Estado. El TC nos ha recordado que situaciones como la irregularidad de las personas extranjeras pueden y deben ser objeto de derechos.

En el ámbito laboral, los datos sociolaborales dan una idea de la vulnerabilidad del colectivo inmigrante en el mercado de trabajo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), a inicios de 2007, la mitad de las personas inmigrantes en situación regular en España trabajaba con contratos temporales. Además, el Estado español lideraba la clasificación de países desarrollados que más desaprovechaban la formación profesional de las personas inmigrantes. Según el estudio de la OCDE, el 43% de las personas inmigrantes empleadas en el Estado español trabajaba en empleos por debajo de su cualificación profesional. Por otro lado, según los datos del sindicato Comisiones Obreras,³ en 2007 los trabajadores extranjeros cobraban entre un 7,2% y un 16,3% menos que los españoles por el mismo empleo, una diferencia salarial que podía alcanzar el 30% en los empleos de economía sumergida. El caso de la vendimia de Castilla-La Mancha del pasado mes de septiembre es emblemático de la situación de explotación laboral que deben aceptar las personas extranjeras en situación irregular. Las asociaciones y cooperativas de agricultores de la región contrataron de forma ilegal a centenares de trabajadores irregulares con el beneplácito del Gobierno, que desde el primer momento declaró estar dispuesto a mostrar “la máxima flexibilidad posible” en los procedimientos de contratación de los trabajadores, principalmente de origen búlgaro y rumano. Fue una demostración de la hipocresía del Gobierno, inflexible en el control fronterizo y a la hora de expulsar personas en situación irregular, y “máximamente flexible” cuando son los empresarios quienes piden flexibilidad. La economía española crece gracias a prácticas como ésta, en las que la inmigración pasa a ser vista exclusivamente como mano de obra barata representando la nueva esclavitud del siglo XXI. Las tareas agrícolas llevan años manteniéndose con la precaria situación de las personas que trabajan como temporeras. A la realidad de la vendimia de Castilla-La Mancha se tie-

³ Ver Comisiones Obreras, *Inmigración y mercado de trabajo. Propuestas para la ordenación de flujos migratorios*, CCOO, Madrid, 2007.

nen que sumar situaciones como las del Levante español, donde trabajadores de origen norteafricano continúan malviviendo en cortijos abandonados, o cómo la precariedad laboral de muchos cuidadores y cuidadoras que, por estar en situación irregular, quedarán fuera de los derechos establecidos por la Ley de Dependencia. La hipocresía y el afán de enriquecimiento siguen produciendo las mismas vulneraciones de derechos: horas mal pagadas, aprovechamiento de la situación administrativa de las personas inmigrantes, no cotización a la seguridad social, etc.

En el ámbito educativo, la integración del alumnado extranjero representa sin duda uno de los grandes retos a los que se viene enfrentando el sistema educativo español. Al comienzo del curso 2007/08, las escuelas públicas acogían el 69% del alumnado de origen extranjero, frente al 31% que se escolarizaba en centros privados y privados-concertados.⁴ El Consejo Económico y Social (CES) advirtió que la mayor presencia de alumnado extranjero en centros públicos concretos requiere el diseño de medidas específicas para evitar procesos de marginalización, y recomendó la implementación de políticas y prácticas que favorezcan la integración de los estudiantes de origen inmigrante en los centros escolares. La existencia de dichos procesos de marginalización en el sistema escolar incrementa el riesgo de exclusión social de los hijos e hijas de familias inmigradas, así como de los y las jóvenes que han llegado al Estado a través de reagrupaciones familiares, alimentando el racismo a partir de la desigualdad de oportunidades. Este proceso puede llevar a estos futuros ciudadanos y ciudadanas a tener conflictos de identidad y sentirse excluidos de la sociedad. En definitiva, los actuales límites del sistema educativo alimentan el riesgo de construir una sociedad fragmentada. Es necesario que el sistema educativo del Estado garantice una igualdad real de oportunidades y de trato a todo el alumnado, puesto que esto representa una condición indispensable en la apuesta hacia un modelo de sociedad realmente cohesionada e igualitaria.

Uno de los ámbitos donde se da mayor discriminación del colectivo inmigrante es el acceso a la vivienda. De un estudio realizado por SOS Racismo Bizkaiko⁵ emergió que el 80% de las inmobiliarias de Bilbao se negaban sistemáticamente a alquilar pisos a personas extranjeras, debido a que las agencias obedecían a las exigencias de los propietarios, que no querían tener por inquilinos familias extranjeras. En general, la tendencia de la población inmigrada a concentrarse en determinados barrios –por ser los que ofrecen mayores posibilidades de viviendas accesibles, baratas o en alquiler– está alimentando el peligro de que la etnización de la exclusión social que se vive en algunos barrios se haga cada vez más patente.

⁴ SOS Racismo, 2008, *op. cit.*

⁵ Informe disponible en: www.mugak.eu

Colectivo inmigrante y pueblo gitano: las víctimas del racismo social

Además del racismo institucional, el año de 2007 se ha caracterizado por el alto nivel de racismo social registrado en España. Hechos como los ocurridos en Alcorcón (Madrid) en enero de este mismo año deben alertarnos sobre las alarmantes manifestaciones de racismo presentes en nuestra sociedad.⁶ Estos episodios de racismo social representan una muestra de algo mucho más grave y profundo: el calado de prejuicios y generalizaciones que se está produciendo en la sociedad y que criminaliza a personas y colectivos en función de características comunes como el origen; en definitiva, la normalización de la xenofobia en diferentes sectores sociales. Semejantes explosiones racistas no pueden ignorarse, ni se puede minimizar su importancia. En efecto, durante el último año, el tratamiento que los medios de comunicación y algunos discursos políticos dieron a la inmigración ha sido uno de los factores que más han contribuido a agravar el problema del racismo social y sus consecuencias. Mediáticamente se siguen fomentando los tópicos y prejuicios hacia la inmigración, al mismo tiempo que se esconden, minimizan o banalizan las actitudes o agresiones racistas y xenófobas. Por otro lado, denunciaremos que la constante reproducción de los tópicos negativos sobre la población inmigrada con fines electoralistas, así como de las amenazas a la inmigración por parte de los partidos políticos, contribuye a la legitimación de la impunidad de las diferentes manifestaciones racistas y xenófobas. La lucha contra el racismo social implica erradicar el caldo de cultivo del que éste se nutre a partir de la pedagogía social, la responsabilidad y ética política, y la apuesta por incrementar los presupuestos sociales a fin de evitar conflictos entre la población para el acceso a los escasos recursos del Estado de bienestar.

Durante el último año, el caso del pueblo gitano ha representado otra vez el ejemplo más claro de un tipo de discriminación profundamente asimilado, tanto en el ámbito europeo como el español, agravado además por la situación de la población gitana de los países del este europeo, la mayoría con derecho a residir en la Unión, pero no a trabajar, debido a las moratorias aprobadas por algunos Estados miembros, entre ellos el Estado español. La población gitana de origen rumano es uno de los colectivos contra los que se ha focalizado el racismo social más explícito. Por parte de los responsables políticos se ha vuelto a utilizar la argumentación xenófoba –en su día dirigida explícitamente contra el colectivo gitano nacional– de la imposibilidad de integración por su falta de voluntad.

El caso de este colectivo, expulsado literalmente de muchos municipios y precipitado hacia la exclusión social, evidencia cómo la falta de políticas sociales y de integración reper-

⁶ Una buena reconstrucción de los hechos que se produjeron en Alcorcón a partir del 20 de enero se encuentra en M. Gascón, "El conflicto juvenil de Alcorcón", *Mugak*, Nº 38, Donostia/San Sebastián, junio de 2007. En: <http://revista.mugak.eu/articulos/show/389>

cute tanto en estas personas, víctimas de discriminación institucional, como en el resto de la población. Esta situación provoca problemas de convivencia que a su vez alimentan tópicos, estigmatizan y culpabilizan todavía más a las víctimas: un círculo vicioso vergonzoso cuyos únicos responsables son las diferentes administraciones y responsables políticos. Un informe de la Fundación Secretariado Gitano⁷ estableció un mapa general de los ámbitos en los que se producen las principales prácticas discriminatorias hacia la comunidad gitana en el Estado. Otra vez más, trabajo, educación y vivienda fueron los ámbitos en los cuales se han presentado más denuncias por comportamientos racistas durante 2007. En el ámbito educativo, vale la pena destacar la falta de garantías para un acceso igualitario del alumnado gitano a los centros educativos privados y concertados, así como la existencia de una importante segregación y concentración de estos alumnos y alumnas en determinados centros públicos o clases especiales. Esto supone una educación de menor calidad y con menos recursos, incrementando el riesgo de marginalización y la creación de guetos en relación con las minorías étnicas.

Uno de los ámbitos donde se da mayor discriminación del colectivo inmigrante es el acceso a la vivienda

A modo de conclusión

En definitiva, en 2007 no sólo en el Estado español no se ha avanzado en la lucha contra el racismo, sino que la problemática se ha agravado. El inicio de 2008 ha puesto punto y final a una legislatura caracterizada por el inmovilismo político y la consolidación del racismo institucional producido por la Ley de Extranjería, que continúa provocando irregularidad, exclusión social y explotación laboral, como realidades sociales que han sido regularmente invisibilizadas y silenciadas por el Gobierno. La pasada legislatura se ha caracterizado, además, por un retroceso en materia de derechos humanos y un endurecimiento de la política de expulsiones y repatriaciones, sobre todo con las personas procedentes del continente africano; y, por último, por un aumento del racismo social que diversifica y amplía sus manifestaciones.

La lucha contra el racismo no ha sido una prioridad de este Gobierno, que ha preferido seguir girando la cabeza y mirar a otro lado. Luchar contra el racismo implica un cambio en las políticas para garantizar una igualdad de derechos y oportunidades, es decir, empezar por no discriminar desde las instituciones y paralelamente erradicar los factores que provo-

⁷ Fundación Secretariado Gitano, *Discriminación y Comunidad Gitana 2007*, Fundación Secretariado Gitano, Madrid, 2008.

can el aumento del racismo social; e implica, a la vez, contundencia para castigar la existencia de las acciones racistas y xenófobas. La falta de jurisprudencia, así como la falta de sensibilidad del Estado de derecho en el momento de castigar dichas acciones, ha provocado la negación de la existencia del racismo y la impunidad de estas conductas; y esta realidad se acompaña, en muchos casos, de la banalización o negación de su existencia por parte de los discursos políticos y de los medios de comunicación.

CARLOS TAIBO

Rusia y EEUU en el Cáucaso occidental: lecciones de una crisis

A duras penas puede exagerarse el relieve geoeconómico y geoestratégico del Cáucaso. La región, ubicada en la proximidad de lo que convencionalmente se entiende que es el Oriente Próximo, ofrece una atalaya privilegiada para controlar lo que ocurre en una parte del planeta en la que se dan cita Europa, Asia y África. No sólo eso: se halla muy cerca de riquezas ingentes en materias primas energéticas, como las que atesoran el golfo Pérsico y, más aún, la cuenca del mar Caspio. De resultas de las disputas correspondientes, el trazado de conductos de transporte, viejos y nuevos, es una fuente permanente de controversia entre los países de la región. Para rematar, y si así se quiere, en el Cáucaso se manifiestan algunos de los signos de ese choque de civilizaciones que el pensamiento conservador norteamericano interesadamente identifica en la forma, en este caso, de una confrontación entre cristianos y musulmanes.

En un escenario como el descrito, no puede sorprender que los conflictos hayan sido frecuentes. Desde la desintegración de la URSS han afectado, en los hechos, a todos los Estados caucasicos. Así, mientras Armenia y Azerbaiyán se han disputado el enclave de Nagorni-Karabaj –mayoritariamente poblado por armenios aunque formalmente emplazado en Azerbaiyán–, Georgia ha sido un foco de tensiones que, tras afectar de manera liviana, hace años, a una parte de su territorio, Adyaria, han marcado de manera mucho más notable el derrotero de otras dos repúblicas: Osetia del Sur y Abjazia. En Rusia, en suma, se han hecho valer dos sangrientos conflictos bélicos en Chechenia, que en 1991 decidió seguir el camino de la secesión. Por no faltar, no han faltado tampoco las tensiones en varias de las repúblicas del Cáucaso septentrional, también ubicadas en Rusia. Teatro de esas tensiones, de mayor o menor intensidad, han sido Daguestán, Ingushetia, Kabardino-Balkaria y Osetia del Norte. Por cierto que en esta trama las dos Osetias, mayoritariamente cristianas, se han desgajado desde mucho tiempo atrás de territorios colindantes con mayoría de población musulmana.

Carlos Taibo es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid

El conflicto de Osetia del Sur

La breve guerra librada en agosto de 2008 ha tenido como escenario ante todo a Osetia del Sur. Esta república, de escasos 4.000 kilómetros cuadrados y poblada por menos de 100.000 habitantes, asumió, tras la desintegración de la URSS, lo que cabe entender que fue una independencia *de facto* con respecto a Georgia, apuntalada por dos hechos: si el primero lo aportó, con el paso del tiempo, la decisión de Moscú en el sentido de otorgar pasaportes a la población surosetia, el segundo asumió la forma de un despliegue de soldados rusos que sobre el papel desempeñaban una misión estrictamente pacificadora, aun cuando en realidad estuviesen claramente alineados del lado de los secesionistas locales. A lo largo de los tres últimos lustros se han registrado en Osetia del Sur –un país marcado, como todos los del entorno, por un irrefrenable capitalismo mafioso– diferentes, y estériles, intentos georgianos de recuperar el territorio, con resultado en frecuentes escaramuzas. No hay motivo alguno para dudar de que tanto los gobernantes autóctonos como las autoridades georgianas han abrazado políticas nada respetuosas en relación con sus rivales.

Importa subrayar que el origen del conflicto de Osetia del Sur obliga a prestar oídos a los efectos de una más de las manifestaciones de las políticas de ingeniería étnica desplegadas en la etapa soviética. De resultas, el territorio de Osetia fue dividido en dos partes: mientras la septentrional quedaba en Rusia, la meridional correspondió a Georgia. Parece evidente, por lo demás, que el grueso de la población de Osetia del Sur –los osetios étnicos– ha dejado bien a las claras desde tiempo atrás su designio de abandonar el Estado georgiano.

En la trastienda del conflicto bélico de agosto se han hecho valer también tensiones en Abjazia. Contentémonos con señalar que aunque el proceso de independencia *de facto* con respecto a Georgia, y el apoyo ruso, se han ajustado a las mismas pautas que en Osetia del Sur, en el caso de Abjazia, los abjazios étnicos eran minoría de la población antes de 1991, circunstancia que plantea –parece– problemas distintos en lo que hace a la condición de los agentes que operan sobre el terreno.

La ambigüedad de la actuación norteamericana en el Cáucaso.

No es sencillo explicar la acción militar asumida por Georgia, en Osetia del Sur, el 7 de agosto de 2008. A los ojos de la abrumadora mayoría de los analistas era evidente que iba a ser respondida inmediata y contundentemente por el ejército ruso, que, por añadidura, se encontraba en posición muy cómoda frente a un rival mucho menos dotado. En tales cir-

cunstances no puede sorprender que hayan proliferado los análisis que, con innegable tono conspiratorio, sugieren que EEUU convenció al presidente georgiano, Mijail Saakashvili, de la conveniencia de acometer una ofensiva que en los hechos sólo estaba llamada a rendir beneficios para la Casa Blanca. Conforme a esta interpretación, la imaginable falta de mesura de la respuesta rusa se convertiría en un argumento sólido para que los *halcones* norteamericanos, en vísperas de una elección presidencial, reclamasen una política mucho más dura en relación con Moscú.

El origen del conflicto de Osetia del Sur obliga a prestar oídos a los efectos de una más de las manifestaciones de las políticas de ingeniería étnica desplegadas en la etapa soviética

Es verdad, claro, que de dar crédito a la interpretación que acabamos de enunciar, EEUU asumía también el riesgo de que su principal aliado en el Cáucaso, el mentado presidente Saakashvili, perdiera el poder. En el momento en que estas líneas se escriben, este último horizonte no puede descartarse por completo. La sociedad georgiana parece dividida entre quienes se han entregado a un visible efluvio nacionalista y se han inclinado por cerrar filas frente a Rusia, por un lado, y quienes han recuperado el pulso de la contestación de las políticas de Saakashvili. La naturaleza, a menudo impresentable, de las acciones del ejército ruso parece mover el carro, con todo, de la primera de esas dos opciones. Y ello aunque no hay ningún motivo para concluir que, en su ofensiva de agosto, el ejército georgiano hizo gala de un comportamiento respetable.

La política de las autoridades georgianas se halla firmemente ligada, desde hace años, al dictado que emana de EEUU. En el escenario del Cáucaso, este último obedece a dos grandes objetivos muy interrelacionados entre sí. El primero estriba en disputar a Rusia el jugoso negocio del transporte de las materias primas energéticas extraídas en el Caspio. Al respecto, Washington ha pujado por construir un nuevo conducto que, desde las orillas de ese mar, y tras cruzar Azerbaiyán y Georgia, remata en el puerto turco de Ceyhan, a orillas del Mediterráneo. El segundo de los objetivos no es otro que debilitar a Rusia en su *patio trasero* caucásico, dificultando así el renacimiento de aquélla como potencia eventualmente alternativa.

Si se trata de identificar dos hitos principales que dan cuenta de la política de Washington, el primero lo aporta una calculada ambigüedad en Chechenia. Aunque a EEUU no le interesa que emerja una Chechenia independiente que en un grado u otro estaría mar-

cada por el estigma del islam radical, tampoco tiene interés alguno en que Moscú cierre a su gusto el conflicto. La Casa Blanca aplica, pues, una norma que en mucho recuerda a lo que Henry Kissinger dijo en relación con la guerra librada por Irán e Irak en el decenio de 1980: el interés de EEUU es que los dos contendientes salgan mutuamente derrotados. El segundo de esos hitos lo ha perfilado un franco apoyo a la Georgia de Saakashvili, convertida en principal peón de la agresividad norteamericana y en candidato firme a una rápida incorporación a la OTAN y, en su caso, a la Unión Europea.

No está de más subrayar que, en una lectura legítima, bien puede afirmarse que el Cáucaso ha adquirido un relieve creciente para Washington de resultados de los reveses que ha experimentado la política de la Casa Blanca en Asia central –las cordiales relaciones con Uzbekistán, en particular, han tocado a su fin– y de los sucesivos fracasos registrados en Afganistán e Irak.

Subordinación y división interna de la Unión Europea

No es mucho lo que hay que decir sobre el papel desempeñado por la Unión Europea (UE). Contentémonos con afirmar que ésta carece, en lo que al Cáucaso se refiere, de una política independiente de la que abraza EEUU. El efecto principal de esta carencia es que se expone a padecer en carne propia muchas de las secuelas de decisiones norteamericanas que, en virtud de un obvio criterio geográfico, tienen efectos mucho más perversos en el caso de la UE que en el de EEUU. Al margen de lo anterior, y como casi siempre, la UE se halla dividida. En su interior se aprecian, si así se quiere, tres posiciones: la de varios de los miembros recién incorporados, muy severos en su trato con Moscú –es el caso de Polonia y de las repúblicas bálticas–, la de alguno de los socios tradicionales –así, el Reino Unido–, también muy duro en sus posiciones en lo que a Rusia respecta, un poco en la línea de la política norteamericana, y, en suma, la del resto de los socios.

La UE se halla relativamente entrapada, por lo demás, en su relación con Moscú, de resultados de la dependencia que arrastra con respecto al petróleo y, en particular, el gas natural rusos. Conviene subrayar, eso sí, que la dependencia es mutua: el Kremlin no puede prescindir alegremente del negocio que proporcionan las compras de materias primas energéticas que realizan los Estados de Europa occidental (y debe atender, dicho sea de paso, a una creciente demanda interna). Circunstancias como éstas explican que, pese a la retórica, a la postre la Unión Europea haya rechazado cualquier tipo de sanción como respuesta ante la intervención militar rusa en Georgia. No parece descabellado afirmar que, por añadidura, y de nuevo pese al lenguaje empleado, Bruselas sabe que el control ruso de Osetia del Sur y Abjazia es un hecho consumado.

La estrategia rusa: Renovación del viejo discurso nacional-imperial

Para explicar la posición de Rusia en relación con lo que nos ocupa es preciso recordar algo que ocurrió entre 2001 y 2006: en la estela de los atentados del 11 de septiembre del primero de esos años, y al amparo de las operaciones, supuestamente antiterroristas, lideradas por EEUU, Moscú demostró ser un aliado fiel de Washington; en el peor de los casos, respondió con un silencio connivente a operaciones como la asestada por la Casa Blanca en Irak. El Kremlin no recibió, sin embargo, ningún tipo de contraprestación por su genérica colaboración con EEUU.

Para apuntalar la última afirmación no hay que ir muy lejos: EEUU ha mantenido en vigor un proyecto, el escudo antimisiles, que obedece al objetivo de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino; ha propiciado una nueva ampliación de la OTAN que en este caso ha beneficiado a las tres repúblicas del Báltico; no ha desmantelado las bases que creó, en el otoño de 2001, en el Cáucaso y en el Asia central; ha alentado las llamadas *revoluciones de colores* en Georgia, Ucrania y Kirguizistán y, en suma, no ha dispensado a Rusia ningún trato comercial razonable.

Era de cajón que, dadas las circunstancias mencionadas, a Moscú no le quedaba otro remedio que buscar otros aires. Para explicar este movimiento ha sido decisiva también, claro, la relativa bonanza económica en la que vive Rusia desde 2000, consecuencia ante todo de la subida operada en los precios internacionales del petróleo. Esa bonanza ha permitido reflotar unas maltrechas fuerzas armadas y le ha dado alas a un renovado discurso nacional-imperial. De resultas, Rusia parece hoy firmemente decidida a defender sendas zonas de influencia en el Cáucaso y en el Asia central, y a asumir algunos riesgos de eventual confrontación con EEUU. El reconocimiento occidental de la independencia kosovar le ha ofrecido a Moscú un sugerente argumentario en el que cimentar pasos como el que ha abocado en las independencias *de facto* de Osetia del Sur y Abjasia. No parece que, entre tanto, al Kremlin le importe en demasía que vayan a ser muy pocos los Estados dispuestos a reconocer estas últimas independencias.

Políticas de doble rasero

Parece fuera de discusión que tanto las potencias occidentales como Rusia han aplicado en los últimos meses obscenas fórmulas de doble rasero. Tiene su sentido reseñar al respecto las principales manifestaciones del fenómeno. EEUU, y con él varios de los líderes de la UE, han puesto un singular empeño en defender la integridad territorial de Georgia, principio que en cambio prefirieron olvidar en febrero de 2008 en el caso de Serbia. No sólo eso:

han criticado agriamente las acciones militares rusas en territorio georgiano, como si no pesasen sobre nuestra conciencia prácticas similares tal cual las desplegadas por la coalición anglonorteamericana cinco años atrás en Irak.

Claro es que Rusia no sale mejor parada: por mucho que su posición algo tenga de respuesta a lo hecho por otros, es difícil explicar los reconocimientos rusos de Osetia del Sur y Abjazia cuando Moscú había mostrado tanto interés en defender el Derecho Internacional al calor del contencioso kosovar. Los dirigentes rusos habrán de explicar también por qué alientan en Osetia del Sur y Abjazia lo que han rechazado por la vía de las armas en Chechenia. Parece servida la conclusión de que unos y otros utilizan los principios de integridad territorial y secesión según sus conveniencias.

Es urgente subrayar, con todo, que para explicar los procesos kosovar, surosetio y abjazio la palabra autodeterminación está de más. O está de más al menos en lo que hace a la consideración de esos procesos por parte de los dirigentes occidentales y rusos. A los ojos de los primeros no resultó conveniente, al parecer, alentar una consulta popular en Kosova, mientras a los ojos de los segundos la razón que justifica el reconocimiento de Osetia del Sur y Abjazia no es la que proporcionan las querencias, presuntamente mayoritarias, de sus habitantes, sino, antes bien, la condición de la agresión militar georgiana de agosto de 2008.

Así las cosas, es obligado reseñar que los procesos que nos ocupan, ningún camino hacedero parecen abrir en lo que respecta a la vinculación entre derecho de autodeterminación, por un lado, y horizonte, posible, de secesión, por el otro. Las grandes potencias han puesto toda la carne en el asador para que esos procesos se vinculen, sin más, con argumentos encaminados a marginar cualquier principio que remita a las querencias mayoritarias entre la población de uno u otro lugar.

Conclusiones para escenarios futuros

Hay que preguntarse por la posibilidad de que se repitan en otros escenarios acontecimientos más o menos similares a los registrados en el verano de 2008. A primera vista, los candidatos más sólidos al respecto son dos: la llamada república del Transdnestr y Crimea. En el primero de esos casos conviene subrayar que la relación entre el país afectado, Moldavia, y Rusia es mucho menos tensa que la que Moscú mantiene desde tiempo atrás con Georgia. Esto aparte, el hecho de que el Transdnestr no sea colindante con el territorio ruso aconseja pensar que el Kremlin se tomará las cosas con mayor calma. Crimea es harina de otro costal: aunque, de nuevo, es improbable que Rusia decida mover con energía sus peones, en este caso no debe olvidarse que, al igual que en Osetia del Sur, la península está mayoritariamente poblada por rusos que probablemente ven con buenos ojos un proceso de sece-

sión. Aun con ello, ni Ucrania es Georgia ni la posición de las potencias occidentales cabe esperar que sea la misma que la que han asumido en relación con Osetia del Sur y Abjazia.

Lo lógico es postular, en suma, que Moscú se da moderadamente por satisfecho con lo ocurrido en el verano en el Cáucaso occidental, y que tendrían que cambiar mucho las circunstancias para que se lanzase a mover pieza en escenarios como los mentados.

Para explicar los procesos kosovar, surosetio y abjazio la palabra autodeterminación está de más

Con mucha frecuencia se ha esgrimido últimamente la afirmación de que nos hallamos ante una nueva guerra fría. No parece que los datos justifiquen semejante intuición. Y es que no podemos olvidar que hoy se hacen valer circunstancias muy diferentes de las que imperaron en la etapa de la confrontación entre los bloques. Por lo pronto, y aun cuando esta aseveración merezca algún matiz, en el mundo occidental y en Rusia se ha instalado un mismo sistema económico: el capitalismo global con su lógica de exclusiones y deprecación. Esto aparte, conviene subrayar con urgencia que las capacidades respectivas de los agentes teóricamente enfrentados son muy diferentes. Bastará con recordar que el gasto militar ruso no sólo se halla a distancia abismal del norteamericano: está por debajo, también, del que exhiben potencias occidentales de segundo orden como el Reino Unido, Francia y Alemania. Por si ello fuese poco, los aliados de Moscú son difíciles de identificar. En los hechos, la lista correspondiente se agota con los nombres, que invitan a mantener alguna cautela, de Bielorrusia, Armenia, Serbia y varias de las repúblicas centroasiáticas. Recuérdese al efecto que ni siquiera China se ha atrevido a dar un paso adelante en materia de reconocimiento de Osetia del Sur y Abjazia.

Más allá de lo anterior, es imperioso recordar que las reflexiones que refieren la gestación de una nueva guerra fría rara vez se contentan con el pronóstico correspondiente. Se ven acompañadas por lo común de sesudas consideraciones que, al menos en el mundo occidental, apuntan casi siempre a la atribución de responsabilidades precisas. Fácil es deducir que, conforme a esta percepción de los hechos, la tensión creciente es, en exclusiva, el producto de una política, la rusa, que configuraría una permanente amenaza para Occidente. Sobran los datos, claro, para concluir que semejante descripción de los hechos se ajusta poco a la realidad. Sin ninguna necesidad de disculpar comportamientos impredecibles del lado de Moscú, más bien parece que es la agresiva actitud de EEUU, coreada casi siempre por sus aliados europeos, la que está generando tensiones que serían, en otras condiciones, fáciles de desactivar. Hay quien dirá que para los gobernantes norteamericanos la amenaza del islamismo radical se halla un tanto gastada. Nada más sencillo, entonces, que reflotar la que, cargada de equívocos, dispensa el gigante del este europeo.

Nueva colección

del Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial)

economía & ecologismo crítica & social

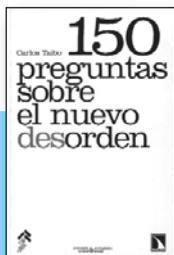


Nº 1

La nueva economía del agua

Autor: Federico Aguilera Klint
PVP: 15 €*

Para abordar los problemas del agua, hay que repensar los conceptos y las reglas del juego. Según el autor, el agua es un activo ecosocial, cuya gestión es inseparable de la del territorio y requiere una democracia más deliberativa.



Nº 2

150 preguntas sobre el nuevo desorden

Autor: Carlos Taibo
PVP: 12 €*

150 preguntas y otras tantas respuestas diseccionan el fenómeno de la globalización capitalista y explican las claves fundamentales de la política internacional contemporánea.



Nº 3

Un futuro sin petróleo. Colapsos y transformaciones socioeconómicas

Autor: Roberto Bermejo
PVP: 20 €*

Ante el previsible agotamiento de los combustibles fósiles, se analizan los problemas energéticos, las transformaciones socioeconómicas que empiezan a manifestarse y las vías de solución.

www.libreria.fuhem.es

(* Gastos de envío gratuitos para España)

BOLETÍN DE PEDIDO

- ✓ Compre a través de la web www.libreria.fuhem.es
- ✓ Envíe este formulario al fax **91 577 47 26**
- ✓ Llame al teléfono **91 431 03 46**
- ✓ Escriba un correo a publicaciones@fuhem.es

Nombre:

Dirección:

Población: C.P. Provincia:

Teléfono: Correo electrónico:

Deseo recibir

(Indique el número de ejemplares que desea recibir):

La nueva economía del agua

150 preguntas sobre el nuevo desorden

Un futuro sin petróleo. Colapsos y transformaciones socioeconómicas

FORMA DE PAGO

Cheque a nombre de Fundación Hogar del Empleado

Contra reembolso

Transferencia bancaria a:
Banco Popular. C/ O' Donnell, 22. 28009 Madrid.
Nº Cuenta: 0075 0251 11 0600005047

Si desea pagar con tarjeta de crédito,
compre **de forma segura**
a través de la librería on-line:

www.libreria.fuhem.es



Duque de Sesto, 40 - 28009 Madrid
Tel.: 91 431 03 46 - Fax: 91 577 47 26
Web: www.cip-ecosocial.fuhem.es
E-mail: cip@fuhem.es

**Dimensiones de la inmigración en España.
Impactos y desafíos**

Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada

95

Periscopio

Dimensiones de la inmigración en España. Impactos y desafíos

En la última década España se ha convertido en uno de los principales destinos de la migración internacional, con un saldo anual medio de 575.000 personas entre 2001 y 2008. Este flujo exterior explica el 81% del extraordinario crecimiento de la población total del país entre dichos años, que ha pasado de 41 a 46 millones de habitantes. Además, la baja tasa de natalidad de los autóctonos, unida a la mayor juventud de los nuevos ciudadanos, explica que éstos tengan cada vez más peso en el crecimiento vegetativo: el 14,2% de los nacimientos producidos entre 2001 y 2007 fueron de madre extranjera; a dicha cifra hay que sumar los de madre española y padre extranjero (2,4%). Por tanto, su incidencia en el incremento demográfico español (suma de los saldos migratorio y vegetativo) hay que situarla en torno al 85%.

Con casi seis millones de inmigrados –personas empadronadas nacidas en otro país– y 5,2 millones de extranjeros –personas empadronadas con nacionalidad no española–, a 1 de enero de 2008, España se ha convertido en el décimo país del mundo por número total de inmigrados, revirtiendo una larga tradición histórica que la caracterizaba como país de emigración. Aunque todavía residen en el extranjero alrededor de millón y medio de españoles, dicha cifra fue superada por la inmigración a comienzos de este siglo. Según la *División de Población de Naciones Unidas*, España era en 2005 el tercer país del mundo que más había incrementado su población inmigrada en números absolutos desde 1990, tras EEUU y Alemania, y el que más lo había hecho en términos relativos.² Por su parte, la OCDE constató, también en 2005, que España se había convertido en uno de los países con mayor número de trabajadores extranjeros, superando en números absolutos a tradicionales países de inmigración como Francia y Reino Unido, e incluso adelantando en términos relativos a EEUU y Alemania.³

Carlos Pereda,
Walter Actis y
Miguel Ángel de
Prada son miembros
de Colectivo loé¹

¹ El presente artículo resume y actualiza el libro de Colectivo loé, con la colaboración de Graciela Malgesini, Ana I. Planet y Daniel Wagman, *Inmigrantes, nuevos ciudadanos*, FUNCAS, Madrid, 2008. En: www.colectivoioe.org

² División de Población de Naciones Unidas, *Migrantes internacionales por países*. En: www.publications.worldbank.org

³ Ver SOPEMI, *Perspectives des Migrations Internationales*, OCDE, Paris, 2007, p. 68.

El 40% de los extranjeros empadronados a comienzos de 2008 procede de alguno de los restantes 26 miembros actuales de la Unión Europea (el 16% de Rumanía y Bulgaria, recientemente ingresados) y menos del 2% de otras naciones desarrolladas. Por tanto, el 58% (3,1 millones de personas) es originario del mundo “menos desarrollado”, destacando las personas procedentes de Maruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, China, Perú y Brasil, todos ellos con más de 100.000 efectivos. El Gráfico 1 recoge la diferencia entre el número de extranjeros (nacionalidad) e inmigrados (país de nacimiento), muy apreciable en países como Argentina, Francia, Alemania, Italia, Colombia y Perú.

Tabla 1
Población total, inmigrada y extranjera en España (1971-2008)

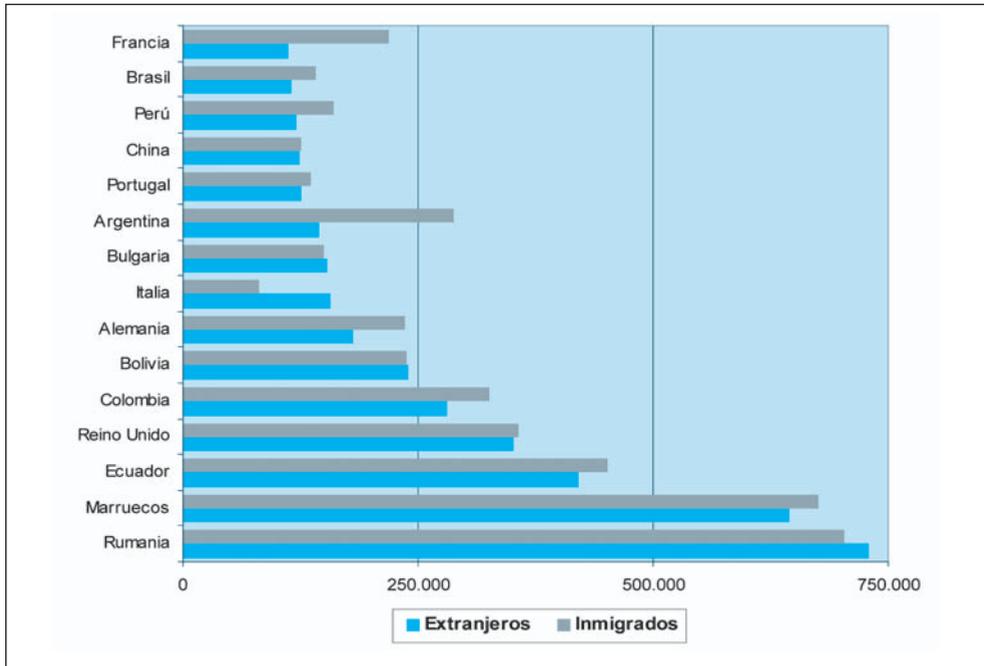
	Año	A Pobl. Total	B Inmigrados	% B/A	C Extranjeros	% C/A	D Residentes	% (C-D)/C "Irregulares"
Censos	1971	34.117.623	365.376	1,1	183.195	0,5	148.400	19,0
	1981	37.723.299	625.907	1,7	233.082	0,6	183.422	21,3
	1991	38.846.823	840.594	2,2	350.062	0,9	278.696	20,4
Padrón continuo	2001	41.116.842	1.969.270	4,8	1.370.667	3,3	895.720	34,7
	2002	41.837.894	2.594.052	6,2	1.977.944	4,7	1.109.060	43,9
	2003	42.717.064	3.302.440	7,7	2.664.168	6,2	1.324.001	50,3
	2004	43.197.684	3.693.806	8,6	3.034.326	7,0	1.647.011	45,7
	2005	43.975.375	4.355.300	9,9	3.691.547	8,4	1.977.291	46,4
	2006	44.708.964	4.837.622	10,8	4.144.166	9,3	2.738.932	33,9
	2007	45.200.737	5.249.993	11,6	4.519.554	10,0	3.021.808	33,1
	2008*	46.063.511	5.995.962	13,0	5.220.577	11,3	3.979.014	23,8**

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (Censos de Población y Padrón Continuo de Población), Ministerio del Interior (extranjeros documentados: residentes). Las cifras del Ministerio del Interior corresponden a 31/12 de cada año, las de los padrones municipales a 1/1; debido a ello hemos consignado los datos del Ministerio del Interior como si correspondieran al 1/1 del año siguiente.

(*) Datos provisionales, excepto residentes.

(**) Si se computan como regulares los 626.000 europeos comunitarios empadronados que carecen de autorización de residencia, la proporción de irregulares baja al 13,2%.

Gráfico 1

Principales colectivos de extranjeros e inmigrados en España (2008)

Fuente: elaboración propia a partir del INE, avance del Padrón Municipal de Población, a 1 de enero de 2008.

La brecha económica Norte-Sur, incrementada durante las últimas décadas por las políticas neoliberales y la creciente deuda externa, está en el origen de las migraciones desde los países periféricos hacia los países situados en posición más ventajosa en el jerarquizado mundo de la globalización. Estos migrantes del Sur hacia el Norte forman parte de la corriente internacional más importante de nuestros días: mientras los países de renta alta –según la clasificación establecida por el Banco Mundial– han incrementado la inmigración estable en 40 millones de personas desde 1990, pasando de 72 a 112 millones, los países de renta media se mantienen en la misma cifra (50 millones) y los de renta baja la han reducido de 33 a 28 millones. En términos relativos a la población mundial, la migración transnacional no ha superado el listón del 3% en las últimas décadas; sin embargo, su desigual distribución por áreas geográficas explica que en los países del Norte se tenga la falsa percepción de que la globalización económica ha acelerado las migraciones en el conjunto del planeta.

España se ha situado en los últimos años en el centro de la ola de esa migración Sur-Norte, con un mercado de trabajo en expansión que ha incrementado el número de ocupa-

dos en más de cinco millones entre 1999 y 2007 (de ellos, 2,3 millones extranjeros); la política de fronteras restrictiva y las dificultades para obtener papeles, aunque se tuviese empleo, fueron la causa de un gran incremento de personas en situación irregular. La comparación de cifras de empadronados (total de extranjeros) y poseedores de permiso de residencia (extranjeros en situación regular) indicaba que los “sin papeles” eran 1,7 millones en 2004, alrededor del 46,4% de la población extranjera. La regularización impulsada por el gobierno del PSOE en 2005 y cambios en la política de acceso a permisos de trabajo, han reducido esta cifra hasta 1,2 millones de personas (el 20% de los extranjeros). Las cifras de “verdaderos sin papeles” (personas que por su nacionalidad son susceptibles de ser expulsadas de España y sólo pueden trabajar en la economía sumergida) es, si excluimos del cómputo a los poseedores de nacionalidades de la Unión Europea, sensiblemente menor (690.000) pero aún bastante significativa (el 13% de los extranjeros). En el mercado de trabajo, en el primer trimestre de 2008, el 30% de los trabajadores extranjeros captados por la *Encuesta de Población Activa* (868.000 personas) no estaban dados de alta en la Seguridad Social (marzo de 2008).

Impactos y retos para la cohesión social

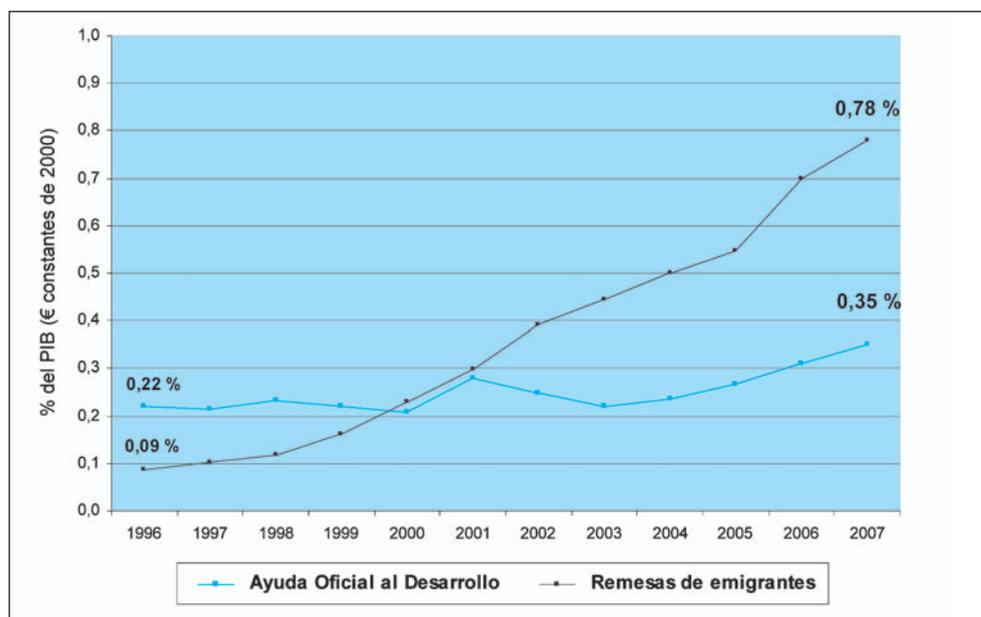
El aporte extraordinario de ciudadanos inmigrados, que representan en 2008 el 13% de la población total, ha tenido importantes efectos en la economía del país. Informes técnicos elaborados desde la Administración y desde el sector privado, coinciden con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en señalar que la inmigración fue una de las claves del extraordinario comportamiento de la economía española entre 1995 y 2005 en términos de crecimiento, empleo y finanzas públicas. Dicho colectivo, incluyendo a los que se encuentran no documentados, explicaría el 30% del crecimiento del PIB entre esos años, y casi el 50% del empleo creado entre 2000 y 2005. En cuanto a las finanzas públicas, los residentes extranjeros habrían aportado en 2005 el 6,6% del presupuesto público (23.400 millones de euros) generando un gasto un 20% inferior; este saldo favorable al erario público (4.784 millones de euros) representó en dicho año el 50% del superávit registrado por todas las administraciones públicas. Cuando una parte de la ciudadanía atribuye a los inmigrantes la saturación y degradación de ciertos servicios públicos, como la Sanidad⁴ o la Educación, no tiene en cuenta que estos servicios deberían aumentar al ritmo de incorporación de nuevos beneficiarios (dos millones de cotizantes extranjeros en 2007) que, además, aportan más de lo que perciben a las arcas públicas.

⁴ Un estudio reciente demuestra que la población inmigrante utiliza en menor proporción los servicios de atención primaria, especializada y hospitalizaciones; sólo recurre con más asiduidad a las urgencias, en parte por desconocimiento de la dinámica de funcionamiento del sistema. Ver E. Regidor, *Diferencias en la utilización de los servicios sanitarios entre la población inmigrante y la española*, Fundación Ciencias de la Salud, Madrid, 2008.

Los nuevos habitantes han impulsado la demanda de bienes y servicios, especialmente en los capítulos de vivienda y alimentación, lo que ha favorecido el crecimiento en esos sectores económicos. Asimismo, se ha constatado su decisivo papel en la expansión del transporte público de las ciudades y de larga distancia (compañías aéreas), del mercado logístico (mensajería, distribución), la venta de móviles y de automóviles de ocasión, etc. Han revitalizado el mercado del alquiler de vivienda y son la principal cantera de nuevos compradores. En el sector financiero (bancos, cajas de ahorros, empresas de envío de dinero, etc.) representan la clientela más reciente hacia la que se dirige buena parte de las campañas publicitarias y de los nuevos productos. Pero además generan una nueva economía “étnica”, que ocupa a inmigrados y a autóctonos y representa una expansión neta de la producción y del empleo en España.

Mediante las remesas que envían a sus parientes (8.130 millones de euros en 2007, el 0,8% del PIB español), los inmigrantes contribuyen al desarrollo de sus países de origen. En un espacio muy corto de tiempo, España se ha convertido en el primer receptor de remesas de la Unión Europea y en el quinto del mundo; en 2006 toda la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español supuso menos de la mitad de las remesas registradas por el Banco de España (ver Gráfico 2).

Gráfico 2
Evolución de las remesas de los inmigrantes y de la Ayuda Oficial al Desarrollo en relación al PIB de España (1996-2007)



Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco de España (Balanza de Pagos; en: www.bde.es) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (en: www.odg.cat).

En lo laboral, la inmigración ha proporcionado una oferta abundante en sectores que antes se encontraban deficitarios de mano de obra, como el servicio doméstico y el peonaje agrícola. Además, tiene una presencia cada vez mayor en la construcción, la hostelería, el comercio y el transporte. La evolución de las altas en la Seguridad Social permite comprobar una movilidad ocupacional desde los regímenes especiales agrario y de empleados de hogar hacia el régimen general, que ha pasado de incluir el 55% en 1999 al 72% en 2008.

Cuando una parte de la ciudadanía atribuye a los inmigrantes la saturación y degradación de ciertos servicios públicos, como la Sanidad o la Educación, no tiene en cuenta que estos servicios deberían aumentar al ritmo de incorporación de nuevos beneficiarios (dos millones de cotizantes extranjeros en 2007) que, además, aportan más de lo que perciben a las arcas públicas

Según la *Encuesta de Población Activa (EPA)*, existe una polarización acusada entre los extranjeros ocupados en función de su origen: mientras el 91% de los no comunitarios trabaja por cuenta ajena, sólo está asalariado el 69% de los comunitarios (entre los españoles es el 79%); el estatus y las condiciones laborales de los trabajadores comunitarios son mejores que los de la población española, en contraposición con los asalariados no comunitarios que se sitúan mayoritariamente en sectores y categorías laborales de inferior calidad, con contratación temporal en el 62% de los casos (doble que los autóctonos) y, por lo general, con retribuciones más bajas. La situación es aún más grave para africanos y europeos no comunitarios (incluidos en este caso hasta 2006 rumanos y búlgaros), y algo mejor para latinoamericanos y, especialmente, asiáticos.

El trabajo de personas inmigradas ha facilitado a veces la promoción laboral de la población nativa, destacando en este sentido el gran número de mujeres extranjeras (más de 300.000, según la EPA) que dejan de cuidar a sus familias para ir a realizar el trabajo reproductivo de los hogares españoles, lo que permite a las mujeres autóctonas incorporarse al mercado laboral remunerado sin modificar de forma sustantiva los roles dentro del hogar y facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar.

El impacto de la inmigración ha sido también importante en las escuelas e institutos. Por una parte, el alumnado procedente de otros países (608.000 matriculados en el curso 2006-07) ha suplido sólo en parte el enorme descenso de casi millón y medio de alumnos españoles en los últimos quince años, originado por la caída de la natalidad. Por otra parte, la entrada de alumnos extranjeros en las aulas, en proporción muy superior en los centros públicos (8,9% del alumnado) que en los privados (4,2%), ha originado una diversidad social

y cultural que pone en cuestión el modelo homogéneo tradicional y ha dado lugar a una notable controversia en el terreno pedagógico. Las estrategias de atención a la diversidad presentan una gradación que va desde la segregación o la asimilación a la educación intercultural o antirracista, pasando por la compensatoria, la educación para la tolerancia y la promoción del pluralismo cultural. En el plano normativo (leyes, decretos, reglamentos escolares) existe ambigüedad entre el enfoque intercultural –poco desarrollado en la práctica– y el de la educación compensatoria.

En el ámbito religioso, la libertad de culto quedó establecida en la Constitución de 1978 pero, como hecho social, el pluralismo de confesiones ha venido de la mano de la inmigración. El acuerdo entre el Estado español y el Vaticano para los católicos tuvo su réplica en 1992 en los correspondientes acuerdos con las comunidades islámica, evangélica y judía. Sin embargo, estas confesiones encuentran mayores dificultades que la católica para ejercer sus actividades y, sobre todo, son objeto de incompreensión y prejuicios por parte de la población autóctona. En especial, el islam es frecuentemente objeto de sospecha y discriminación al ser identificado con actividades fanáticas y valores opuestos a la cultura occidental, en lugar de partir del respeto y el diálogo entre las diversas religiones, y tratar de construir una cultura de fondo, común para todas, que haga de la diferencia riqueza y no discriminación.

Los prejuicios hacia los inmigrantes alimentan la idea de que constituyen uno de los mayores problemas de la España actual (el cuarto, según los últimos Barómetros mensuales del CIS, después del paro, el terrorismo y la vivienda). En especial, se les acusa del incremento de la inseguridad ciudadana, a lo que contribuyen las informaciones alarmistas o sesgadas de algunos medios de comunicación y de una parte de la clase política. Sin embargo, según el Ministerio del Interior,⁵ el número de delitos por habitante en España ha descendido un 22,7% entre 2002 y 2006, años en los que la inmigración ha crecido un 86,5%, lo que no parece avalar la tesis culpabilizadora. Además, las cifras de extranjeros detenidos por la policía generan confusión, pues incluyen como delincuentes a los acusados de no tener papeles, lo que constituye una falta administrativa pero no un delito⁶ (el 46% de los detenidos en 2005), y a los extranjeros turistas o de paso, normalmente “camellos de la droga” que no residen en España (conjunto estimado en un 40% de los acusados por delito). Lo mismo ocurre con las estadísticas de presos cuando se incluye a los preventivos (sin sentencia dictada) y a los turistas y extranjeros de paso; sin contar ambos grupos, la pro-

⁵ Ver Colectivo Ióe, indicador 1 de la dimensión Seguridad y Justicia del *Barómetro Social de España*. En: www.cip-ecosocial.fuhem.es.

⁶ Sin llegar al extremo italiano, donde el Gobierno pretende convertir en delito la situación de irregularidad, la recientemente aprobada “directiva de la vergüenza” autoriza a los gobiernos a retener en centros de internamiento, que con frecuencia se convierten en sucedáneos de prisiones, a los irregulares que están en trámite de expulsión. No sólo las estadísticas confunden a la opinión pública. Algunos responsables políticos contribuyen lo suyo a difundir una imagen de la inmigración vinculada con la inseguridad.

porción de inmigrados presos se reduce más de la mitad y alcanza una tasa muy próxima a su peso poblacional.

El modelo de ciudadanía a debate

Hasta el año 2000, cuando la proporción de extranjeros en España no llegaba al 3%, tanto las encuestas del CIS como las promovidas por el Parlamento Europeo coincidían en que la mayoría de la población española se mostraba favorable o ambivalente ante la inmigración, siendo menos del 10% los que daban respuestas xenófobas. Según el Eurobarómetro de ese año, España era el tercer país más tolerante de Europa, después de Suecia y Finlandia. Sin embargo, a mediados de la presente década, con una tasa de inmigración tres veces mayor, las encuestas revelan que los intolerantes son más del 30%, superando a los ambivalentes y aproximándose a los tolerantes que siguen siendo, aún, el grupo más numeroso. En opinión de las personas "intolerantes", los inmigrantes no tienen una influencia positiva en la sociedad española y les resulta molesto convivir con ellos, por lo que deberían ser repatriados o aceptados sólo selectivamente y a condición de adaptarse a las costumbres autóctonas (asimilación cultural).

Según las encuestas de opinión, la mayoría de las personas xenófobas presenta un nivel bajo de estudios y de estatus económico, y ve el futuro con poco optimismo. Por su parte, los sectores con mayor cualificación y nivel de renta tienden a adoptar posiciones más tolerantes; su perspectiva familiar y social es más bien optimista, lo que parece repercutir en su valoración favorable de la inmigración. Sin embargo, los estudios de orientación cualitativa, que exploran de forma abierta los discursos sociales, permiten matizar la actitud de la población nativa en torno a la inmigración, que hemos resumido en cuatro posiciones básicas y que dan lugar a otros tantos estatutos de ciudadanía:

- Rechazo xenófobo: desde una profunda desconfianza hacia quienes no comparten la cultura española, su historia y sus tradiciones, se acusa a los inmigrantes de poner en peligro la identidad y costumbres locales, sobre todo si son muchos y están fuera de control. Son partidarios de cerrar las fronteras, repatriar a los indocumentados y recluir a los que se queden en espacios separados y nichos laborales ("España es de los españoles"). El estatuto es de ciudadanía denegada.
- Inserción subalterna: desde el principio de la preferencia nacional, la inmigración sólo queda legitimada en la medida en que beneficie a los intereses de la población autóctona y se ajuste a las normas y costumbres vigentes en el país. En el plano laboral deben aceptar los trabajos que los españoles reserven para ellos (economía complementaria). En estas condiciones se acepta la presencia de inmigrantes, pero con un estatuto de ciudadanía subordinada o de segunda clase ("primero los españoles").

- Integración competitiva: desde la defensa del estado liberal-democrático, se apoya la España plural, que no sólo tiene diferentes nacionalidades autonómicas sino una población inmigrada con múltiples expresiones culturales. Todos los ciudadanos, nativos o extranjeros, deben tener los mismos derechos para desenvolverse en la vida de acuerdo con sus propios méritos y competir en el mercado laboral con igualdad de trato (“no gente de primera categoría y gente de segunda categoría”), es decir, un estatuto de ciudadanía equiparada.
- Proyección instituyente: desde el reconocimiento del poder creador que asiste a los colectivos extranjeros como protagonistas de la vida social, se reclama su contribución para salir al paso de los problemas de desigualdad económica y discriminación cultural, tanto en el plano nacional como de las relaciones Norte-Sur. Su propuesta consiste en pasar del individualismo a una ciudadanía activa, intercultural y proyectiva (“hacer las cosas para vivir la democracia”).

Gran número de mujeres extranjeras (más de 300.000, según la EPA) dejan de cuidar a sus familias para ir a realizar el trabajo reproductivo de los hogares españoles, lo que permite a las mujeres autóctonas incorporarse al mercado laboral remunerado sin modificar de forma sustantiva los roles dentro del hogar

Se ha comprobado que las opiniones sobre la población inmigrada dependen en buena parte de cómo se percibe la situación de España lo que, a su vez, está estrechamente ligado con la posición socioeconómica de los sujetos. Desde los sectores mejor situados en la escala social, España es un país con buenas oportunidades para la promoción personal y que permite una buena calidad de vida, pese a encontrarse sometido a fuertes tensiones de crecimiento debido a la intensidad de su crecimiento económico y demográfico (flujo inmigratorio). A su vez, desde la perspectiva de los sectores peor situados en la escala social, el actual modelo de crecimiento está suponiendo un endurecimiento de sus condiciones de vida y de trabajo (tensiones en la convivencia, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, problemas en el acceso a la vivienda, inseguridad ciudadana, deterioro de los servicios públicos, etc.) que se acentúa con la llegada numerosa de inmigrantes con los que se comparten espacios de residencia y de trabajo, y a los que muchos culpan del deterioro de la situación.

De este modo, a las diferencias de lugar de nacimiento (que crean la distinción nativo/inmigrado) y de nacionalidad (español/extranjero) se superponen en la vida cotidiana las diferencias de posición económica, pero también de adscripción cultural y religiosa, pertenencia étnica, género, etc. Los partidarios de una convivencia igualitaria relativizan estas

diferencias y resaltan lo que de común tienen todas las personas como base de una sociedad cohesionada y un intercambio enriquecedor; sin embargo, otras veces las diferencias son vividas en confrontación y desde una relación de poder entre las partes, con un polo discriminante y un polo discriminado. En nuestro caso, muchos inmigrantes del Sur han padecido las barreras jurídicas de la política de inmigración española y tienen que enfrentarse a los prejuicios ideológicos de la opinión pública con respecto a las personas de otras etnias, culturas y procedencias; en cuanto trabajadores se ubican mayoritariamente en empleos precarios y marginales, sobre todo en su primera fase de estancia en España; y si a ello unen la condición de mujer añaden todavía otro motivo de probable discriminación.

Sin embargo, puede ser una trampa identificar el motivo de rechazo con tales diferencias, ya que con frecuencia tal correlación no se da. Más bien, la relación tiene lugar a la inversa: son las relaciones preexistentes de poder y desigualdad las que desencadenan un clima de confrontación y utilizan las diferencias como excusa para ejercer el dominio o mantener los privilegios de unos grupos respecto de otros, ya se trate de la supuesta superioridad de la raza blanca, la cultura occidental o el sexo masculino, de la jerarquización política y económica en las relaciones Norte-Sur, o de la defensa a ultranza de los propios privilegios nacionales (aunque sean los del “pobre blanco”) frente a los inmigrantes llegados de fuera.

**Entrevista con Federico Aguilera Klink sobre la
nueva economía del agua**

Salvador López Arnal

107

Entrevista

Entrevista con Federico Aguilera Klink sobre la nueva economía del agua

“Es necesario regenerar la democracia e insistir en que la legitimidad democrática no se obtiene sólo por las urnas, sino por la manera de tomar las decisiones”

Federico Aguilera Klink es catedrático de economía aplicada en la Universidad de La Laguna. Fue Premio Nacional de Economía y Medio ambiente “Lucas Mallada” en 2004. Sus ámbitos de investigación son la economía del agua, la economía ecológica y la calidad de las decisiones y problemas ambientales. Entre sus publicaciones más recientes cabe citar Los mercados del agua en Tenerife, Bakeaz, Bilbao, 2002 (en colaboración con Miguel Sánchez Padrón); Los costes sociales de la empresa privada (antología de K. W. Kapp), La Catarata (colección Pensamiento crítico), 2006, y Calidad de la democracia y protección ambiental en Canarias, Fundación César Manrique, 2006. Su último libro, La nueva economía del agua, constituye el primer título de la nueva colección “economía crítica & ecologismo social”, que el Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) impulsa en colaboración con la editorial La Catarata.

Salvador López Arnal es profesor de la UNED y del Instituto Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Pregunta: En tu último libro, *La nueva economía del agua*, hablas del agua como un activo económico, ecológico y social. ¿Podrías explicar las características centrales de esta aproximación “trinitaria”?

Respuesta: Lo que intento es salir de una perspectiva en la que sólo cuenta una dimensión del agua como algo que es necesario para que funcionen las actividades económicas, y los ríos se consideran tubos que canalizan esa agua evitando que se pierda en el mar gracias a los embalses.

Por eso insisto en una mirada más sistémica y multidimensional en la que el agua cumple diferentes funciones que, además de ser necesarias, tienen que ser compatibles.

P: ¿Y qué funciones son esas que han de ser compatibles entre sí?

R: Los ríos tienen que seguir siendo ríos y cumplir sus funciones ambientales o de soporte de la vida hasta llegar al mar y cerrar el ciclo del agua. A su vez, el ver y sentir los ríos como ríos es fundamental para un psiquismo sano y para no perder, como señalaba Goethe hace dos siglos, la conciencia de nuestra dependencia de la naturaleza. Ser conscientes de esta dependencia de la naturaleza y, de manera más amplia, ser realmente conscientes de nuestras acciones es algo, como señala Jung, necesario para la supervivencia de la humanidad.

Por otro lado, mientras el agua tenga una calidad determinada puede seguir siendo un recurso y cumplir esas funciones entre las que hay que incluir la de factor de producción entendido no sólo como una cantidad física, sino como el derecho a llevar a cabo una lista limitada de actividades y el deber de devolverla o retornarla en las condiciones necesarias para evitar el deterioro del río, del acuífero o del mar, es decir, para mantener el buen estado ecológico, tal y como señala la Directiva Marco Europea del Agua.

P: ¿En qué consistiría la nueva cultura del agua? ¿En que consistía la vieja cultura del agua?

R: Hay tres aspectos que permiten establecer una distinción adecuada entre ambas sin extenderse demasiado. La vieja cultura del agua parte de que la escasez es siempre física, por lo que siempre es necesario construir más embalses y trasvases (o plantas desalinizadoras de agua de mar), siendo la toma de decisiones habitualmente autoritaria, aunque los decisores hayan sido elegidos en elecciones, digamos, democráticas. Por el contrario, la nueva cultura del agua asume que la escasez está socialmente construida, lo que significa que no hay gestión del agua sin gestión del territorio, y que la toma de decisiones tiene que ser realmente democrática, basada en el debate público, y en contar con la gente que, habitualmente, tiene mucho que decir. De nuevo, para la vieja cultura, un río es un tubo, y para la nueva, un organismo vivo integrado en su cuenca que tiene que llegar al mar.

P: Pero esa consideración de que siempre es necesario construir más embalses y trasvases o más plantas desalinizadoras, en ocasiones no infrecuentes, es defendida por los propios agricultores, por esa gente a la que te referías y que tiene mucho que decir.

R: Sí y no. Siempre hay que contar con la gente, pero eso significa que debatir y argumentar es clave para evitar manipulaciones. En la actualidad se sigue utilizando al pobre agricultor como excusa para beneficiar a los grandes inversores agrarios y a los cazaprimas de subvenciones, pero ya no hay pobres agricultores. Y si los hubiera, habría que diseñar políticas agrarias para ellos siempre que se reconviertan a la agricultura ecológica que, por cierto, es la que menos ayudas recibe, y la que genera un impacto ambiental más bajo y unos beneficios sociales cada vez más elevados, al evitar el uso de pesticidas y no contaminar aguas y suelos.

P: En el primer capítulo del libro sostienes que la escasez de agua no es de carácter físico sino que está socialmente condicionada. ¿Qué condicionamientos son esos? ¿Acaso afirmas que no hay escasez física de agua en algunas zonas del país?

R: Inicialmente la escasez puede ser física, es decir, que llueve poco, como ocurre en Lanzarote o Almería. El problema es que esa escasez puede llegar a convertirse en una escasez socialmente construida o condicionada si decidimos que no hay límite a la agricultura o a la construcción de urbanizaciones y hoteles. Así pues, da igual que construyamos embalses, trasvases o plantas desalinizadoras. Nunca será suficiente. Acabaremos con los ríos y transformaremos la escasez física de agua en escasez socialmente construida y en escasez de energía. No olvidemos que las desalinizadoras funcionan con petróleo. Lo mismo puede ocurrir en zonas lluviosas si se trata de implantar un uso del territorio que genere una necesidad insaciable del agua.

P: Y esos condicionamientos sociales a los que haces referencia, ¿ocultan intereses de clase o son más bien ensoñaciones sociales de carácter general?

R: Pueden ocultar intereses de clase y también de lógica capitalista y económica de sistema cerrado a la que no le importa en absoluto ni la naturaleza ni las personas, por lo que no se hacen responsables de los costes que generan. La mayoría de los agricultores cree, o se le ha hecho creer, que tiene derecho a recibir agua, viva donde viva. Creo que hay una gran parte de inconsciencia en esa actitud ante el agua que no es ajena a manipulaciones políticas como el famoso eslogan de «Agua para todos».

P: ¿Qué papel debería jugar la ciencia en la toma de decisiones en este ámbito? Tú sostienes que no cuestionas su necesidad sino el papel que juega. ¿Cuál debería ser entonces su papel?

R: La buena ciencia nos tendría que ayudar a entender cuál es el problema, lo que se supone que nos permitiría vislumbrar soluciones adecuadas, pero la toma de decisiones en este tipo de problemas no es ajena a la política. Por eso insisto en el debate público y en procedimientos democráticos que permitan a la gente participar realmente y de manera vinculante. Si no es así, lo que ocurre es que las decisiones políticas se transforman en decisiones arbitrarias, sin argumentos adecuados y que benefician a determinados intereses sin resolver razonablemente el problema, pues no es lo que les interesa. De hecho es lo que lleva tiempo ocurriendo con el agua, pues se ha convertido, desde hace décadas, en una excusa para construir costosas e innecesarias obras públicas que sólo benefician a las eléctricas, a las grandes constructoras y a destacados grupos empresariales agrarios.

P: Usas en varios apartados del ensayo el concepto de democracia deliberativa. ¿Qué tipo de democracia es ésta? ¿Es opuesta o complementaria a la democracia electoral?

R: Entiendo que la democracia se está reduciendo, cada vez más, a celebrar elecciones de vez en cuando. Es lo que yo llamo ¡vota y calla! Frente a esta situación es necesario regenerar la democracia e insistir en que la legitimidad democrática no se obtiene sólo por las urnas, sino por la manera de tomar las decisiones. Los políticos que toman decisiones arbitrarias, es decir, sin contar con la gente, sin argumentar y razonar adecuadamente, sin someterse a debates públicos en los que expliquen qué problemas quieren resolver y cómo y sin aceptar que puede haber otras formas de plantear y diagnosticar problemas y ofrecer soluciones, carecen de la legitimidad democrática de comportamiento.

Desde mi punto de vista, la democracia electoral es sólo un componente, pero no el más destacado de la democracia. Sobre todo si se tiene en cuenta que no sabemos cómo se financian los partidos, que las leyes electorales distan mucho de darle el mismo peso a cada voto, y que los programas electorales son papel mojado.

P: En el tercer capítulo del libro hablas de gestiones autoritarias y gestiones democráticas del agua. ¿Cuándo una gestión es autoritaria? ¿Cómo debería ser una gestión democrática del agua? ¿Conoces alguna experiencia que pudiera ser calificada así?

R: Una decisión autoritaria es aquella que da la solución antes de definir de manera argumentada cuál es el problema que se quiere resolver, a ver si cuela. Esto suele pasar con los megaproyectos, pero no sólo con ellos. Ahí tenemos los diferentes proyectos de trasvases del Ebro, entre otros. Luego se trata de legitimar esa solución como fruto de un trabajo experto

que, habitualmente, no es nada más que un encargo a la carta. Si, finalmente, la gente rechaza esa solución porque el problema no existe tal y como es definido, se suele recurrir a la declaración de interés público para acabar cuanto antes, a la vez que se intimida y descalifica a los que se oponen a esos proyectos. Esta es la pauta habitual de una decisión autoritaria.

P: ¿Y en cuanto a la experiencia que te pedía?

R: Lo lamento pero no conozco casos de gestión o decisión democrática. Estamos en un momento en el que domina un uso confuso y vacío del lenguaje en el que todo disparate se adorna de términos como sostenible, ecológico o participativo. Ahora, disparates como la Expo de Zaragoza se autocalifican en esa línea cuando realmente no tienen nada que ver con ello. Y cualquier Ayuntamiento o Gobierno Autónomo tiene su gabinete u oficina de participación ciudadana sin que la gente pueda realmente participar. No es nada más que una tomadura de pelo.

La gestión democrática tendría que empezar por financiar y facilitar la participación pública, durante el tiempo adecuado, para compartir el diagnóstico sobre el problema a resolver. Después vendría el estudio de las alternativas, también con la gente. En la actualidad, los políticos sólo aceptan un cierto debate si la gente es capaz de movilizarse.

P: ¿La Expo aragonesa un disparate? ¿Puedes precisar un poco tu comentario?

R: La Expo no tiene nada que ver con la gestión sostenible del agua. ¡Con todo lo que hay que hacer en España para tomarse en serio la gestión del agua y del territorio y sólo se les ocurre una Feria del Agua! Son capaces de gastarse cientos de millones de euros en farándula del agua con tal de no abordar los problemas que hay que resolver. Mientras tanto, no se incentiva el cambio de prácticas agrarias, se lamenta la crisis del ladrillo, y el gobierno lanza un plan de 20.000 millones de euros para limpiar los ríos que, así, se podrán seguir ensuciando anualmente para cumplir con la Directiva Marco. Todo esto no es nada más que otro megaproyecto sin sentido ambiental y financiado con fondos públicos, pero seguro que montarán más Expos sostenibles en los próximos años.

P: ¿Qué papel crees que debería jugar la Administración pública en la gestión del agua en España? ¿Abogas por un modelo unitario, federal, confederal?

R: El papel que apenas ha jugado hasta ahora. José Luis Moreu, Catedrático de Derecho de la Universidad de Zaragoza, lleva tiempo diciendo que a la administración públi-

ca del agua en España nunca se le ha permitido ejercer esa administración, pues ha estado legalmente maniatada en beneficio de los grandes intereses agrarios. Esa administración hidráulica es por cuencas, y pienso que debería seguir siendo así, pero, de nuevo, con argumentos y participación, no ceremonial. Hace unos meses, Jerónimo Blasco, actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, reconoció en una tribuna del agua, organizada con motivo de la Expo de Zaragoza, que la cantidad de agua que el Estatuto de Autonomía de Aragón se blindaba se había calculado sin criterios, simplemente "a ojo". No hubo ningún argumento ni ninguna estimación razonada previamente, se puso una cantidad como se podía haber puesto diez veces menos o mucho más. Esto es lo que hay.

En cuanto al modelo, sinceramente me da igual el que sea si, al final, no se exigen argumentos razonados, pues vale todo. Incluso la unidad de cuenca carece de sentido si no se hace una gestión razonada en cada una. En este sentido, me preocupa mucho ver que cada vez hay más agricultores que están deseando vender el agua pública que tienen en concesión porque les resulta más rentable que cultivar, cuando lo que tendrían que hacer es devolver la concesión a la Confederación Hidrográfica correspondiente. Aunque quizás lo que ocurre es que hace ya muchos años que no cultivan y el gobierno no quiere actualizar las concesiones (¿dónde está el Programa Alberca que las iba a actualizar?) para no tener conflictos. Así no hay nada que hacer. Seguimos en el España va bien.

P: Se ha discutido estos meses en torno al trasvase del Ebro (minitransvase, se ha dicho; movimiento de aguas y eufemismos similares) para paliar la actual sequía en Catalunya. ¿Qué opinión te merece la opción y las formas en que ha sido tomada?

R: La opción me parece errónea y muy costosa. Narcis Prat, Catedrático de Ecología de la Universidad de Barcelona, ha planteado alternativas más razonables como la adquisición temporal de agua a agricultores próximos a Barcelona. Pero no se le ha escuchado. Tampoco se ha escuchado a la Plataforma en Defensa del Ebro en Tortosa. Por eso entiendo que esta decisión es un buen ejemplo de decisión autoritaria. Y no sólo eso. Se ha hecho público que Cristina Narbona presentó un Informe en el que argumentaba en contra de este minitransvase, informe que no se ha difundido. Así es que hay dudas más que razonables sobre la necesidad de esta opción y sus posibles beneficiarios.

P: ¿Y por qué crees que no se ha difundido ese informe? ¿Crees que puede tener algo que ver esa posición de Narbona con su no presencia en el nuevo gobierno?

R: No lo sé. Narbona ha sido la única persona que ha llegado al Ministerio de Medio Ambiente sabiendo del tema. Otra cosa es lo que haya hecho o le hayan dejado hacer.

Todos los demás han llegado sin saber nada y con el objetivo claro de que el Medio Ambiente no obstaculizase a la economía y al crecimiento del PIB, como pasa con las Consejerías autonómicas del ramo. De todas maneras, creo que un Ministerio o una Consejería de Medio Ambiente carecen de competencias reales, es decir, son adornos en un contexto en el que el resto de los Ministerios están obsesionados por el crecimiento económico y por el PIB que, como dice Mishan, es un indicador de velocidad pero no de dirección. Así pues, ¿qué puede hacer un Ministerio de Medio Ambiente cuando lo que hay que hacer es cambiar la economía y empezar a moverse hacia una economía sostenible o compatible con el medio ambiente? Muy poco, sólo hacer creer a la gente que estas cuestiones les interesa.

P: ¿Observas diferencias destacables entre la gestión hidráulica de los gobiernos del PP y la que ha llevado el PSOE en estos últimos años?

R: No demasiadas. Es cierto que hay una muy importante que es la derogación “temporal” del trasvase del Ebro. Aparte de ella, poco se ha hecho para poner orden en cada cuenca. Se mantiene el Anexo II de obras hidráulicas en el decreto de derogación y, además, se ha incluido algún embalse más como el de Caleao en Asturias que carece de argumentos. Ya sé que no es fácil cambiar la política hidráulica en poco tiempo, pero muchos esperábamos que la declaración realizada por Zapatero en el discurso de investidura en 2004 sobre la aplicación de una nueva política del agua fuera en serio, aunque suene a ingenuidad. Sin embargo se cesó a Helena Caballero que estaba tratando de poner cierto orden en la Cuenca del Duero. Por otro lado, creo que la orientación del nuevo Ministerio da a entender que va a haber poca gestión del agua y posiblemente se desande lo andado.

P: En el último capítulo de tu libro, estableces un paralelismo entre la transición política española y la necesidad de hacer esta transición, aún pendiente, en el tema del agua. ¿Crees que es posible? ¿Hay fuerzas políticas, ciudadanas que abonen esta perspectiva? ¿No es más bien tu propuesta una ensoñación, un hermoso deseo?

R: Creo que es posible pero muy difícil, obviamente. Aunque no lo veo como una ensoñación. Estoy convencido de que esa transición es necesaria. De hecho, la auténtica ensoñación es pensar que podemos seguir creciendo sin límite y seguir construyendo más embalses y pantanos. Si no asumimos esa transición, el cambio climático y el cenit del petróleo nos harán bajar de las nubes y poner los pies en el suelo, lo que podrá generar una transición conflictiva y dolorosa. Tiempo al tiempo.

P: Hablas en varios momentos de la dictadura de las constructoras. ¿Qué dictadura es esa? ¿Dónde ejerce su dominio? ¿No tienen contrapesos?

R: Esa es una expresión muy lúcida del periodista Carlos de Prada que titula así un artículo suyo y que hace un análisis muy claro de la relación entre constructoras y decisiones políticas. Las constructoras y SEOPAN, como acabamos de constatar hace poco, tienen un enorme poder para imponer decisiones y reglas de juego. No es casual que el PP presente su Plan Hidrológico Nacional en el año 2000 en la sede de SEOPAN en Murcia, aunque a mí me parece una enorme torpeza que agradezco. Tampoco es casual que Zapatero presente el Plan Especial de Infraestructuras y Transporte en La Moncloa invitando a la plana mayor de SEOPAN y a los sindicatos. Son gestos e indicadores muy simbólicos sobre quién tiene el poder que evitan perder el tiempo buscando conexiones entre empresarios y políticos.

P: El mercado, en general, no sale bien parado en su libro. Sin embargo, sigue siendo un dios intocable no sólo para las grandes corporaciones, sino también para muchos políticos y numerosos economistas. ¿Qué tienes en contra del mercado como método de asignación de recursos? ¿Por qué crees que sigue planeando *urbi et orbe* esta divinización?

R: A mí me parece que más que salir mal parado lo que hago es tratar de ponerlo en su sitio, es decir, mostrar que no es nada más que un mecanismo cuyo funcionamiento y resultados dependen del marco institucional. Otra cosa es que a los estudiantes de economía se les enseñe, erróneamente, que el mercado es sólo la interacción entre oferta y demanda sin hablarles de dicho marco. Por eso me voy a Adam Smith. Porque él sí tenía muy claro qué era y es un mercado, y cómo los empresarios tienen interés en ampliar el mercado (los consumidores potenciales) pero sin ampliar la competencia. A Smith se le ha despachado muy rápido como el de la mano invisible, pero es un observador muy lúcido del poder, de lo que es el mercado, y de cómo los grandes empresarios pueden imponer sus reglas en contra de la sociedad en nombre del hipotético mercado, tal y como ocurre actualmente, pues se habla del mercado como algo impersonal, "el mercado decide"- sin mencionarse que, con frecuencia, hay poderosos intereses manipulando los mercados e imponiendo reglas de juego que no son neutrales, mientras se anima a la gente a competir olvidando que la competencia entre desiguales genera el abuso. Hay un dibujo de El Roto que expresa bien toda esta confusión deliberada sobre el mercado. "Todo lo que no es mercado, es superstición", dice uno de sus personajes. Y ese es, exactamente, el papel legitimador que se le quiere dar al mercado en un contexto en el que el mercado brilla por su ausencia y estamos en manos de políticos y empresarios desalmados.

P: ¿Crees que la ciudadanía española debería pagar más por un bien tan esencial? Hay gentes que sostienen que sólo se valora lo que cuesta, por lo tanto? ¿Es esa tu opinión?

R: Entiendo que el agua requiere diferentes tarificaciones en diferentes usos, incluyendo el coste de la depuración, no sólo en los usos urbanos, sino en los agrícolas e industriales. Esto nos llevaría a una aplicación razonable de la Directiva Marco Europea del Agua en el sentido de cambiar las prácticas agrícolas, con independencia de mejorar las redes de distribución y las prácticas de riego, orientando esta actividad hacia la agricultura ecológica, y cambiando también los procesos industriales de acuerdo con el principio de precaución.

En cualquier caso, en los usos urbanos, que es donde parece que hay más polémica sobre la tarificación, es necesario aclarar que, habitualmente, el problema no reside en un consumo excesivo, sino en las pérdidas en las redes urbanas. No hay que olvidar que el uso urbano puede ser considerado, tal y como ocurre en Arizona por ley, como uso no consuntivo, en el sentido de que esta fracción de agua tiene que regenerarse y volver a ser usada para recargar el acuífero.

Ahora bien, sigue existiendo un serio problema, como el que tú mencionas, sobre no valorar aquello por lo que no se paga. Yo pregunto a mis estudiantes cuántos conocen el volumen de agua que usan en casa. La mayoría (90 %) no lo sabe. Luego les pregunto cuánto pagan por el agua al mes en casa y tampoco lo saben. Finalmente les pregunto cuánto pagan de teléfono móvil y todos lo saben. Conclusión. El agua no es ni una prioridad ni un problema para ellos. Este es un serio problema, desde mi punto de vista, que hay que valorar, ya que da a entender que no sabemos en qué planeta vivimos. Pero además, hay estimaciones que indican que ya gastamos más dinero en agua embotellada que en el agua de grifo, por lo que la polémica sobre si pagar o no parece que está fuera de lugar en la mayoría de los casos, pues ya se está pagando con el agravante de que un elevado precio no está haciendo disminuir el consumo, pues la gente percibe que compra agua de calidad que está relacionada con la salud.

P: ¿Y por qué crees que se consume tanta agua embotellada? ¿Es una adquisición necesaria? Por lo demás, ¿las pérdidas de agua en las redes urbanas son inevitables? Si no lo fueran, ¿por qué no se asignan más esfuerzos a esa tarea tan necesaria?

R: Porque se nos hace creer que no es posible mejorar la calidad del agua que sale por el grifo a un coste razonable, algo que es falso. Por otro lado, las empresas de distribución urbana de agua suelen tener intereses en las empresas que venden agua embotellada, por lo que les beneficia directamente no mejorar la calidad del agua distribuida.

En cuanto a las pérdidas en las redes urbanas, hay que decir que se pueden disminuir sin problemas con costes que, además, se pueden asumir sin dificultades. ¿Cómo no se van a poder repercutir los costes de manera razonable si el metro cúbico de agua embotellada supera los 300 euros por metro cúbico? Por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife perdía casi el 50 % del agua en sus redes en 1975. La gerencia de la empresa municipal de aguas decidió reparar las redes y, en sólo seis años, se consiguió bajar las pérdidas al 10 %. Es más, actualmente, Santa Cruz usa menos agua, a pesar del crecimiento demográfico, que en 1975.

El problema en la mayoría de las ciudades de la península es que no aceptan reparar las redes porque les resulta caro si se compara con el coste del agua que se ahorra y que les vende, habitualmente, la Confederación hidrográfica correspondiente a precios muy bajos. Por eso, antes que aumentarles el suministro alegremente, hay que obligar a las ciudades a mejorar las redes de distribución, aunque les parezca caro, puesto que el coste real que tienen que tener en cuenta para calcular la rentabilidad de estas reparaciones no es el precio al que se les vende el agua sino el coste de construir nuevos embalses y trasvases. Lo que ocurre es que como esa construcción corre a cargo del Estado, ese coste no se tiene en cuenta por los responsables urbanos del abastecimiento de agua.

P: El presentador del libro, Francisco Puche Vergara, recuerda unas palabras tuyas de 1971 que hablan de la tarea de convencer a la gente de la necesidad de un cambio radical en la manera habitual de observar los acontecimientos económicos, presuponiendo qué ideas que parecen estar condenadas inicialmente a la impotencia política puede calar hondo en la ciudadanía. ¿Sigues defendiendo esta concepción o crees que el actual ruido desinformativo ha generado más barreras, que la dificultad es mucho mayor?

R: Paco Puche escribe que esas palabras son de Mishan, aunque yo las utilizo con frecuencia. Mishan es un economista inglés, autor de *Los costes del desarrollo económico*, un libro de gran actualidad. De todas maneras, sigo pensando como Mishan. Ese es el papel de un profesor de economía. Yo explico Economía Ecológica y Economía del agua y no le veo sentido a ir a clase a repetir los cuatro tópicos de una economía que no usa recursos naturales ni genera residuos (sólo ocasionalmente externalidades), es decir, que ignora las leyes físicas y el funcionamiento de los ecosistemas. En cuanto al agua, no considero honesto intelectualmente enseñar que todo se reduce a que hay un desequilibrio espacio-temporal en las precipitaciones en la península ibérica que se resuelve con más embalses y trasvases. Se supone que enseñar economía es enseñar a pensar por cuenta propia repensando conceptos.

Diálogo entre Andoni García y Jaime Lillo
La crisis mundial de los alimentos. Causas,
consecuencias y posibles soluciones

Mónica Lara del Vigo

119

Diálogo

MÓNICA LARA DEL VIGO

La crisis mundial de los alimentos. Causas, consecuencias y posibles soluciones

Diálogo entre Andoni García y Jaime Lillo

La isla japonesa de Hakkaido acogió, entre el 7 y el 9 de julio, la última cumbre del G-8. Los líderes de los países más ricos abordaron, entre otros temas, la crisis mundial de los alimentos. Antes, la cumbre de junio de la FAO giró en torno al mismo asunto. En esa cita, el secretario general de la ONU, Bang Ki-Moon, afirmó la necesidad de duplicar la producción alimentaria para 2030. Sin embargo, muchas organizaciones civiles insisten en que hay suficiente comida para alimentar a todo el planeta, y en que la solución a la crisis pasa por un cambio del modelo de agricultura industrial y por la recuperación del concepto de soberanía alimentaria. ¿Cuál es la receta para salir de la actual situación? ¿Qué ha motivado el alza de los precios de los alimentos? ¿Qué papel juega la PAC europea? ¿Qué soluciones se vislumbran para evitar otras crisis en el futuro? Desde diferentes perspectivas, Jaime Lillo, subdirector de la Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Agricultura, y Andoni García, agricultor y miembro de la Ejecutiva del sindicato agrario COAG y de Vía Campesina, debaten acerca de las causas de la crisis y proponen diferentes vías para paliar sus consecuencias.

Mónica Lara: En el último año, los precios globales de alimentos como el maíz, el trigo, el aceite, el arroz o el azúcar se han duplicado, provocando hambrunas y protestas en muchos países. ¿A qué se debe este encarecimiento?

Andoni García: Las causas vienen motivadas por lo que está significando el desmantelamiento de las políticas públicas sobre la agricultura y la alimentación. Se está permitiendo, a través de la liberalización del comercio, que haya una especulación directa sobre los alimentos. Cuando el Deutsche Bank dice a sus clientes que inviertan en la bolsa de Nueva York en el mercado de futuros de los cereales, significa que existe una especulación, y que

Mónica Lara del Vigo es periodista y máster en Relaciones Internacionales

alguien está almacenando de forma privada alimentos básicos en todo el mundo. Eso provoca la subida de los precios.

Jaime Lillo: Además de lo que has señalado y de la incidencia de las políticas, todos los estudios del Banco Mundial (BM) y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) coinciden al enumerar las causas de la crisis. Donde no se ponen de acuerdo es en cuánto pesa cada una. Es evidente que hay un incremento de la demanda por un aumento de la población y, sobre todo, por unos cambios en las pautas de consumo de los países en vías de desarrollo, que han pasado a demandar más carne, más cereales y más productos de alimentación animal. Esto ha coincidido con un par de malos años climatológicos en muchas regiones productoras; sea una consecuencia del cambio climático o no, el hecho es que ha habido malas cosechas. A ello hay que sumar la subida de los precios del petróleo, que ha incrementado mucho los insumos de la agricultura. Al mismo tiempo, ha habido una crisis en los mercados financieros y un exceso de liquidez que se ha refugiado en los mercados de materias primas, fomentando probablemente una tendencia alcista en los precios. Es decir, se ha dado una confluencia de factores. En mi opinión, el incremento de la demanda, principalmente de China e India, y el aumento de los precios del petróleo son los dos factores que más han pesado en esta crisis. Respecto a los biocombustibles, los estudios no se ponen de acuerdo en su incidencia.

A. G.: No coincido con algunas cuestiones. Creo que se está destruyendo la agricultura familiar y campesina en todo el mundo, también en Europa, y que se está impulsando un tipo de agricultura industrial dirigida a la especulación, a los mercados. Este modelo ignora que la agricultura es un elemento básico para la alimentación humana. Cuando se analizan las demandas de China e India, no hay datos contundentes que apunten a que éste es el motivo del alza de los precios, sobre todo porque incluso China está exportando cereales. Los cambios en la demanda no justifican la crisis alimentaria. Los agrocombustibles, especialmente los que produce EEUU, sí están afectando. La crisis del petróleo también. Una cosa está clara: la agricultura familiar es la que mejor garantiza las cantidades en la producción.

J. L.: Puedo compartir que la agricultura familiar es un modelo a seguir, pero la situación actual es, en términos globales, de oferta y demanda. Otra cosa es cómo produces y dónde te abasteces, que es parte de la solución. Pero, al leer los datos del Consejo Internacional de Cereales, compruebas que la demanda crece más que la oferta, y que los excedentes se han ido reduciendo. Eso ha dado una tensión al mercado, a la que se ha añadido la parte del petróleo, las noticias de los biocombustibles, el exceso de liquidez en los mercados financieros... No hay acuerdo en torno a cuánto pesa cada cosa, pero lo cierto es que nadie había previsto esta explosión de precios. Independientemente de cuál sea el modelo, si queremos que las causas del hambre sigan siendo otras distintas a la escasez, hay que aumentar la producción agraria.

M. L.: ¿Qué papel juegan exactamente los agrocombustibles en el alza de los precios? Bruselas rechaza que su fomento esté repercutiendo en la escasez y en el consiguiente encarecimiento, pero organizaciones ecologistas de todo el mundo sostienen lo contrario. ¿Hay que apostar por los agrocombustibles o no?

J. L.: Por un lado está el problema de la crisis alimentaria y el peso que pueda tener en ella la promoción de biocombustibles. En este aspecto, hay mucha diferencia entre EEUU y Brasil, que son los principales productores de biocombustibles (fundamentalmente etanol a partir del maíz y la caña de azúcar), y la Unión Europea, donde prácticamente es insignificante lo que se destina a biocombustibles. Pero, al mismo tiempo, existe un reto: las consecuencias del cambio climático y del calentamiento del planeta. Europa, además, sufre una fuerte dependencia energética y ha asumido un compromiso de fomentar las energías renovables, entre ellas los biocombustibles. Tanto el Consejo Europeo como la Comisión inciden en que estamos en una fase de investigación y desarrollo para que los agrocombustibles sean de segunda generación y no compitan con la alimentación. Ahí se está abriendo una ventana de oportunidades a la agricultura y a la gestión de los recursos naturales. Lo primero es alimentar a la población, pero existen posibilidades que es oportuno explorar para desarrollar energías alternativas que respondan al cambio climático.

M. L.: ¿Son entonces una solución para luchar contra el cambio climático, fomentar las energías renovables y contrarrestar la dependencia energética del petróleo?

J. L.: Sí, siempre y cuando hablemos de biocombustibles de segunda generación, que no se produzcan a partir de materias primas que puedan destinarse a la alimentación. El interés reside principalmente en utilizar materia orgánica que hoy en día se desaprovecha, desde masa forestal de la limpieza de los bosques o de las podas, hasta subproductos urbanos. Eso se está investigando y no hay que cerrar la puerta.

M. L.: ¿Pero tienen los agrocombustibles un peso en el alza de los precios?

A. G.: Sí. Una Europa dependiente de las importaciones de soja y maíz ha generado un incremento de precios para la alimentación animal. La Unión Europea tiene acuerdos con EEUU que todavía le impiden desarrollar ciertos cultivos y le obligan a importar determinados productos. En este sentido, Europa es dependiente. Y es ilógico cómo se ha planteado el tema de los biocombustibles en el ámbito europeo. Bien, ahora hablamos de biocombustibles de segunda generación, pero la propia Europa decidió que un tanto por ciento importante de energías alternativas procediera de ellos, y no se preguntó si iban a sustituir o no la agricultura para la alimentación. Esto, en un principio, no se planteó. Se está debatiendo ahora debido a la crisis alimentaria.

Los biocombustibles no son una alternativa. El modelo que se impulsa con ellos lleva a la agricultura industrial, y no a una producción sostenible. Incluso es cuestionable su balance energético. Además, son los sustitutos de la agricultura familiar y los agricultores. Si con ellos se persiguiera un modelo sostenible, con un balance energético positivo, y no fueran sustitutivos de la alimentación humana, sí serían una vía, pero esto no es lo que se está haciendo.

J. L.: Es que hoy en Europa apenas se están produciendo biocombustibles. Toda la agricultura española y europea tiene una alta exigencia de sostenibilidad. No se está pensando en cambiar el modelo de agricultura, simplemente constituyen una vía más a explorar. La tecnología actual nos ofrece esas posibilidades, hay otros que las están investigando y Europa quiere que sean una herramienta más en su lucha contra el cambio climático. *A priori*, esto es un objetivo legítimo y defendible, aunque estoy de acuerdo en que deben cumplirse unos requisitos de eficiencia energética, de sostenibilidad, incluso criterios sociales. No es un "sí" a cualquier precio, pero sería erróneo cerrar la puerta a los biocombustibles en la coyuntura actual.

M. L.: ¿Supone un peligro utilizar para su producción tierras que podrían ser destinadas a los cultivos tradicionales?

J. L.: Eso se discutió intensamente en la cumbre de la FAO. Cada uno defiende lo suyo. Los brasileños alegan que los agrocombustibles son una alternativa, y la FAO también los considera una oportunidad para los productores de los países en vías de desarrollo. EEUU ha dedicado buena parte de su maíz a la producción de biocombustibles, pero sigue exportando la misma cantidad, es decir, no ha quitado cereales del mercado internacional sino que ha aumentado sus producciones. Claro que tienen consecuencias sobre el mercado de alimentos, pero ¿muchas o pocas? ¿Son la causa de la crisis alimentaria? Además, cada país tiene legitimidad para defender su modelo y Brasil es muy beligerante en eso. Lo defiende precisamente como una solución a la pobreza rural. Europa, en cambio, no quiere que los agrocombustibles compitan con los alimentos y busca vías alternativas.

A. G.: Vía Campesina tiene presencia en todos los continentes. En Brasil, nuestros campesinos claramente dicen que los biocombustibles están agrediendo a la agricultura y que no suponen ninguna oportunidad. Y Europa no está al margen de lo que se haga en EEUU y Brasil. No puede mirar hacia otro lado porque es actora principal y, en muchos casos, causante directa de lo que está pasando.

M. L.: ¿Qué consecuencias puede tener la crisis alimentaria mundial en términos sociales, económicos y políticos? ¿Cuál va a ser la evolución?

A. G.: No hace falta pensar en lo que va a pasar, sino en lo que ya está pasando. Ahí están los informes de la FAO y de la ONU, la crisis alimentaria es una realidad y hay más bolsas de hambre en el mundo. Si las causas no se abordan, lo previsible es que vayamos a situaciones peores. En la última cumbre de la FAO no se discutió que todas esas políticas de liberalización y globalización, que ponen la agricultura y la alimentación en manos de cuatro multinacionales y de los intereses de la agroexportación, destruyen un modelo de agricultura campesino. La agricultura, como elemento de la alimentación, no puede ser objeto de especulación, sino algo a proteger desde un planteamiento muy claro: que los países tengan capacidad de desarrollar una agricultura que les sirva para alimentarse. No puede ser que a los más pobres se les genere una dependencia total del exterior o que se les obligue a producir para los ricos. A los países menos desarrollados, que ya tenían problemas de hambre, se les ha impuesto que su agricultura se destine a la exportación, no se les ha ayudado a desarrollar un modelo agrícola propio para su alimentación.

J. L.: Sí, hay unas consecuencias inmediatas y son evidentes. Hay un incremento de los precios de los alimentos y eso significa que las poblaciones más vulnerables, aquellas que gastan más proporción de su renta en alimentación, sufrirán mucho más. Los países en vías de desarrollo van a tener dificultades en el acceso a los alimentos, con lo que eso supone también de inestabilidad política. Ante esa situación ha habido una primera respuesta de solidaridad en el ámbito de la ayuda humanitaria. En la cumbre de la FAO, los gobiernos hicieron aportaciones; ésta fue la reacción inmediata, pero a medio y largo plazo la agricultura, además, volverá a contar en las preocupaciones de la sociedad y, consecuentemente, en el panorama político internacional. La ayuda al desarrollo había dejado de lado al sector agrario y ahora volverá a canalizarse hacia él. Todo el mundo está revisando su agricultura bajo el supuesto de que hay que producir más. Es decir, la agricultura recupera su carácter estratégico. Es un sector que no se puede dejar a las libres fuerzas del mercado porque se trata de un producto de primera necesidad.

M. L.: **¿Es cierto que a raíz de esta crisis la agricultura está entrando más en la agenda política?**

A. G.: Sí, porque hay gobiernos a los que les puede desbordar esta situación. Pero Europa no se está replanteando qué política agraria tiene porque aquí la crisis alimentaria no ha generado una situación de hambre. Hoy por hoy, la Comisión mira hacia otro lado y no se plantea la cuestión. Si la receta es volver a impulsar las negociaciones de la OMC, no se abordará el fondo del problema. Si la forma de atajar la crisis es impulsar y apoyar a grandes empresas de la biotecnología y de los transgénicos, habrá problemas mayores.

M. L.: **¿Cuáles son entonces las soluciones? ¿Hay que aumentar la producción de alimentos, tal y como sugirió Bang Ki-Moon en la cumbre de la FAO? ¿O debe impul-**

sarse otro modelo de agricultura a escala planetaria, ya que, como defienden Vía Campesina y otras organizaciones, el planeta dispone de alimentos para toda la población?

J. L.: Todos los informes, que estudian el incremento de la población y la demanda, así como los cambios de tendencia en el consumo, señalan que hay que producir más. Yo comparto esa opinión. Habrá que producir más, se puede producir más y creo que la agricultura tiene capacidad de reaccionar. No es un mensaje catastrofista, simplemente hay que poner los medios para ello. También coincido en que no basta con aumentar la producción. Hasta ahora ha habido alimentos suficientes en el mundo y el número de hambrientos no ha descendido. Pero si a los problemas actuales de distribución y de concentración empresarial les sumamos una escasez de alimentos la situación se agravaría. El primer paso es producir más, aunque también deben desarrollarse políticas agrarias, sobre todo en los países en vías de desarrollo.

En cuanto al modelo de producir para exportar, al que antes hacías referencia, el caso de Haití es paradigmático. Era un país autosuficiente, que con unas políticas proteccionistas podía alimentar a su población. A raíz de un acuerdo de libre comercio y de un contexto de precios baratos empezó a producir para exportar y a comprar cereales a bajo precio. Cuando la situación del mercado cambió, llegó el desabastecimiento. Esto puede preverse y creo que es el momento de desarrollar unas políticas agrarias que permitan cierto abastecimiento regional y cierta seguridad alimentaria.

A. G.: Hay un problema de acceso a los recursos, ésa es una de las raíces del problema. Con el aumento de la población mundial, habrá que pensar en producir más en el futuro, pero si ese incremento no va a destinarse a cubrir las necesidades de alimentación sino a responder a los mercados y a un tipo de economía donde la agricultura forme parte de la especulación, no se abordará el problema. La receta y la clave no están en el aumento de la producción, sino en el acceso a los recursos y en posibilitar nuevas políticas agrarias en las que se retome que la agricultura es un elemento básico.

M. L.: Habláis de la necesidad de desarrollar nuevas políticas agrarias. ¿Cómo tendrían que ser esas políticas?

J. L.: Depende. ¿Dónde? Las políticas agrarias tienen que adaptarse a las situaciones concretas, pero lo cierto es que debe haber cierta protección en la agricultura. Recientemente estuve en un seminario en Marruecos sobre cómo dar una respuesta a la crisis desarrollando una política agraria en todo el Magreb. Para impulsar las producciones locales y mantener un tejido rural estable se necesita una estabilidad de precios y no una

mayor volatilidad, que es a lo que avanzamos. Eso requiere una intervención de las administraciones públicas o de organizaciones agrarias, una matización de los resultados de las fuerzas del mercado. No creo que el mercado sea malo; hay que corregirlo, no eliminarlo. Hay que seguir sus señales en cierta medida, pero también prever unas redes de seguridad que permitan desarrollar las producciones y orientarlas a un abastecimiento de la población. En el Magreb llevan años desarrollando una agricultura intensiva para la exportación con una profunda dependencia en cereales y en ganadería, que es lo que come su población. Ésa no es la solución, tiene que haber un equilibrio. La primera preocupación de los gobiernos debe ser alimentar a su población, y eso tiene que ver también con tener ingresos y poder comprar alimentos fuera, pero hay que tener una estructura productiva básica que, ante una situación de explosión de precios, posibilite al sistema productivo reaccionar.

M. L.: Vía Campesina defiende la soberanía alimentaria como modelo a seguir. ¿En qué consiste? ¿Es compatible con la globalización y las políticas de libre mercado?

A. G.: Tanto Vía Campesina como COAG defienden el planteamiento de soberanía alimentaria alternativo a la globalización. La alimentación y la agricultura no pueden ser objeto de negociación mercantil, porque son un derecho humano. No se trata de anular los mercados, ni mucho menos, porque éstos no son sólo mundiales, también son locales. La soberanía alimentaria responde a otro tipo de modelo de desarrollo diferente al que se está haciendo. Consiste en posibilitar que los países recuperen su capacidad de hacer políticas agrarias y alimentarias, y con ello generen una economía desde lo local, y no dependiente de la agroexportación. Es evidente que el modelo de la globalización ya está mostrando sus consecuencias, y la crisis alimentaria es una de ellas.

La soberanía alimentaria no sólo es aplicable a los países más pobres, también a Europa y EEUU, porque mientras Europa se plantea que su alimentación tiene que producirse fuera, alguien la tendrá que producir, y ese alguien estará renunciando a producir la suya. En este momento, la política agrícola común de la UE (PAC) supone el desmantelamiento de la política agraria en sí misma a favor de la OMC, y Europa está perdiendo los conceptos de soberanía alimentaria y seguridad de abastecimiento. En el plano europeo y español, la soberanía alimentaria significa impulsar unas políticas agrarias que protejan e impulsen un modelo de agricultura familiar que responda a los mercados más cercanos. El tipo de agricultura hacia el que vamos no está hecho para el consumidor más cercano, sino para especular allí donde se pueda, y para que se produzca en cualquier parte del planeta sin tener que respetar la naturaleza, el medio ambiente o los derechos humanos.

Hay países que ya están perdiendo su seguridad alimentaria y de abastecimiento. No sólo Haití, también México con el maíz, Indonesia con la soja... Con las políticas de libera-

lización, los Estados empiezan a depender de determinados modelos industriales que no garantizan las necesidades de alimentos locales. Antes has hablado de Marruecos, cuyo rey es un gran propietario de tierras. Hace cinco años su Gobierno puso a disposición de empresarios holandeses y españoles tierras marroquíes para cultivar. No las cedía para que sus agricultores produjeran, ni mucho menos pensando en sus mercados y necesidades; se trataba de producir para exportar. Esa producción que obtienen empresarios europeos en Marruecos, a saber con qué mano de obra y con qué derechos, son las importaciones de productos que después entran aquí.

Existen dos modelos de desarrollo. En su Constitución, Mali ha situado la soberanía alimentaria como elemento clave de su desarrollo. Su agricultura es para sus necesidades de consumo. Y nadie anula que haya exportación. En Senegal, nuestros compañeros de Vía Campesina nos hablan del impacto de una agricultura industrial que está sustituyendo a los pocos agricultores que había, convirtiéndoles en trabajadores mal pagados que acabarán marchándose si no consiguen mantener su actividad.

J. L.: Lo que has dicho es muy gráfico. Al final, cada Gobierno es soberano para tomar sus decisiones. Has puesto varios ejemplos. Hay gobiernos democráticos que se ocupan de su población y otros que sólo se ocupan de sus ricos, pero eso es un drama que sobrepasa este debate. Hoy por hoy jugamos en un tablero de juego donde los representantes de los distintos pueblos del mundo son los gobiernos.

La agricultura estuvo excluida de las negociaciones agrarias durante mucho tiempo (prácticamente, a partir de la Ronda Uruguay ha comenzado a incorporarse). Hubo una fuerte crítica hace años que consistía en decir que la causa de la pobreza y del hambre eran las políticas agrarias de los países del Norte. Ésa ha sido una de las motivaciones que ha propiciado que la agricultura se inserte en la agenda del comercio internacional y de la OMC. Hoy, al leer los documentos de la actual ronda para el desarrollo se ve que los que se disciplinan son, principalmente, la Unión Europea y EEUU, que están plagados de concesiones a los países en desarrollo. Con todo esto quiero decir que la globalización está ahí, para todos los sectores, y ha habido un llamamiento a que la agricultura no se quede excluida. Pero creo que este sector siempre va a tener un hecho diferencial con cualquier otra actividad económica, porque en este caso hablamos de alimentos de primera necesidad.

Europa ha mantenido tradicionalmente una política agraria fuerte basada en un modelo de agricultura familiar que ha habido que revisar por el contexto. Es legítimo que los países de fuera digan: "Si ustedes me están vendiendo sus servicios de telefonía, sus bancos están aquí y sus empresas también, yo, país en desarrollo, que produzco alimentos, quiero exportárselos a sus mercados, que son los que mejor me los retribuyen". La respuesta ha sido: "De acuerdo, incorporamos la agricultura". La OMC, a la que a menudo se acusa como la

causante de todos los males, es la única institución que disciplina a las grandes potencias. Recientemente Burkina Faso ganó a EEUU un *panel* que le obliga a reformar su política sobre el algodón. Si no existiese la OMC, sería imposible que un país como Burkina Faso condicionara una reforma en el sector agrario estadounidense del algodón. No soy un fan de la OMC, pero tampoco se puede decir que es el origen de todos los males.

Estamos en un contexto de globalización económica y la PAC tiene que adaptarse. Europa ofrece acceso libre a los países menos avanzados en todos sus productos menos las armas, y tiene un sistema de preferencias generalizadas donde claramente los países en desarrollo tienen más facilidades de acceso al mercado europeo. Verdaderamente se preocupa de garantizar una renta a los agricultores y de que se mantenga la actividad agraria, pero todo dentro del contexto internacional. Y cada vez con unas exigencias mayores para que los productos cumplan con requisitos medioambientales, de conservación de los recursos y de biodiversidad. Hay que adaptar sucesivamente la PAC, pero no es cierto que se esté desmantelando el presupuesto agrario, que hasta 2013 está garantizado. En este proceso de adaptación al contexto internacional, y de buscar fórmulas que garanticen un abastecimiento y un tejido agrario y rural vivo, que es lo que pretende la agricultura europea, hay dificultades. Pero Europa ha apostado por no estar en el mercado internacional de *commodities* como EEUU. A cambio ha apostado por productos de alto valor añadido, de calidad, con denominación de origen, más apegados a su territorio, más enfocados a la demanda de los ciudadanos europeos.

M. L.: Insisto. ¿Es la soberanía alimentaria el modelo a seguir? ¿Es compatible con la globalización?

J. L.: Como consumidor, me gusta llegar a la frutería y poder comprar un mango o tomar café y té. La soberanía alimentaria me parece un concepto muy importante, pero no soy fundamentalista de nada. No puedes pensar que vas a comer de lo que tienes alrededor exclusivamente. Tiene una racionalidad económica y medioambiental abastecerte de los recursos naturales que hay en una región próxima, pero eso no excluye que haya un comercio mundial de alimentos que beneficia a todos. En el equilibrio, está la virtud. No puede ser que los países se dediquen sólo a la exportación y no cubran sus necesidades de abastecimiento local, pero con la exportación generan unas divisas. España lo ha hecho en su proceso de modernización de la agricultura con la exportación de frutas y hortalizas y fue una fuente de divisas para el país. Debe haber un concierto entre un abastecimiento local y regional y un comercio internacional.

M. L.: ¿Son capaces los países en desarrollo de producir los alimentos que necesita su población?

A. G.: Tienen que ser capaces y seguro que en buena medida lo pueden hacer. Pero en este debate hay muchos elementos sobre la mesa. Primero, no hay libertad en muchos gobiernos. Sobre todo en los países más pobres, los gobiernos no tienen libertad en su toma de decisiones, y más con deudas externas dependientes del BM y del FMI. Desde estas instituciones se les están imponiendo unas políticas en muchos casos dirigidas a la agroexportación, independientemente de sus necesidades internas. Ahí está el ejemplo de Argentina. La libertad de los gobiernos está muy cuestionada mientras tengan una deuda a pagar.

J. L.: El BM y el FMI están ahí, son una realidad, pero sí creo que los gobiernos tienen bastante autonomía de decisión. Otra cosa es que no siempre responden a los intereses de sus pobres. A nadie se le obliga a entrar en la OMC, es una decisión voluntaria, hay muchos beneficios de formar parte de ella y, sin embargo, vemos casos como el de Argentina. Ellos han puesto aranceles a la exportación, que es una medida de soberanía alimentaria. Su argumento es: "Lo que se produce en nuestro país lo queremos para que no nos suban los precios"; pero ha tenido un problema muy importante con sus organizaciones agrarias. Son decisiones soberanas, van en contra de los organismos internacionales y del libre comercio, agravan la crisis internacional, pero, a fin de cuentas, las toman los países. Un país con un potencial productivo impresionante como es Argentina, este año no va a aumentar la cosecha de cereales. Cada uno se equivoca como quiere y toma las decisiones que puede. No comparto la idea de que hay unas organizaciones internacionales que son las culpables de todo. Es mucho más complejo que eso.

A. G.: Estoy de acuerdo, es más complejo. Y sí hay gobiernos que sólo actúan para sus ricos, pero eso significa que, si no están trabajando para el conjunto de su población y admiten que la gente se muera de hambre, su legitimidad está absolutamente tocada. Sin embargo, en la situación actual es muy difícil afirmar que únicamente es responsabilidad de esos gobiernos. No puede pensarse que Europa somos los buenos, ni mucho menos. Europa tiene unas responsabilidades en el concierto internacional muy claras, y tiene unos intereses económicos, tanto como para saber qué hacer respecto de esos países donde puede ser evidente que hay corrupción. No me parece que se esté construyendo una Europa desde los valores sociales, sino desde los mercados, por más que tengamos grandes diferencias respecto de EEUU.

M. L.: Los transgénicos son otra pieza clave de este debate. En un contexto de desabastecimiento de alimentos, ¿pueden ser una solución o constituyen una amenaza?

J. L.: Negarse a hacer uso del avance de la ciencia, por principio, como sucede en este tema, donde se asumen posiciones religiosas, me parece un error histórico. Dicho esto, evidentemente hay que analizarlo con cuidado. El gran problema de los transgénicos es la concentración de esta tecnología en los señores que la han desarrollado y mantienen no el

monopolio pero sí en gran medida su control. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, la posibilidad de modificar genéticamente las plantas para adaptarlas a la sequía, producir medicinas y mejorar la nutrición abre un potencial de oportunidades. Hay que ir poco a poco, fomentar una investigación pública, evitar las posiciones dominantes y gestionar el mantenimiento de la biodiversidad. Creo que tenemos medios suficientes para entrar en el mundo de la biotecnología con las precauciones necesarias para nuestros consumidores y para el medio ambiente. Ésta es mi opinión como técnico; la posición de nuestro gobierno y de la Unión Europea es mucho más prudente porque en la población hay una desconfianza hacia los transgénicos. Sin embargo, en un país como España, que es fuertemente dependiente de productos como el maíz y los cereales, suponen nuevas oportunidades. Se trata de un avance tecnológico en el que, tarde o temprano, hay que entrar. No es que se vaya a cambiar el modelo de producción, simplemente puede resolver problemas de escasez de agua, además de mejorar la alimentación. Hay que desarrollar nuevas tecnologías, invertir en I+D, evitar que sea una tecnología monopolizada por las grandes multinacionales... Pero es un avance científico al que no se puede renunciar en un planeta que tiene un montón de retos por delante, como alimentar a toda su población y hacerlo de una manera sostenible.

A. G.: En ningún caso partimos de una posición en contra de los transgénicos por un hecho de catecismo o por estar en contra de la tecnología.

J. L.: No decía que fuerais vosotros.

A. G.: La inmensa mayoría de organizaciones sociales que están en contra (en España son contadas las que defienden los transgénicos) no se basan en cuestiones religiosas. Partimos de un análisis muy claro sobre los organismos modificados genéticamente. Ninguno de los elementos que se apuntan como posibilidades positivas realmente está comprobado. Por otro lado, la mejor agricultura para responder a los retos planetarios es la que tenemos, la más adaptada al territorio, la que ha permanecido. La agricultura que se está imponiendo y que está destruyendo la tradicional sí necesitará de todo (tecnología, transgénicos...) para justificarse a sí misma, porque se está haciendo desde unos intereses económicos, y no sociales, ni desde retos medioambientales o de cambio climático. Además, los transgénicos se están imponiendo sin respetar el principio de precaución, y esto es gravísimo.

J. L.: ¿Dónde no se respeta el principio de precaución?

A. G.: En Europa y en España. En la aprobación de todas las variedades autorizadas no se ha respetado. Estas semillas transgénicas no han pasado por el filtro del principio de precaución.

J. L.: El proceso que conlleva la aprobación de una semilla (por cierto, en Europa hay muy pocas aprobadas frente al resto del mundo, que lleva 20 años cultivando transgénicos)

es complicadísimo. No sólo interviene la parte agraria, también la de los consumidores, la de sanidad, la medioambiental... Precisamente en Europa hay un principio de precaución exagerado.

A. G.: No se ha respetado. Incluso ha habido aprobaciones de transgénicos que se han echado para atrás porque se han visto los efectos sobre la salud humana. Y no hay una investigación pública suficiente acerca de las consecuencias del uso de transgénicos. En segundo lugar, en el cultivo de transgénicos no se respeta a los agricultores ecológicos, que no quieren ver su cosecha contaminada por los cultivos de maíz transgénico, por ejemplo. No está demostrado que haya ninguna posibilidad de coexistencia de producción transgénica con no transgénica. Como agricultor quiero ser libre para producir maíz no transgénico, y es mi derecho no verme contaminado. Si impulsas los transgénicos, la posibilidad de que exista una agricultura sin ellos está en cuestión. Eso es un problema añadido. La otra cuestión es que los transgénicos no vienen desde la investigación pública, desde los intereses de la población. A estas alturas no vamos a santificar a las empresas de la biotecnología, como si investigaran y generasen estos productos por el bien de la humanidad.

M. L.: Compartís que hay que fomentar la investigación desde el ámbito público para evitar el monopolio de las multinacionales.

J. L.: Sí. Comparto que la situación actual no es la deseable, ya que tiene que haber una tutela al tratarse de una tecnología nueva, que entraña riesgos. Pero no se puede demostrar que es absolutamente inocua. Eso es imposible. Y, en la práctica, Europa está al margen, porque produce transgénicos con cuentagotas. ¿Podría haber un principio de precaución más extremo? Probablemente. Pero hay una gran seguridad. Evidentemente, las empresas investigan para maximizar su beneficio. Eso no es ni bueno ni malo, hablamos de señores que han invertido un montón en I+D y ven legítimo obtener unos beneficios. Al mismo tiempo, han tirado de la ciencia para adelante y eso también hay que reconocerlo. Pero la situación, desde luego, es mejorable.

A. G.: Los transgénicos no responden a ningún tipo de demanda humana, directamente tienen que ver con el negocio. Es más, hay rechazo hacia ellos. Y hay un hecho claro: la naturaleza es más sabia que todos los científicos, y en ella no se dan procesos de mutaciones entre diferentes especies. Estamos introduciendo genes entre distintas especies y se desconoce la reacción interna en esos productos. Por supuesto, tiene que haber mayor investigación pública, pero eso significa que se debe parar inmediatamente lo que se está autorizando, porque es una agresión a la naturaleza, a las personas y a la agricultura, que se está dejando en manos de cuatro multinacionales. En Europa, el único país que ha autorizado estos cultivos es España. ¿Por qué el resto de países europeos no los han autorizado?

J. L.: Los grandes defensores de los no transgénicos son Francia y Alemania. Se trata de una medida de protección comercial. Ellos son los principales productores de cereales en Europa, y España, que es un deficitario, se los compra. “Mientras aquí no entren mis competidores, que generan productos transgénicos, el mercado es mío”, dicen. Han jugado a eso; no es que sean buenos y que se basen en una preocupación social. Todo el mundo tiene sus motivaciones comerciales. Francia y Alemania juegan a tener capturado el mercado europeo. Tampoco se puede obviar que hay grandes regiones del mundo que llevan 20 años cultivando transgénicos y no sé de ningún caso de personas que hayan tenido problemas de salud ni de ninguna catástrofe. Con esto quiero dejar claro que se trata de un avance tecnológico, que tiene sus problemas, que hay que investigarlos, que efectivamente hay unas fronteras que van más allá de los cruces naturales entre las variedades y eso requiere una responsabilidad, una precaución. Los avances de la ciencia son así, se cruzan barreras que generan temor y el hombre puede decir “hasta aquí hemos llegado o vamos a seguir investigando”.

M. L.: **La Unión Europea ha anunciado ayudas millonarias para paliar los efectos de la crisis sobre las poblaciones más vulnerables. Pero ¿qué estrategia debe seguir a largo plazo? La PAC, además, genera controversia. ¿Entra en contradicción la política agraria comunitaria con la defensa de la soberanía alimentaria?**

A. G.: La UE debe impulsar una política agraria propia, recuperar el concepto de preferencia comunitaria, hacer una política donde se priorice claramente un modelo de agricultura social, familiar, con una producción sostenible, bien adaptada al medio, con calidad, con salubridad de los alimentos, que genere empleo y economía en lo local. Este es el concepto de soberanía alimentaria. Y, al mismo tiempo, debería impulsar a nivel mundial que los países puedan recuperar esa soberanía alimentaria.

M. L.: **¿La actual PAC fomenta o no la soberanía alimentaria?**

A. G.: La PAC, como ya he dicho, está desembocando en la OMC. Por tanto está renunciando a la soberanía alimentaria. Europa tiene que afrontar qué pasa con la política agraria: primero, las ayudas, como están, no tienen ningún sentido; tiene que reconocerse que hay unos costes de producción y que los precios, mediante la regulación de los mercados, deben cubrir dichos costes. Ésa es la forma más lógica de afrontar un mercado claro y transparente, que beneficie a agricultores y consumidores. En situaciones más difíciles las ayudas sí tienen sentido, pero tienen que servir para compensar mayores dificultades en la producción; en ningún caso pueden servir para ayudar a la exportación ni para facilitar una exportación de bajo precio, que es lo que ha pasado hasta ahora. No tienen sentido las sustituciones ni ayudas que camuflen o que posibiliten esto, ni tampoco las ayudas desacopladas.

J. L.: Originalmente, la política agraria común se parecía mucho más al concepto de soberanía alimentaria del que hablabas. Era una agricultura protegida, totalmente aislada del exterior, donde se fomentaba la producción... Pero estamos en un contexto internacional, la Unión Europea está dentro de la OMC, hay unas disciplinas y lo que tenemos hoy es una PAC reformada, adaptada a los compromisos internacionales y a las sensibilidades de la población. Básicamente, dentro de ese contexto internacional y con ayudas que no son distorsionantes de los mercados, es decir, que no estimulan la producción situando a nuestros agricultores en distintas condiciones de competitividad que en países terceros, ha renunciado a las ayudas a la exportación y ha abierto sus mercados a los países menos avanzados. Además, la PAC intenta mantener una renta de los agricultores y que ellos tomen sus decisiones. Hay unas ayudas directamente a la renta en contrapartida de los servicios que prestan los agricultores a la sociedad, entre los que está, por supuesto, la producción de alimentos, pero también conservar el territorio, entre otras. Nuestra política agraria ha ido respondiendo a los retos que se ha encontrado y lo sigue haciendo. Está en permanente revisión. Claro que se puede mejorar, pero hay que tener en cuenta que es una política para 27 Estados miembros, y ahí cada uno tiene que encontrar su espacio.

Efectivamente, la PAC está condicionada por nuestros compromisos en la OMC, pero no puede ser de otra forma, nos lo exigen nuestros socios comerciales y todos los países en desarrollo. Europa ha hecho sus deberes. En la situación en la que nos movemos, el consumidor europeo prefiera tomarse un filete de rubia gallega, que se produce con todas las garantías y sabe riquísimo, en lugar de un filete que venga de un país tercero. Y lo hace porque lo escoge, no porque hay un arancel.

A. G.: Cada día desaparecen más de 1.000 explotaciones agrarias en Europa y, al paso que vamos, la agricultura familiar no tiene posibilidades. Lo de proteger carne gallega con las negociaciones que está llevando a cabo Europa con Mercosur para, por ejemplo, importar carne de Argentina y Brasil... Está claro que a los precios que producen allí, es imposible producir carne aquí. No creo que tenga posibilidades ni la carne gallega ni otros productos si los precios de producción son los de estos países. Europa no está haciendo los deberes, porque las ayudas desacopladas siguen posibilitando la exportación a bajo precio. Y estas ayudas no son defendibles como se están dando. Más del 80% se lo está llevando un 15%, y sabemos que dentro de ese 15% están la Duquesa de Alba o la Reina de Inglaterra. Esto no tiene ningún sentido.

J. L.: Eso es demagogia...

A. G.: Es muy serio que un 15% de perceptores se lleve un 80% de las ayudas. Y son datos oficiales, no son cuestionables. Eso significa que las grandes ayudas de la PAC las están recibiendo unas pocas personas que ni siquiera son agricultores. Los datos en España son dramáticos en cuanto a quién está recogiendo la mayor parte. No es posible que la pobla-

ción entienda que hay gente multimillonaria que se está llevando las ayudas de la PAC. Aunque sólo fuera por vergüenza, hay que plantear que haya una redistribución distinta.

J. L.: Si adaptamos nuestra agricultura al contexto internacional, evidentemente ya no tendremos unos aranceles mayores, vendrán importaciones terceras y nuestras producciones tendrán que encontrar su espacio. ¿Se puede defender un modelo social de la agricultura? Sí. ¿Cómo lo hace la PAC? Retribuyendo al agricultor por hacer unas funciones. Se le dan las ayudas por producir con unas exigencias medioambientales que no tienen otros y por prestar un servicio a la sociedad. La concentración de las ayudas se debe a lo siguiente: esto es una política sectorial y el origen de las ayudas viene de cuando hemos ido adaptando nuestra política agraria a los compromisos con la OMC. En ese momento se bajan los precios institucionales que se mantenían, y esta bajada se transforma, con los rendimientos, en ayudas por superficie. Eran unas ayudas destinadas a una actividad económica, es decir, parte de una política económica y no social, para mantener una producción.

¿Qué sucede con esos porcentajes que se manejan del 15% y del 80%? Que tenemos un inmenso número de perceptores de ayudas que no son agricultores, que tienen una parcelita y reciben menos de 100 euros al año. Un 40% de los perceptores recibe menos de 10 euros al mes. Por eso los porcentajes salen como salen. No es que los ricos se lleven dinero. Evidentemente, el señor que más agricultura hace, que más territorio gestiona, tiene más ayudas. Pero aquí la gente no se lleva el dinero por ser rica, sino por realizar una actividad, por gestionar un territorio, y la distribución de las ayudas responde a ese criterio. Por supuesto, se puede mejorar incorporando una regresividad y unos nuevos criterios de reparto. Pero hay que explicar de dónde vienen las cosas. En la actual reforma se está valorando el recorte de ayudas a los señores que perciben más y su redistribución. El reparto actual responde a una situación del pasado, pero hay que explicar que no es una irracionalidad y que viene de donde viene.

La alternativa es que no haya ayudas, como piden los británicos. Entonces, sin ayudas ni un cierto grado de protección, sí que no defendemos un modelo agrario en España ni en Europa. Si nosotros, los responsables del sector, decimos que esto es insostenible, vamos muy mal. Nuestra responsabilidad es explicar que estas ayudas tienen una justificación, que es el servicio fundamental que los agricultores prestan a la sociedad.

A. G.: Sí, pero con otra redistribución. Desde luego, los datos revelan que en Europa grandes terratenientes se están llevando la mayor parte. No se puede defender que haya personas que estén cobrando más de 300.000 euros.

J. L.: ¿Sabes quién cobra más de 300.000 euros en España? Agrupaciones de productores. Y los que son ricos van a seguir siéndolo. De momento, los que tienen tierras y hacen actividad agraria cobran ayudas porque proporcionan un servicio, qué le vamos a hacer.

A. G.: No puede justificarse que a la Reina de Inglaterra se la tengan que dar ayudas simplemente porque haga agricultura. Esto no hay forma de presentarlo socialmente en Europa. Así, las ayudas pierden legitimidad.

J. L.: No lo voy a defender, pero eso es un ejemplo extremo. Lo que quiero decir es que las ayudas vienen de una actividad económica. Los grandes empresarios que tienen tierra y hacen una actividad agraria porque hay ayudas y les salen las cuentas, el día que dejen de obtener beneficio dejarán esa actividad y seguirán siendo ricos. La estructura de la propiedad en Inglaterra no depende de las ayudas ni de la PAC. ¿Queremos introducir la cuestión de las ayudas a la Reina de Inglaterra y a otros? Evidentemente, ese debate no lo aguanta nadie. Esa señora no necesita ayudas, pero hay que entender por qué las ha recibido y después añadir: ¿se puede hacer una regresividad y un mejor reparto? Por supuesto.

M. L.: **¿Tiene alguna relación la expansión del modelo de agricultura industrial y el deterioro de la dieta y la salud? El empeoramiento de la calidad de los alimentos y la preeminencia de una dieta con exceso de calorías, junto a unos hábitos sedentarios, han dado lugar a niveles elevados de sobrepeso y obesidad. ¿Qué responsabilidades tienen los Gobiernos en esta cuestión?**

J. L.: El proceso es al revés. La agricultura, tanto la familiar como la agroindustrial, producirá lo que le demande la sociedad. Hoy en día, las producciones se van orientando a lo que demandan los consumidores. Si a la gente le gusta tomar helados que están hechos a base de mantequilla, en lugar de una pieza de fruta, no es una consecuencia del sistema agroindustrial, sino de los hábitos del consumidor. En ese sentido, sí es un problema el tema de la dieta y la salud. Los gobiernos tienen que adoptar medidas para fomentar unos hábitos alimenticios sanos. En España nos estamos alejando de la dieta mediterránea, pero el origen del problema no es el sistema agroindustrial.

A. G.: Imagino que, como consumidores, recibimos todas las influencias de nuestro entorno y de los medios de comunicación y la publicidad. Los hábitos de consumo son cambiantes y cambiables. Por eso se necesitan gobiernos que actúen sobre la sensibilidad y la concienciación de un consumo responsable, pero la agricultura industrial en estos años ha provocado crisis alimentarias, precisamente porque no se ha calculado lo que significaba permitir su impulso sin preservar la seguridad alimentaria. Si vamos hacia ese tipo de agricultura, habrá menor seguridad sobre los alimentos. Como europeos, también caminamos hacia un mayor nivel de riesgos sanitarios por los alimentos que llegan sin controles suficientes en frontera, y sin que en los lugares de origen se haya garantizado que esas producciones tengan que respetar lo que internamente en Europa tenemos que respetar.

Aprender a mirar la salud. Cómo la desigualdad social daña la salud de Joan Benach y Carles Muntaner 137
Óscar Carpintero

Planeta de ciudades miseria de Mike Davis 141
Fco. Javier Gutiérrez Hurtado

El final de la era del petróleo barato de Joaquim Sempere y Enric Tello 143
Salvador López Arnal

Potencialidades y limitaciones del codesarrollo de Carlos Gómez Gil / **La ilegitimidad de los créditos FAD. Treinta años de historia** de Carlos Gómez Gil (dir.), Dani Gómez Olivé (coord.), Gemma Tarafa 146
Ángel Martínez González-Tablas

APRENDER A MIRAR LA SALUD. CÓMO LA DESIGUALDAD SOCIAL DAÑA LA SALUD

Joan Benach y Carles Muntaner

El Viejo Topo,
Barcelona, 2005.

130 páginas

¿Por qué la esperanza de vida de una niña en Sierra Leona es cincuenta años menor que la de una niña japonesa? ¿Esta situación es natural e inevitable, o podemos modificarla? ¿Cuál es el *exceso de mortalidad* debido a la desigualdad social?

De manera clara y diáfana, alguna respuesta ha dado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reciente e importante informe sobre los determinantes sociales de la salud aparecido a finales de agosto de 2008: “La justicia social es una cuestión de vida o muerte. Afecta al modo en que vive la gente, a la probabilidad de enfermar y al riesgo de morir de forma prematura. La injusticia social está acabando con la vida de muchas personas”.¹ Ya en 2005, con la formación, de la *Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud*, la OMS vino a reconocer el trabajo de más de dos décadas de investigaciones médicas y epidemiológicas que, desde posiciones minoritarias en el *establishment* biomédico, llamaban la atención sobre los daños que la desigualdad social provoca en la salud.

Precisamente ese mismo año en que se creó la mencionada Comisión, Joan Benach (Profesor Titular de Salud Pública y Salud Laboral en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona) y Carles Muntaner (Catedrático de Ciencias de la Salud en la Universidad de Toronto, Canadá), publicaron el libro objeto de esta reseña con el aval de más de una década de provechosas investigaciones. No en vano, la

experiencia acreditada por los autores les llevó a dirigir una de las redes de expertos que asesoró a la citada Comisión de la OMS en su labor. Y cuando uno compara el contenido del libro que comentamos con algunos apartados del Informe, esta influencia aflora de manera clara, lo que revaloriza el contenido del libro y justifica la atención que ahora le prestamos en esta revista.

Este es un libro necesario. No son frecuentes los textos que combinan la brevedad de sus páginas con una notable riqueza de reflexión y matices, de sensibilidad e inteligencia. Y menos frecuentes aún los que, sin preocupación por asuntos lejanos, nos obligan a cambiar el paso y la mirada sobre aspectos cercanos y cotidianos. Tan cercanos y cotidianos que, de tanto verlos, apenas los *miramos*. O, cuando lo hacemos, muchas veces erramos la perspectiva.

Por fortuna, Joan Benach y Carles Muntaner no son de los científicos que miran para otro lado. No son cómplices de lo que sucede, aunque lo que suceda sea mucho. Son, en verdad, una especie rara: se trata de dos investigadores de primera fila que han aprendido a mirar profundamente la *salud* y sus determinantes, desafiando bastante de la sabiduría biomédica convencional, pero sin caer en veleidades irracionales que a la postre ahorcan.

Como nos recuerdan en el texto, empezar a mirar la salud de otra manera resulta fundamental pero requiere paciencia, esfuerzo y aprendizaje. En este libro se recogen las principales enseñanzas de una forma de *mirar la salud* que hunde sus raíces y pone el énfasis en el análisis del contexto socioeconómico, de las situaciones de desigualdad en los recursos, y del marco institucional que regula el funcionamiento de cada sociedad. De ese análisis depende además la respuesta que demos a un interrogante que se encuentra en el centro de la polémica, a saber: ¿Depende la salud sobre todo de la carga genética de la población y de los hábitos —más o

¹ World Health Organization (Commission on Social Determinants of Health), *Closing the Gap in a Generation. Health Equity through Action on Social Determinants of Health*, Geneva, 2008. (www.who.org).

menos “saludables”— de comportamiento, o existen otros determinantes que actúan, si cabe, con mayor intensidad? ¿Es fundamentalmente una cuestión de responsabilidad individual, de fármacos y actitudes, o la estructura y las *condiciones de desigualdad social* pueden contribuir en un grado notable a la mejora o empeoramiento de la salud?

Benach y Muntaner lo expresan con claridad: “La salud comunitaria y la salud pública no dependen tanto sólo de la suma de elecciones libres e individuales de las personas sino, sobre todo, de los múltiples condicionantes y necesidades sociales que configuran la forma de vivir, relacionarse, trabajar y enfermar en cada sector de la sociedad. De hecho, hoy en día tres cuartas parte de la humanidad no disponen de la opción de elegir con libertad factores relacionados con la salud tan importantes como son seguir una alimentación adecuada, vivir en un ambiente saludable o tener un trabajo que no sea nocivo para la salud. *La salud no la elige quien quiere sino quien puede*”.

Es, precisamente, la existencia de desigualdades en salud tan palpables —entendidas como aquellas diferencias que resultan “innecesarias, injustas y evitables”— las que explican, según los autores, que en una época de progreso tecnológico, farmacológico y quirúrgico sin precedentes en la biomedicina, nos encontremos con la paradoja de que no mejore en la misma proporción la salud de *toda* la población. Desigualdades que, como bien expresan Benach y Muntaner, son generadas por un sistema económico y social en el que, a su vez, la distribución del poder político y económico es también muy desigual. O dicho de otro modo: necesitamos “buscar las verdaderas causas y dejar de echar la culpa a las víctimas”.

Hay, además, un rasgo de este texto que lo hace especialmente atractivo. Recorre sus páginas un inusual equilibrio entre, por un lado, la pulcritud metodológica y el rigor en el tratamiento de la información, y, de otra parte, la sensibilidad social y la mirada atenta y cualitativa frente al sufrimiento humano. “Conocer lo particular

además de lo general: la tragedia personal de cada individuo y el drama social de las poblaciones. Conocer la sociedad donde vive el individuo, y al individuo inserto en la sociedad. Identificar a los que sólo son un número en las estadísticas oficiales. Conocer no sólo lo mensurable sino lo relevante, no desentenderse del sufrimiento de ningún ser humano (...) si sabemos escucharlos, los números nos hablan”, escriben con lucidez Benach y Muntaner.

¿Y de qué nos hablan los números? De muchas cosas. Para empezar, los autores relatan y documentan de manera clara los cinco rasgos fundamentales que presentan las desigualdades en la salud. En primer lugar, son *enormes*, esto es, las diferencias en la probabilidad de morir según clases sociales o entre países ricos y pobres resulta muy elevada. De hecho, en países como Gran Bretaña donde existen estudios continuados durante décadas, se ha comprobado que las diferencias en *la probabilidad de morir entre clases sociales extremas supera en magnitud a las producidas por tabaquismo*. No en balde, en este país, los directivos y ejecutivos tienen casi diez años más de esperanza de vida que los trabajadores manuales. Y esto se traduce anualmente en muertes *evitables*, con nombres y apellidos: en el caso británico se calcula que si los pobres tuvieran las mismas tasas de natalidad que los ricos se podrían evitar 42.000 muertes entre el colectivo de 16 a 74 años. O, a escala planetaria, si todo el mundo consiguiera alcanzar el nivel de mortalidad infantil vigente en Islandia, se podría evitar anualmente la muerte de más de 10 millones de niños.

Pero esto no es sólo un problema de los extremos de la sociedad nacional o planetaria. Las desigualdades también son *graduales*, se extienden a lo largo de toda la escala social, y presentan un gradiente de empeoramiento a medida que se reduce la renta y la posición social. Dicho gradiente hace que la desigualdad se exprese en una mayor o menor vulnerabilidad de la salud de las distintas clases sociales dentro de un mismo país. Una vulnerabilidad

que da lugar a diferencias de salud injustas y evitables.

Fijar la lente en la influencia de la desigualdad social sobre la salud permite relativizar el éxito en la reducción de las tasas de mortalidad en los países ricos durante las últimas décadas. En efecto, el tercer rasgo muestra que las desigualdades en la mortalidad entre clases sociales —y entre países— lejos de menguar *persisten o se han incrementado*. Y si a eso unimos, en cuarto lugar, el carácter *adaptativo* de muchas de esas desigualdades —es decir, que los grupos sociales más pudientes se benefician antes y mejor de las acciones sanitarias para mejorar la salud—, no debe extrañar que el panorama empeore. Se produce aquí lo que se conoce como la “ley inversa de la atención sanitaria” o, lo que es lo mismo, cuanto mayor es la necesidad peor y menor es la atención prestada.

El quinto y último rasgo tiene que ver con el carácter *histórico* de estas desigualdades en la salud. Cambian con el tiempo y se modifican según las circunstancias sociales y económicas. Por ello, ni cabe aceptar que estos grados de desigualdad son inevitables, ni tampoco puede uno fiarse de que las mejoras conseguidas en la salud o en la reducción de las desigualdades en este ámbito lo van a ser para siempre. Tal vez el lamentable ejemplo del descenso en la esperanza de vida en Rusia y la antigua Unión Soviética que ha seguido a la debacle económica y social de esos territorios durante la década de los noventa sea el mejor indicador de esta última circunstancia.

Pero introducir estos elementos, no solo lleva a constatar la antigua enseñanza de que los muy pobres viven mucho peor que los muy ricos y que, por tanto, tienen peor salud, enferman con más frecuencia y mueren con anterioridad. La pobreza daña la salud y, por esta razón, como se recuerda en el libro, la “pobreza extrema” fue reconocida finalmente como enfermedad en la Clasificación Internacional de Enfermedades con el código Z59.5. Ahora bien, los problemas no desaparecen al estudiar o

comparar la salud de los que poseen un nivel de renta medio o inferior, con los que se sitúan por encima de ellos. Como recuerdan Benach y Muntaner: “Comprender las relaciones existentes entre la desigualdad social y la desigualdad en salud es algo mucho más complejo que el simple hecho de constatar la enorme diferencia en la riqueza o la muerte que existe entre los individuos y grupos que están en los extremos de la escala social, o entre las naciones o áreas geográficas muy ricas o muy pobres. Como la masa de hielo sumergida de un iceberg, las características de las desigualdades en salud quedan ocultas, invisibles ante nuestros prejuicios o nuestra ignorancia”.

Aprender a mirar la salud no solo permite reducir considerablemente nuestra ignorancia y eliminar prejuicios injustificados desde una perspectiva general. También tiene la ventaja de resumir en pocas páginas las investigaciones más importantes que los autores han aplicado a la realidad española. Benach y Muntaner eligen los cuatro primeros rasgos destacados líneas atrás y certifican su amplia presencia en nuestra sociedad. El capítulo 7 titulado significativamente “Las otras Españas”, revela, en efecto, que las desigualdades socioeconómicas se están traduciendo en importantes diferencias en la muerte y la salud y que estas también son enormes, graduales, persistentes y adaptativas. Existe, por ejemplo, un gradiente *geográfico* desde el noreste al suroeste que hace que varias zonas de Andalucía, Extremadura, Canarias, Murcia y Castilla La Mancha presenten seis años menos de esperanza de vida al nacer que la media española. Las peores zonas están en Sevilla, Huelva y Cádiz. En conclusión: “Si las áreas más deprimidas tuvieran indicadores de mortalidad equivalentes a las áreas más ricas, cada año podría evitarse la muerte de más de 35.000 personas. *En otras palabras, cada hora se producen 4 muertes ‘de más’ a causa de la desigualdad*”.

Este gradiente geográfico se complementa con un gradiente *social* que muestra cómo, a medida que se desciende en la escala social,

empeora considerablemente la salud de las población, aumentando la frecuencia (a veces doblándose) de enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, asma o bronquitis crónica. Detrás de ello se encuentra, normalmente, una situación laboral precaria y discriminatoria que lleva, por ejemplo, al colectivo de mujeres que trabajan en la limpieza y el servicio doméstico a presentar una salud entre 2 y 3 veces peor que la de trabajadoras no manuales.

El que estos resultados sean silenciados — o permanezcan “olvidados”— tiene que ver con varios factores sociopolíticos evidentes, pues encauzar la situación por otros derroteros implicaría impugnar el modelo de producción y consumo y las relaciones sociales que lo alimentan. Sin embargo, también ha ejercido un papel crucial en esta situación de “invisibilidad” la forma usual de concebir la atención médica y sanitaria. La visión dominante achaca los problemas de salud a tres tipos de causas (genético-biológicas, hábitos, y uso de los servicios sanitarios), lo que supone explícita o implícitamente culpar a las víctimas de su propia situación. Como decíamos al comienzo de esta reseña, Benach y Muntaner se oponen a esta visión y unen su esfuerzo a un planteamiento alternativo que incide en la *producción eco-social de la salud y de la enfermedad*. Esto no significa que las causas anteriores no tengan importancia, sino que contribuyen menos que otros factores socioeconómicos a explicar la salud y la enfermedad colectivamente. Por decirlo con sus palabras y con total claridad: “Los profesionales de la salud estiman cotidianamente la probabilidad de que los pacientes padezcan enfermedades mediante la valoración de factores de riesgo para la salud muy diversos. El hábito de fumar, el tener tensión arterial o el colesterol, ser obeso o hacer poco ejercicio físico son algunos de los factores más conocidos. Con menos frecuencia los trabajadores sanitarios indagan sobre la situación psicológica, familiar, laboral o ambiental de los enfermos. Y mucho menos aún sobre otros factores sociales y relativos a su clase social o situación económica, material, cultural o social.

Sin embargo, el conocimiento científico disponible actual es abrumador: el conjunto de estos factores sociales juega un papel decisivo en la determinación de la salud colectiva”.

Cuando estos factores cambian por la acción social y política —y, por tanto, se reduce la desigualdad— se observa que la salud colectiva mejora considerablemente. La salud, también aquí, “es inseparable de la política”. Y mala es la política que permite empeorar la salud de la población —a veces hasta la muerte— existiendo los medios para evitarlo. Como también lo es aquella política que, amparándose en “planes de ajuste estructural”, impone la utilización de los escasos recursos para fines ajenos a las necesidades de un país y deteriora gravemente la salud de sus habitantes.

Benach y Muntaner son conscientes de que cambiar la situación es algo tan difícil como necesario. Pero no es imposible. Merece la pena trabajar por ello ya que la alternativa a no hacerlo es, sin lugar a dudas, peor colectivamente. La “guía para orientarse” y el epílogo con el que concluyen su texto constituyen un magnífico asidero para afrontar esa tarea con ciertas garantías. Aprenderemos a mirar de forma diferente y a valorar la buena información y el conocimiento como herramientas necesarias. Pero del mismo modo aprenderemos que, cuando se trata de actuar, la política y la democracia ayudan mucho más que la técnica a reducir las desigualdades y a aumentar la justicia social.

Lo apuntaba Enzensberger y lo recuerdan acertadamente Benach y Muntaner: “estamos todos en el mismo bote. Pero el pobre será el primero en ahogarse”. Aquí, en estas páginas, hay un valioso e imprescindible material para ayudar a evitar el naufragio.

Óscar Carpintero
Universidad de Valladolid

PLANETA DE CIUDADES MISERIA

Mike Davis

Editorial Foca

Madrid 2007,

283 páginas

Comentar el libro de Mike Davis resulta difícil. Un recordatorio de la dura realidad en que viven muchas gentes deja tocado a cualquier lector con un mínimo de sensibilidad. Además, es tan prolijo en sus descripciones de las áreas urbanas hiperdegradadas de todo el mundo que, en ocasiones, se hace difícil seguir el hilo de los diversos capítulos y de las ideas más importantes. En cualquier caso, el índice pone un poco de orden en tan ilustrativa descripción.

Por primera vez, en el año 2008, la cantidad de personas que vive en ciudades ha superado a la población rural. Más de 3.300 millones de personas habitamos en espacios urbanos. El mundo rural pierde irremisiblemente y las causas son diversas y difíciles de cuantificar. Las Naciones Unidas estiman que más de la mitad de ese crecimiento proviene del “aumento natural de la población urbana”, pero no pueden olvidarse, sobre todo en los países subdesarrollados, los otros dos factores: las migraciones desde áreas rurales a urbanas y el cambio de calificación de una zona por su propio crecimiento.

En este contexto de urbanización acelerada, ¿cómo evoluciona el debate sobre las bondades y los problemas de este proceso? La respuesta más común y menos arriesgada es que “depende”. El último número de la Revista “Finanzas y Desarrollo” (publicada conjuntamente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) dedicado al proceso de urbanización se inclina por la cautela obvia: “La urbanización rápida puede ser una bonanza, siempre que el mundo esté bien preparado”. Sus entusiastas hablan de los beneficios que, bajo la forma de mayores ingresos, capitalizan los particulares; de la mayor calidad de vida y posibilidades de

prestación de servicios; de su influencia en un comportamiento demográfico moderno; de los efectos positivos de la urbanización en el crecimiento económico general; y, finalmente, de su contribución al desarrollo rural.

Los pesimistas, seguramente más realistas, consideran pernicioso, por varias razones, el rápido proceso de urbanización seguido en la práctica por los países subdesarrollados. Por su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida (las “megaciudades” son enormes sumideros de recursos hídricos, energéticos y de materiales que generan gran cantidad de residuos de imposible reciclaje). Porque se está produciendo un aumento de la pobreza urbana y porque esas desigualdades llevan a otros problemas sociales más graves como el aumento de la delincuencia.

Mike Davis ofrece un relato apasionante en el que describe con crudeza y precisión la triste realidad de degradación en las grandes áreas urbanas y aborda los elementos en discusión más interesantes. La primera viene reflejada por la persistencia en la utilización del término “slum”, que tiene sus orígenes en el siglo XIX, y muestra los recurrentes problemas de los grandes asentamientos de población. Sus primeras acepciones remitían a “amalgama de vivienda ruinosa, hacinamiento, enfermedad, pobreza y vicio”. Más de un siglo después sólo ha desaparecido la alusión al vicio, propio de la moral victoriana, como elemento característico de la configuración de las áreas hiperdegradadas: “hacinamiento, vivienda pobre o informal, falta de acceso a la sanidad o al agua potable e inseguridad en la propiedad”.

Los diversos elementos en discusión nos pueden dar una idea más acabada sobre el “grado de preparación” del mundo para abordar el crecimiento de las grandes áreas urbanas. Para empezar, éstas no son hoy hijas de la industrialización y, ni siquiera de la revolución agrícola de ayer. Más bien son, en muchos casos, el resultado urbano de lo que David Harvey ha dado en llamar “acumulación por desposesión”. Por lo tanto hacen falta nuevos

ojos para viejos problemas. A sus habitantes se les juntan todos los males: infravivienda, carencias de todo tipo de servicios, inseguridad, vecindad con basureros e industrias tóxicas, largos desplazamientos a sus lugares de trabajo cuando éstos existen, y pocas expectativas vitales. Davis llega a hablar de “humanidad excedente” ¿Qué caminos le han llevado a una caracterización tan dura?

Se muestra muy combativo en determinados aspectos que han influido en esta realidad, casi siempre con muchas razones. La crisis de la deuda de los años ochenta del siglo pasado y su tratamiento, desde el FMI, el Banco Mundial, y los banqueros occidentales, fue el comienzo de unas políticas, las conocidas como “el consenso de Washington”, de nefastas consecuencias para las zonas urbanas. Hasta la ONU, en su trabajo “The Challenge of Slums”, señala que “los Planes de Ajuste Estructural eran, por naturaleza, deliberadamente antiurbanos”. La despiadada e indiscriminada reducción del gasto público afectó, de forma decisiva, a los programas de mejora de las ciudades y a los escasos servicios que recibían los ciudadanos más pobres. Casi siempre los escritores describen mejor que los economistas. El libro recuerda las palabras del escritor nigeriano Fidelis Balogun para el caso de Lagos, aunque sirven para casi todas esas áreas: “La extraña lógica de este programa económico parecía ser que para devolver la vida a una economía moribunda primero había que exprimir bien los jugos a los ciudadanos con menos recursos”.

Pero el problema no es sólo de los programas, es más de fondo. Las relaciones económicas internacionales han consolidado un proceder peligroso. Los países acreedores no permiten a los pobres utilizar las reglas que ellos mismos utilizaron para fomentar su propio desarrollo a finales del siglo XIX y comienzos del XX. La conocida expresión “retirar la escalera” de Ha-Joon Chang ilustra bien el asunto. Desposeídos de autonomía apenas pueden plantear sus propias alternativas. Su desarrollo urbano se hace más problemático. La batida que hace Davis por

las megaciudades degradadas confirma la peor de las situaciones. Ni siquiera experiencias hijas de cierta planificación se salvan del problema. El eterno asunto de la propiedad del suelo sigue en primera línea aunque apenas se considere la posibilidad de hacer valer la propiedad pública.

Hay quienes mantienen que, en los últimos tiempos, el Banco Mundial abandera ciertas inflexiones en su consideración de la pobreza y del desarrollo. Ahí es donde más énfasis pone Davis en el debate de las ideas. No en vano coloca al economista peruano Hernando de Soto, defensor de las soluciones microempresariales para la pobreza, en el centro de sus polémicas: “Elogiar las habilidades de los pobres se convirtió en una cortina de humo para renegar de las obligaciones históricas del Estado en relación con la pobreza y la falta de vivienda”. El otorgamiento de “derechos de propiedad” a una parte de los miserables aporta algunos elementos beneficiosos, pero también contrapartidas muy costosas. La entrada en los circuitos mercantiles presenta contrapartidas evidentes; socava la solidaridad entre los pobres; y, aislada de otras políticas públicas fuertes, convierte su generalización en una quimera. Muchas políticas urbanas de la izquierda de América Latina han seguido esos derroteros y ya encuentran sus limitaciones.

En la misma línea, recupera el debate sobre “los mitos de la informalidad”. Ese cajón de sastre, que se ha dado en llamar sector informal, supone la forma de supervivencia de la mayor parte de los habitantes de las áreas urbanas hiperdegradadas. Sus potencialidades, difundidas por algunos teóricos y con resultados prácticos interesantes, encuentran rápidamente una senda de limitaciones y problemas. Apenas tienen impacto en la reducción de la pobreza, reservan sus maldades para niños y mujeres, olvidan derechos elementales, y dividen a los pobladores de esas zonas. “Si el sector informal no es el mundo feliz con el que soñaban los entusiastas neoliberales, en cambio con toda certeza es un auténtico museo viviente de la explotación humana” llega a señalar Davis.

Con esas condiciones, ¿puede haber revueltas masivas de los habitantes de los “slums”? No parece que la esperanza sea la nota dominante. Desde el lado de los análisis, el autor promete lo que a este libro le falta y que anuncia en un próximo trabajo con Forest Hylton: estudios comparativos de casos concretos. Desde la realidad, pocas esperanzas. La variedad de las respuestas de los miserables a la privación y el abandono es la nota dominante: “iglesias redentoras y cultos proféticos a las milicias étnicas, bandas callejeras, ONGs neoliberales y movimientos sociales revolucionarios”. Muchos actos de resistencia sin denominador común. Su negativa a aceptar su propia marginalidad terminal se mueve entre el atavismo y la vanguardia, entre la renuncia a la modernidad y algunos intentos por recuperar sus promesas fallidas”.

En definitiva, un trabajo que nos recuerda la cruda realidad tan ausente en nuestros medios de comunicación y en nuestros análisis. Y, puestos a hacer algo, recordar que las ayudas tienen que servir para conformar, desde lo público, mejores condiciones de vida de esa humanidad, hoy en día excedente, y para hacer crecer su escaso capital social.

Fco. Javier Gutiérrez Hurtado
Profesor de Economía Aplicada de la
Universidad de Valladolid

EL FINAL DE LA ERA DEL PETRÓLEO BARATO

Joaquim Sempere y Enric Tello
(coords).

Icaria,
Barcelona, 2008,
232 páginas

Por debajo de las diversas aportaciones que contiene El final de la era del petróleo barato vale la pena destacar una motivación compartida: la necesidad de generar utopías realistas, sin oxímoron insalvable, en un ámbito tan central para el futuro no lejano de la Humanidad como es el de las nuevas fuentes energéticas y la transición energética hacia ellas. No se trata de construir cuadros detallados ni modelos de dudosa potencia predictiva, pero sí sugerir, como señala Ernest García, “la apertura de novedosos horizontes culturales”. El final de la era del petróleo barato contiene valiosos testimonios de ello.

Componen este ensayo editado por Joaquim Sempere y Enric Tello, una presentación de los propios coordinadores, nueve capítulos escritos por Ernest García, Sempere, Jordi Roca Jusmet, Josep Puig i Boix, Mariano Marzo Carpio, Óscar Carpintero, Jorge Riechmann, José Manuel Naredo y Eduardo Giordano, y dos anexos, el primero de los cuales presenta datos básicos de la crisis del petróleo y el segundo es un excelente apunte, digno de sosegada reflexión, de Josep Puig i Boix sobre “Las estadísticas de la energía y sus trampas”, con un apunte crítico sobre los factores de conversión usados en el tratamiento del cómputo de la energía de origen nuclear y la proveniente de energías renovables.

Las temáticas discutidas son, pues, de actualidad urgente. La viabilidad de los agrocombustibles, por ejemplo, el asunto discutido por Óscar Carpintero en su contribución –“una polémica que conviene resolver de manera sosegada y racional”-, ha formado parte de la

reciente agenda de la Cumbre de la FAO sobre seguridad alimentaria celebrada en Roma. Mientras el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ha pedido un consenso mundial sobre su utilización, como una de las medidas para paliar el hambre en el mundo, Luiz Inácio *Lula* da Silva, presidente de Brasil, uno de los principales países productores, ha defendido su uso sin demasiados matices críticos: 'Veo con indignación que muchos de los dedos que apuntan contra la energía limpia de los biocombustibles están sucios de aceite y carbón... Los biocombustibles no son el villano'. En cambio, Óscar Carpintero, señala en su aportación que uno, no el único desde luego, de los efectos nocivos de la proliferación en el consumo de bicombustibles es el creciente desarrollo de proyectos en países de Latinoamérica, Asia y África para que destinen una parte importante de su superficie agrícola a la plantación de cultivos energéticos para satisfacer no sus propias necesidades sino el consumo de los países ricos, "poniendo así en mayor riesgo su seguridad alimentaria y aumentando sus servidumbres ambientales con los países desarrollados".

Este es uno de los temas discutidos en el volumen. No es el único. Doy breve cuenta de algunas de las problemáticas tratadas. Ernest García, en el último apartado de su aportación –"Del pico del petróleo a las visiones de una sociedad post-fosilista"–, presenta y discute algunas de las visiones sobre las nuevas sociedades post-fosilistas. Una de sus preferidas es la defendida por Howard y Elisabeth Odum: los ecosistemas y las civilizaciones tienen en común un ciclo de cuatro fases –crecimiento, clímax, descenso, lenta recuperación de los recursos–. La aplicación de recursos adecuados a una situación de recursos limitados –escala reducida, eficiencia y cooperación– puede hacer que el descenso, inevitable por demás, sea benigno y compatible con el mantenimiento de un nivel suficiente de bienestar.

Joaquim Sempere advierte en su contribución –"Los riesgos y el potencial político de la transición a la era post-petróleo"– que la nece-

saria transición energética no va a ser ocasión para que se pongan en marcha las utopías ecologistas de los años 60 y 70 de "pequeñas unidades territoriales relativamente autosuficientes en la captación de energía". El gran capital, nuevamente, está ocupando el terreno energético y gestionándolo como una ocasión para relanzar la economía de los negocios con su dinámica de acumulación y crecimiento indefinidos. Advierte Sempere que si no prevalecen principios democrático-igualitarios, podemos vernos abocados a ecofascismos o ecoautoritarismos asociados a formas de imperialismo que "exporten" al Sur, que sí existe para estas "externalidades", los efectos más destructivos de la crisis ecológica.

Jordi Roca i Jusmet apunta en su comunicación sobre el cambio climático que tanto el protocolo de Kyoto como el mercado de derechos de CO2 pueden considerarse importantes pasos internacionales para dar respuesta al exceso de emisiones, pero que el mercado europeo es un instrumento interesante pero parcial cuyo potencial se ha visto limitado "por la generosa distribución de derechos (que ha llevado a unos precios bajísimos) y por la posibilidad de cubrir los compromisos acudiendo a los mecanismos de flexibilización de Kyoto". La situación española, advierte, es la más problemática.

Josep Puig i Boix señala en su contribución los derechos energéticos básicos necesarios para consolidar un sistema energético descentralizado o distribuido, eficiente, seguro, limpio y renovable. Entre ellos: el derecho a saber el origen de la energía que cada uno utiliza, el derecho a saber los efectos ecológicos y sociales de los sistemas energéticos que hacen posible el suministro de energía a cada usuario final de servicios energéticos o el derecho a introducir a las redes la energía generada in-situ. Estos derechos deben ir acompañados de las correspondientes responsabilidades ciudadanas. Entre ellas, la responsabilidad de autolimitarse en el uso de cualquier forma de energía y la de utilizar la energía generada con sentido común y evitando derroches de todo tipo.

Mariano Marzo Carpio, después de argüir que nos acercamos inexorablemente al fin de la era del petróleo abundante y barato, con su consiguiente repercusión negativa sobre la economía, y la irrupción de una nueva situación que requerirá una reestructuración en profundidad del sistema energético global, finaliza su aportación sobre “El hombre del hidrocarburo y el ocaso de la era del petróleo” con una disyuntiva realista y nada marginal: ha llegado el momento de plantear sin tapujos a la sociedad si desea optar por considerar el crecimiento económico como un fin en sí mismo o bien como un medio para alcanzar una cierta calidad de vida, no sólo material desde luego. No hay que llamarse a engaño: si se escoge la primera opción, no tiene sentido alguno hablar más tarde de sostenibilidad. Es un autoengaño interesado, retórica vacía.

Óscar Carpintero, en una de las aportaciones más políticas del volumen, después de hacer un balance crítico de los agrocombustibles, presenta un ajustado balance de los argumentos esgrimidos para dudar también del uso de la biomasa con fines principalmente energéticos. En sus conclusiones, señala la necesidad de redoblar esfuerzos en promover una nueva cultura energética de la gestión de la demanda (ahorro, eficiencia, movilidad), un decisivo apoyo a la energía solar en sus diferentes modalidades y conectar la política de residuos con la biomasa y con el principio de cerrar los ciclos de materiales en los procesos productivos, la agricultura ecológica y la lucha contra la erosión.

La aportación de Jorge Riechmann –“Chocando contra los límites: veinte tesis sobre biomasa y agrocombustibles”- es un texto magníficamente documentado, lleno de propuesta y matices. No cabe aquí resumirlo pero sí dar cuenta de una de sus tesis centrales: sustituir el petróleo y gasóleo que mueve los motores de nuestro vehículos por carburantes elaborados a partir de biomasa sólo sería una buena idea con muchos menos vehículos de motor en el planeta y mucho menor uso de los mismos.

Es necesario, pues, otro modelo de transporte que logre una movilidad suficiente a través del transporte colectivo, el transporte sobre raíles y bicicletas. Suficiente, remarca Riechmann, es noción esencial: “nuestro sobreconsumo de energía en general y de combustibles fósiles en particular ha de abordarse con decididas políticas de suficiencia, de autocontención, de gestión de demanda”.

José Manuel Naredo sostiene en su contribución, en línea con lo defendido junto a Antonio Valero en el libro *Desarrollo económico y deterioro ecológico* (Fundación Argentaria/ Visor, Madrid, 1999), que la sostenibilidad o viabilidad ecológica de un sistema económico debe enjuiciarse atendiendo no tanto a la intensidad en el uso “que hace de los stocks de recursos no renovables como a su capacidad para cerrar los ciclos de materiales mediante la recuperación o el reciclaje, con ayuda de fuentes renovables”. La aplicación de la metodología propuesta permitiría comparar el conjunto de la exergía almacenada en la corteza terrestre con la de origen solar, “expresando en términos meridianamente cuantitativos el conflicto que plantea en términos físicos la sostenibilidad global de la civilización que nos ha tocado vivir”.

Eduardo Giordano, en “Economía política del petróleo y militarismo”, en línea con anteriores contribuciones, afirma argumentadamente que la economía del petróleo es un sector no regulado por las leyes de la oferta y la demanda sino por el poder cuasi-monopólico de las grandes corporaciones y por la especulación, y “que esta última se alimenta de los conflictos bélicos promovidos por los países de origen de los mayores corporaciones petroleras, beneficiarias a su vez de los aumentos de precios así inducidos”. De este modo, Giordano argumenta que las guerras del petróleo pueden tener efectos positivos notables para la economía sin necesidad de que llegue a concretarse una ocupación operativamente rentable de un determinado país. En determinados contextos económicos, sostiene, “los países que controlan los flujos internacionales del mercado del petróleo pue-

den obtener más provecho 'dejando fuera de servicio' a algunos grandes productores que estimulando su producción petrolífera".

Los coordinadores señalan en su presentación que el horizonte no lejano de una era post-fosilista obliga a reconsiderar el modo de producir, comerciar, residir y consumir de la especie humana. No es obvio que a largo plazo pueda mantenerse, y muchos menos generalizarse, sean cuales sean las fuentes energéticas alternativas, el elevadísimo consumo energético exosomático de los países enriquecidos. La situación obliga a representar medios y finalidades. El fin de la era del petróleo plantea nuevamente la necesidad de un cambio radical del modelo de sociedad y la derivada política anexa: el renacimiento de una izquierda ecologista capaz de recuperar la idea de una planificación democrática de la economía. El final de la era del petróleo barato puede ayudar a ello de la mejor forma concebible: con datos, con argumentaciones, con críticas, despejando falsedades y senderos irresponsables y señalando finalidades alcanzables que intentan responder documentadamente al reto, ya centenario y tan actual por otra parte, del gran científico, activista y filósofo Otto Neurath: "si el mundo aprendió en 1914 a planificar una economía de guerra, ¿por qué no aprendemos a planificar la economía para la paz y la libertad?".

Salvador López Arnal

Profesor de la UNED y del Instituto Puig
Castellar de Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona)

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL CODESARROLLO

Gómez Gil, Carlos

Bakeaz,
Bilbao, 2008,
227 páginas

LA ILEGITIMIDAD DE LOS CRÉDITOS FAD. TREINTA AÑOS DE HISTORIA

Gómez Gil, Carlos (dir), Gómez Olivé,
Dani (coord.), Tarafa, Gemma

Icaria Editorial/ Observatorio de la deuda en
la globalización,
Barcelona, 2008,
204 páginas

Los dos libros objeto de esta reseña destacan por la importancia de las temáticas tratadas, así como por el rigor, honestidad y compromiso con que los autores las abordan.

La cooperación para el desarrollo y todo lo que rodea a las migraciones son campos cuya problemática suscita un interés creciente en la opinión pública y cuyo tratamiento es objeto de arduos debates en el plano político. Sin embargo, muy pocas veces vemos análisis que aborden su verdadero calado, porque demasiado a menudo de lo que se trata es de edulcorar la acción de gobierno, tergiversando el contenido de sus prácticas, de pulsar la veta demagógica presentando los procesos de forma sesgada o de perseguir objetivos de parte. Por ello, se siente un soplo de cordura y aire fresco cuando se topa con publicaciones que tratan de desentrañar la complejidad de las cuestiones planteadas y de sopesar con escrúpulo los posibles tratamientos.

Es lo que sucede con los trabajos que nos ocupan. Sitúan la cooperación y la ayuda oficial al desarrollo (AOD) dentro del actual entramado de relaciones económicas internacionales, porque sólo en su seno puede captarse su significado, y asumen que de poco vale que se nos

llene la boca hablando de desarrollo si no comprendemos la génesis, reproducción y políticas que subyacen en el subdesarrollo. Su tesis es que sólo desde estas bases cobra pleno sentido la investigación de los destinatarios, tipologías y agentes de la AOD, así como el análisis del contenido real de las prácticas que se esconden detrás de los grandes enunciados. En este contexto, la experiencia reguladora de los distintos países puede ser comparada y las distintas opciones contrastadas.

Con una actitud similar se aproximan a las migraciones, contextualizándolas en la economía mundial de nuestros días, estableciendo su evolución sin pretender meter en el mismo saco distintas tipologías. No se pone el carro delante de los bueyes y se postula de forma explícita que difícilmente podremos captar sus efectos si no somos capaces de entender la diversidad de factores que las provocan. Su impacto afecta tanto a las sociedades emisoras de emigrantes -que, a la vez que ven como merma su fuerza de trabajo y se descompone su tejido social, se benefician de la recepción de las remesas que esos mismos emigrantes remiten a sus lugares de origen- como a las sociedades a las que afluyen los inmigrantes -aportando fuerza de trabajo y, al mismo tiempo, creando problemas de integración de diversa intensidad, que no pueden ni ocultarse con voluntarismo, ni exagerarse de forma intencionada. Las dificultades de regulación no desaparecen por el mero hecho de haber situado de forma consistente la problemática, pero es indudable que al hacerlo se facilita la comparación de experiencias y la evaluación de los posibles enfoques.

Tanto la cooperación para el desarrollo como los flujos migratorios son vectores que forman parte del entramado de relaciones internacionales. Más aún, ambos fenómenos enlazan el mundo de la abundancia con el mundo de la carencia, los países ricos con los países pobres, lo bien o mal llamado desarrollo con lo bien o mal llamado subdesarrollo. Siendo esto así, la tentación de combinarlos aparece como una posibilidad demasiado tentadora, ¿por qué no

pensar los flujos migratorios de forma integrada, en vez de analizar de forma separada su significado para emisores y receptores?, ¿por qué no dar un paso más e incorporar al proceso las posibilidades que lleva bajo el brazo la cooperación para el desarrollo?, ¿por qué no adoptar una postura optimista y pensar que, todo bien mezclado, nos puede ayudar a coevolucionar con beneficios recíprocos? Esta andadura es la que ha dado lugar al bienintencionado enunciado del codesarrollo.

Para mejor entender las características de su enfoque y antes de exponer la forma en la que los libros que comentamos abordan estas cuestiones, conviene detenerse un punto sobre algunos hábitos profundamente enraizados en la Economía.

Si preguntáramos en qué medida, habitualmente, los análisis tienden a concentrarse en los ámbitos determinantes del quehacer económico, nos veríamos obligados a reconocer que suele haber una ocultación de dimensiones imprescindibles para entender la forma de funcionamiento y reproducción de muchos procesos económicos, ya que, si la acotación que se practica no contiene en su seno las variables explicativas de su comportamiento, estaremos intentando investigar una realidad amputada de parte de los elementos esenciales que la constituyen. Es el caso de determinados procesos económicos en los que la dimensión histórica y la dinámica social son esenciales para su comprensión y por tanto no suprimibles en el curso del esfuerzo de estilización. En estos casos, existe el riesgo de que el esfuerzo que, con ese propósito, suele acompañar a los análisis, suponga un vaciamiento progresivo del discurso económico.

Es un hecho que hemos avanzado extraordinariamente en la complejidad y potencia del lenguaje matemático que utiliza la Economía, lo cual, indudablemente, es positivo. Pero la dificultad y belleza de las construcciones lógicas nada dicen del contenido económico que manejan. Desde el punto de vista sustantivo de la Economía, la lógica utilizada no deja de ser un

instrumento, importantísimo sin duda, pero el instrumento nunca puede convertirse en fin, ocultando que detrás de su apariencia se ha producido un vaciamiento del contenido económico del discurso.

En este contexto, los trabajos que nos ocupan pertenecen a la tipología que procura no perder de vista la complejidad de elementos que intervienen en las problemáticas que analizan, ni tampoco sacrificar información, que tratan de forma clara y sistemática, aunque a cambio renuncien a llevar a cabo ejercicios formales más sofisticados, sirviéndose del material empírico acumulado. Para algunos es una limitación, mientras que otros lo vemos como una aportación valiosa al esfuerzo de investigación colectivo.

En la *Ilegitimidad de los créditos FAD*, los autores sistematizan y ponen al día las investigaciones realizadas por Carlos Gómez durante más de una década en torno al principal y al más oscuro de los instrumentos de que se ha valido la AOD española, diseccionando su origen y evolución histórica para, desde esos fundamentos, argumentar la oposición que existe entre los créditos FAD y la verdadera ayuda al desarrollo. Proporcionan a continuación un documentado análisis comparativo de las posiciones de instituciones y gobiernos en torno a las ayudas que ligan su concesión a la adquisición de bienes y servicios suministrados por empresas del país donante, con todas las distorsiones que ese carácter "ligado" conlleva para el objetivo principal de cooperación al desarrollo. Su crítica a los FAD se refuerza con el estudio de la ilegitimidad de su origen que, a menudo, no sólo se encuentra de espaldas a su verdadero objetivo de coadyuvar al desarrollo sino que genera una hipoteca para su futuro, en forma de deuda externa que lleva en su frontispicio la afrenta de su ilegitimidad originaria, vinculada a la guerra, a la compra de armas, a la corrupción, a los intereses de las élites, a proyectos con negativos impactos sociales, económicos y ambientales o a las políticas de ajuste estructural impuestas por los organismos económicos internacionales. Siguiendo en la línea

de compromiso social que rezuma todo el trabajo, los autores terminan haciendo propuestas concretas y estableciendo los lineamientos sobre los que se debería plantear la necesaria reforma de los FAD.

En *Potencialidades y limitaciones del code-sarrollo*, Carlos Gómez se adentra con decisión y finura analítica en un terreno por demás proceloso porque, aunque el término codesarrollo esté en cierta boga, su contenido es ambiguo y bien sabemos que cuando se unen moda y polisemia en torno a una nueva expresión –casos similares podrían ser los de desarrollo sostenible o globalización- toda la cautela es poca para no acabar llevando el agua al molino inadecuado. El autor, consciente del riesgo, pone de relieve imprecisiones e interpretaciones sesgadas, proporciona una información rica y sistemática sobre la literatura, profundiza en fenómenos de especial relevancia como son las remesas de emigrantes, introduce la perspectiva de las mujeres, postula la participación de los propios inmigrantes como parte constitutiva del proceso, constata la presencia de iniciativas empresariales y expone una panoplia significativa de experiencias concretas, dejando que el lector elabore su propio juicio. Así, los múltiples impactos de los flujos migratorios se interconectan con las posibilidades que ofrece la cooperación, con el propósito de conseguir beneficios para todos los partícipes. Un propósito loable, si se aplicara con radical coherencia, pero que no cabe ignorar que se tiene que llevar a cabo dentro de una dinámica de relaciones económicas internacionales que no lo favorece, persiguiendo además el elusivo objetivo del desarrollo.

En resumen, estamos ante materiales altamente recomendables para quienes quieran entender la complejidad de la problemática de la cooperación para el desarrollo y de los actuales movimientos migratorios, trabajos que abordan sin concesiones las limitaciones que atraviesan las prácticas establecidas y las posibilidades de adoptar otras líneas que persigan objetivos clara y consecuentemente formulados. Lo hacen a sabiendas de que la Administración es

reticente a romper el entramado de inercias, intereses establecidos y pugnas burocráticas que rodean a estos problemas. Por su parte, la universidad debe valorar y sentirse honrada por la riqueza que aportan las investigaciones que realizan algunos de sus miembros, que deberían ser valiosísimos materiales que, combinados con tratamientos que incorporaran dimensiones adicionales -que la universidad está en condiciones de aportar- permitieran ejercer una función social crítica y propositiva en temáticas cruciales para el buen desenvolvimiento de nuestras sociedades. En la misma línea, para la sociedad civil, la trayectoria de análisis y compromiso de Carlos Gómez es a la vez nutriente y ejemplo.

Ángel Martínez González-Tablas
Catedrático de Economía Mundial de la
Universidad Complutense de Madrid y
Presidente del Consejo Asesor del CIP-
Ecosocial

Nº5 — EL PUNTO DE VISTA —
LE
MONDE *en español*
diplomatique

Crisis del siglo

SOLUCIONES PARA REFUNDAR LA ECONOMÍA

Características, causas,

antecedentes, soluciones y

conclusiones de la CRISIS

Nos encontramos ante la madre de todas las crisis.

Es una crisis sistémica.

Los terremotos que están sacudiendo
las Bolsas y los bancos durante estos meses
han precipitado el fin de una era del capitalismo.

La arquitectura financiera internacional se derrumba
Llega la Depresión y nada volverá a ser como antes.

Regresa el Estado. Y se intenta “refundar la economía”



100 páginas, 6 euros

Ignacio Ramonet, Susan George, René Passet, Pierre Bourdieu, Riccardo Petrella, Frédéric Lordon, Samir Amin, Serge Halimi, Bernard Cassen, Jacques Sapir, Howard Zinn, Richard Gott, Ibrahim Warde, Emir Sader, Moisés Naim, Vicenç Navarro, François Chesnais, Denis Duclos, Gérard Duménil, Dominique Lévy, Julio Sevarès, Eric Toussaint, Damien Millet, Alejandro Portes...

Puede adquirirlo en kioscos y librerías a partir del 17 de noviembre
o en nuestra página web:

www.monde-diplomatique.es

correo electrónico: admon@mondiplo.com - teléfono: 902.212.150 - fax: 902.12.160

análisis, opinión,
experiencias, protagonistas
y además

libros, cine, teatro, T.V. ,
arte, deporte, música
ciencia...

Revista CRÍTICA

Cada número un tema en profundidad

ÚLTIMOS NÚMEROS PUBLICADOS

- 950 Signos de esperanza
- 951 Cambio climático y sostenibilidad
- 952 Presente y futuro de los Derechos Culturales
- 953 VIH/SIDA, un pulso que hay que vencer
- 954 ¿Qué le pasa a la justicia?
- 955 ¿Consumidores o ciudadanos?
- 956 Las evaluaciones internacionales en educación, ¿mejoran el sistema educativo?



Revista Crítica. c/ Vizconde de Matamala 3, 28028 Madrid
Tel.: 91 725 92 00. Fax: 91 725 92 09
Correo electrónico: critica@revista-critica.com
web: www.revista-critica.com

suscripción 1 año
España 30 €
Extranjero 36 €

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN



Nombre y apellidos

Dirección

C.P. Ciudad

Provincia

Profesión

Modo de pago

Transferencia Giro
 Cheque Domic. Bancaria

Remite y abona esta suscripción

Dirección

Población

C.P. Provincia

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular cuenta

Nombre de Banco o Caja

Dirección del Banco

N.....C.P.....Población del Banco

Mire su talonario o libreta y cumplimente los datos de sus cuenta en su totalidad

Código cuenta cliente

Muy Srs. míos: ruego a Uds. se sirvan abonar, hasta nueva orden y con cargo a mi cuenta arriba indicada, los recibos que les presente Crítica

Firma

Fecha:.....de.....de 2008

PAPELES

DE RELACIONES ECOSOCIALES Y CAMBIO GLOBAL

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

PARA SUSCRIBIRSE

- ✓ ENVÍE ESTE CUPÓN AL FAX O LA DIRECCIÓN INDICADA A PIE DE PÁGINA
- ✓ ESCRIBA A NUESTRA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO **publicaciones@fuhem.es**
- ✓ LLAME AL TELÉFONO **91 431 03 46**

Nombre:
Dirección:
Población: C.P. Provincia:
País: Teléfono:
Correo electrónico:

PRECIO DE UN EJEMPLAR

- España** (envío gratuito) **9 €**
- Europa** **21 €**
- Resto del mundo** **28 €**

PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN (4 números)

- España** (envío gratuito) **28 €**
- Europa** **60 €**
- Resto del mundo** **88 €**

FORMA DE PAGO

- Domiciliación bancaria (preferible esta modalidad para suscriptores)

Titular de la cuenta:

ENTIDAD	OFICINA	CONTROL	NÚMERO CUENTA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Cheque a nombre de Fundación Hogar del Empleado
- Giro postal a nombre de Fundación Hogar del Empleado
- Contra reembolso
- Transferencia bancaria a:

Banco Popular: C/ O' Donnell, 22. 28009 Madrid.

Nº Cuenta: 0075 0251 11 0600005047

